



ANALES DEL CONCEJO

DE BOGOTÁ, D.C.

PROYECTOS DE ACUERDO

AÑO II N°. 3878 DIRECTOR(E): DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO ENE. 20 DEL AÑO 2025

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

| | |
|---|-------|
| PROYECTO DE ACUERDO NO 108 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO DISTRITAL 478 DE 2011 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL VEHÍCULO CLÁSICO Y ANTIGUO EN BOGOTÁ D.C.” Y SE INCLUYE DENTRO DEL FESTIVAL DE VERANO DE LA CIUDAD EL DESFILE DE AUTOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS “POR DONDE PASA UN CLÁSICO, DEJA UNA SONRISA” COMO UN EVENTO DE INTERÉS CULTURAL, TURÍSTICO”..... | 24449 |
| PROYECTO DE ACUERDO NO 109 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA RATIFICAR LA INCOMPATIBILIDAD DEL USO RESIDENCIAL CON EL USO DE SERVICIOS ESPECIALES”..... | 24463 |
| PROYECTO DE ACUERDO NO 110 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES PARA QUE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO ADOPTEN MEDIDAS MÍNIMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO FRENTE A LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS, SUBSIDIOS O CUALQUIER OTRA CLASE DE APOYO ECONÓMICO POR PARTE DEL DISTRITO”..... | 24483 |
| PROYECTO DE ACUERDO NO 111 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS, CORRESPONSABLES Y CUIDADORAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”..... | 24500 |
| PROYECTO DE ACUERDO NO 112 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA EL TRAZADO FERREO Y TURISTICO “INGENIERO EDUARDO RODRIGUEZ ARDILA” EN LA CIUDAD DE BOGOTA D. C.”..... | 24528 |
| PROYECTO DE ACUERDO NO 113 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS FAMILIAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”..... | 24535 |
| PROYECTO DE ACUERDO NO 114 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD RENOVADA (APS), “BOGOTÁ SALUDABLE” A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LAS Y LOS CIUDADANOS EN BOGOTÁ D.C.”..... | 24558 |
| PROYECTO DE ACUERDO NO 115 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON CORREDORES DE BICICLETAS LIBRES DE DIESEL Y DE EMISIONES PERJUDICIALES PARA LA SALUD DE CICLISTAS EN EL DISTRITO CAPITAL, Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”..... | 24573 |
| PROYECTO DE ACUERDO NO 116 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE FOMENTA LA SENSIBILIZACIÓN Y ADOPCIÓN EN LA SIEMBRA DE ÁRBOLES POR PARTE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BOGOTÁ”..... | 24579 |

PROYECTO DE ACUERDO NO 108 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO DISTRITAL 478 DE 2011 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL VEHÍCULO CLÁSICO Y ANTIGUO EN BOGOTÁ D.C.” Y SE INCLUYE DENTRO DEL FESTIVAL DE VERANO DE LA CIUDAD EL DESFILE DE AUTOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS “*POR DONDE PASA UN CLÁSICO, DEJA UNA SONRISA*” COMO UN EVENTO DE INTERÉS CULTURAL, TURÍSTICO”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto modificar el Acuerdo Distrital 478 de 2011 “Por medio del cual se establece la celebración del día del vehículo clásico y antiguo en Bogotá D.C.” incluyendo dentro del festival de verano de la ciudad el desfile de autos clásicos y antiguos “*Por donde pasa un clásico, deja una sonrisa*” como un evento de interés cultural, turístico, estableciendo los lineamientos para su organización y desarrollo.

Esta iniciativa busca preservar el patrimonio histórico de la ciudad a través de los autos y vehículos (clásicos y antiguos), fomentar el turismo cultural, fortalecer la identidad bogotana y generar espacios de integración ciudadana que contribuyan a la construcción de tejido social y al desarrollo económico local.

2. EXPOSICION DE MOTIVOS

Las capitales más importantes del mundo como Roma, Madrid, Nueva York, Londres, Ciudad de México, Buenos Aires, Berlín, entre otras, tienen un espacio exclusivo para la celebración de un Desfile de Autos Clásicos y Antiguos que es esperado año tras año por un público cada vez mayor dada la diversidad del espectáculo.

Otras ciudades de Colombia cuentan con este tipo de eventos. La Feria de las Flores de Medellín, cuenta con un espacio para el desfile de autos antiguos, demostrando cómo estos eventos pueden complementar y enriquecer las celebraciones tradicionales de la ciudad

A su vez, Cali, cuenta también con el desfile de autos clásicos durante su feria, el cual ha logrado consolidarse como un evento que celebra no solo el patrimonio automotriz sino también la identidad cultural de la ciudad.

De igual manera, Cartagena si tiene dentro sus eventos el desfile anual de autos clásicos durante las fiestas de independencia. El cual se ha convertido en uno de los eventos más esperados del calendario cultural de la ciudad.

Estas ciudades han demostrado que el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos representa una manifestación cultural que trasciende la simple exhibición de vehículos, convirtiéndose en un espacio de encuentro ciudadano que celebra la historia, promueve el turismo y dinamiza la economía local.

A pesar de todos estos casos de éxito, Bogotá, la capital de Colombia, con una población que excede los 8 millones de habitantes y con una oferta cultural tan amplia, no realiza este evento, teniendo una norma de ciudad.

Pensando en que la ciudad de Bogotá mantenga la intención de consolidarse como un epicentro cultural y económico de Colombia, la realización de estos eventos se considera necesaria.

Por esta razón, el 31 de agosto de 2024, se llevó a cabo el **primer** desfile de autos clásicos y antiguos de la ciudad, como uno de los eventos que tuvo Bogotá en el marco del festival de verano. Dicho evento demostró el potencial transformador de esta iniciativa. El desfile no solo logró convocar a más de 250 vehículos clásicos que recorrieron importantes vías de la ciudad, sino que también generó un impacto significativo en diversos sectores económicos y sociales.



En

respuesta a derecho de petición, el Instituto Distrital de Turismo – IDT- nos informó de los siguientes aspectos que consideramos fundamentales para soportar esta iniciativa.

El IDT sostiene que dicho evento resultó positivo para la ciudad desde todo punto de vista. De lo enunciado por el instituto destacamos los siguientes aspectos:

1. Impacto Económico y Turístico



El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos demostró ser un catalizador para la economía local, beneficiando múltiples sectores. Para empezar, es bueno indicar que, en su primera versión, el evento contó con la participación de diez representantes de cinco empresas operadoras de turismo, lo cual evidenció el interés del sector por incorporar este evento dentro de la oferta turística de la capital.

El sector hotelero registró la llegada de más de 40 visitantes

especializados provenientes de ciudades como Medellín, Bucaramanga, Santa Rosa de Cabal y Tenjo, quienes no solo participaron en el evento, sino que también disfrutaron de la oferta turística complementaria de la ciudad.

Los establecimientos comerciales y gastronómicos ubicados a lo largo del recorrido del desfile, que abarcó la Calle 63 entre carreras 68 y 7, Carrera 7 hasta la calle 134 y la calle 134 hasta la carrera 55, experimentaron un notable incremento en su actividad comercial. Este efecto multiplicador se extendió a zonas aledañas, beneficiando a centros comerciales, restaurantes y comercios minoristas que vieron aumentada su afluencia de clientes durante el evento.

El sector del transporte también se vio favorecido, con un incremento en la demanda de servicios de taxi, aplicaciones de movilidad y transporte público, demostrando cómo un evento cultural puede generar beneficios económicos transversales en la ciudad.

2. Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos representó un compromiso con la preservación del patrimonio histórico automotriz de la ciudad. Los vehículos participantes, que abarcan desde la década de 1930 hasta 1980, son testimonios rodantes de la evolución tecnológica, estética y social Bogotá y Colombia. Cada automóvil cuenta una historia va más allá de su valor material, convirtiéndose en elemento fundamental del patrimonio cultural móvil de la ciudad.



de
que
un

Además, el recorrido del desfile fue estratégicamente diseñado para incluir puntos emblemáticos de la ciudad como el Parque Salitre Mágico, el Parque Metropolitano Simón Bolívar, la Biblioteca Virgilio Barco, la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, el Museo Chicó y Usaquén, entre otros. Esta ruta no solo facilitó la apreciación de los vehículos clásicos, sino que también permitió a los asistentes reconocer y valorar el patrimonio arquitectónico y urbanístico de Bogotá.

De igual manera, el IDT reconoció que el desfile contribuyó a promover un ambiente de respeto, donde se evidenció el civismo y la interacción respetuosa entre asistentes, transeúntes y participantes.

3. Participación Ciudadana y Cohesión Social

En palabras del IDT, el evento demostró ser una herramienta efectiva para la promoción de la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social. La convocatoria logró reunir a propietarios de vehículos y sus familias, creando un espacio inclusivo que reafirma la imagen de Bogotá como una ciudad acogedora y multicultural. La participación de espectadores de todas las edades y condiciones sociales evidencia el carácter democrático y accesible del evento.



Espacio Público

La institucionalización del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos representa una materialización concreta del derecho a la ciudad, entendido como la facultad colectiva los habitantes urbanos a participar y apropiarse del espacio público. Este evento transforma temporalmente vías de la ciudad en un museo rodante accesible a todos los ciudadanos, democratizando el acceso a la cultura y el entretenimiento.

La organización del desfile, en colaboración con las autoridades competentes, garantizó una ruta exclusiva que favoreció tanto la seguridad como la comodidad de participantes y espectadores. Esta estrategia facilitó la convivencia armónica entre los diferentes actores viales, transformando la ciudad en un espacio de encuentro y construcción colectiva.

4. Derecho a la Ciudad y



de

las



El desfile contribuye a la construcción de una ciudad más incluyente y participativa, donde el espacio público se convierte en escenario de encuentro y celebración colectiva. La apropiación temporal de las calles para un evento cultural fortalece el sentido de pertenencia y demuestra cómo la infraestructura urbana puede ser utilizada para propósitos que trascienden la movilidad cotidiana.

Finalmente, es importante señalar que, si bien no se tiene un número de asistentes, ni el impacto económico del desfile, el IDT informó que *“debido a la relevancia e interés que ha cobrado el Desfile de Autos Clásicos en 2024, se ha decidido priorizar la implementación de herramientas de medición especializadas y la asignación de un equipo de campo para edición de 2025. Esto permitirá recolectar datos valiosos sobre el desempeño del evento, lo que facilitará su análisis y contribuirá a su consolidación como una actividad relevante para la ciudad”*

Como se puede observar, este primer desfile resultó altamente provechoso la ciudad y para el distrito pues *“se consolidó como una plataforma estratégica y de promoción para reforzar posicionamiento de la nueva narrativa **Ciudad: Bogotá, Tu Casa / Bogotá, Your Home**”, razón por la cual, se busca, medio de este acuerdo reconocerlo como evento de interés cultural y turístico y, también, que sea parte del festival de verano.*



para
el
por
un

En ese orden de ideas, tal y como lo señaló el IDT, esperamos que el mismo tenga una fecha clara dentro del festival de verano, esto permitirá contar mayor asistencia de público y, también, que la planificación del evento goce de mayor articulación entre las diferentes entidades distritales.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El presente proyecto de acuerdo se encuentra alineado con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), demostrando su compromiso con la agenda global de desarrollo sustentable:

ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos contribuye directamente a la meta 8.9 que busca "elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales". El evento genera oportunidades económicas para diversos sectores de la ciudad, desde el turismo hasta el comercio local, fomentando un desarrollo económico inclusivo y sostenible.

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

La iniciativa se alinea con la meta 11.4 que propone "redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo". Al preservar y celebrar el patrimonio automotriz de la ciudad, el evento contribuye a la conservación de la memoria histórica y la identidad cultural de Bogotá.

ODS 12: Producción y Consumo Responsables

El proyecto apoya la meta 12.b que busca "elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos

de trabajo y promueva la cultura y los productos locales". La institucionalización del desfile como parte del Festival de Verano representa una apuesta por el turismo cultural sostenible.

3. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

- Acuerdo Distrital 478 de 2011 "Por medio del cual se establece la celebración del Día del Vehículo Clásico y Antiguo en Bogotá, D.C."
- Proyecto de Acuerdo 362 de 2008 "Por medio del cual se institucionaliza el desfile de autos clásicos y antiguos, de carreras y tuning en el cumpleaños de Bogotá"

4. MARCO JURÍDICO

Constitución Política de Colombia

Artículo 70 Establece el deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades. Este mandato constitucional respalda la institucionalización de eventos culturales como el Desfile de Autos Clásicos, que democratizan el acceso a expresiones culturales y patrimoniales.

Artículo 71 Consagra la libertad en la búsqueda del conocimiento y la expresión artística, principio que sustenta la promoción de eventos que celebran el patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones, incluyendo el patrimonio automotriz.

Artículo 72 Establece que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, disposición que fundamenta la institucionalización de eventos que preservan y celebran el patrimonio cultural móvil.

Leyes Nacionales

Ley 397 de 1997 - Ley General de Cultura Define los principios fundamentales y definiciones sobre el patrimonio cultural, sus manifestaciones y la obligación del Estado en su preservación. Proporciona el marco general para la protección y promoción de expresiones culturales como los desfiles de autos clásicos.

Ley 1185 de 2008 Modifica la Ley General de Cultura y establece procedimientos para la salvaguardia y sostenibilidad del patrimonio cultural, aplicable a la preservación del patrimonio automotriz.

Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana Establece el marco normativo para la realización de eventos en el espacio público, garantizando la seguridad y la convivencia durante su desarrollo.

Normas Distritales

Acuerdo 257 de 2006 Define la estructura, organización y funcionamiento del Distrito Capital, estableciendo las competencias de las entidades responsables de la organización y ejecución de eventos culturales.

Decreto 081 de 2019 Establece la Política Pública Distrital de Cultura Ciudadana, marco dentro del cual se desarrollan eventos que promueven la apropiación del espacio público y el fortalecimiento de la identidad cultural.

5. IMPACTO FISCAL

Como lo establece el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es obligatorio esclarecer el impacto fiscal que tienen las normas sobre las finanzas públicas, lo que significa medir la carga fiscal que estas pueden tener tanto en el presupuesto anual y en el Marco Fiscal de mediano Plazo que deben observar las diferentes entidades del Estado. Ahora bien, esto no significa que los instrumentos normativos que pueda aprobar el Concejo de Bogotá estén limitados por este hecho, pues como lo aclara la Sentencia C-911 de 2007, el impacto fiscal no se puede convertir en una limitación absoluta para que las corporaciones públicas cumplan con sus funciones legislativas o de orden normativo. En este sentido, la sentencia establece:

En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

(...) el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.

Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto del proyecto y cómo este se alcanzará, se considera que no se genera impacto fiscal y los recursos con los que cuentan las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito son suficientes para su puesta en marcha.

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993:

“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente”.

Por su parte, el artículo 13, del mismo decreto, señala:

“ARTICULO 13. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

Por lo tanto, el Concejo de Bogotá, D.C., cuenta con facultades y competencia para dictar las normas introducidas mediante el presente Proyecto de Acuerdo.

7. CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto y de conformidad con el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 2019, presento a consideración el presente proyecto de acuerdo, para su trámite y aprobación.

Respetuosamente,

H.C. ANDRÉS BARRIOS BERNAL

Autor

PROYECTO DE ACUERDO NO 108 DE 2025

PRIMER DEBATE

“Por el cual se modifica el Acuerdo Distrital 478 de 2011 “Por medio del cual se establece la celebración del día del vehículo clásico y antiguo en Bogotá D.C.” y se incluye dentro del festival de verano de la ciudad el desfile de autos clásicos y antiguos “*Por donde pasa un clásico, deja una sonrisa*” como un evento de interés cultural, turístico”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Modifíquese el título del Acuerdo 478 de 2011, el cual quedará así:

Por medio del cual se establece el desfile de autos clásicos y antiguos “*Por donde pasa un clásico, deja una sonrisa*” como un evento de interés cultural, turístico en el marco del festival de verano de Bogotá D.C.”

ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 1 del Acuerdo 478 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 1 CONMEMORACIÓN: El desfile de autos clásicos y antiguos en Bogotá “*Por donde pasa un clásico, deja una sonrisa*” se celebrará el último fin de semana de agosto como parte de los eventos del festival de verano que se realice en la ciudad.

ARTÍCULO 3. Modifíquese el artículo 2 del Acuerdo 478 de 2011, el cual quedará así:

ARTÍCULO 2. – ARTICULACIÓN- La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría Distrital de Movilidad y el Instituto Distrital de Turismo, garantizará la participación y articulación interinstitucional efectiva para la realización del evento.

ARTÍCULO 4.- VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 109 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA RATIFICAR LA INCOMPATIBILIDAD DEL USO RESIDENCIAL CON EL USO DE SERVICIOS ESPECIALES”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****1.OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El pasado 29 de diciembre de 2021, la alcaldesa mayor de Bogotá adoptó la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., a través del Decreto 555 de 2021. Dicho Decreto, dejó la puerta abierta para que cierto tipo de servicios, entre ellos, los especiales, se ubiquen en las áreas de Proximidad o zonas residenciales. Esto no solo representa una disparidad, sino que representa un atentado a la tranquilidad de cientos de ciudadanos.

Por ello, el objeto de este Acuerdo es excluir los servicios especiales (los que corresponden a establecimientos cuya actividad principal está destinada a público adulto, caracterizados principalmente por cualquiera de estas actividades: a) el expendio de bebidas embriagantes para el consumo dentro del establecimiento; b) el servicio de estancia por horas en residencias o moteles (no inscritos en el Registro Nacional de Turismo), c) encuentros sexuales, incluidas las actividades sexuales pagadas; d) la proyección de contenido sexual explícito no apto para menores de edad, ni que reproduzca, utilice o promueva contenido alusivo a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, trata de personas y explotación sexual; e) la prestación de servicios donde se ejecuten música o ruidos que puedan afectar la tranquilidad) de las áreas de proximidad en Bogotá.

2. JUSTIFICACIÓN

Tradicionalmente, las zonas destinadas para la diversión y el esparcimiento han ido en contravía de los principios de bienestar y paz en muchas de las zonas residenciales de la ciudad. A diario, se denotan casos de violencia, robos y constantes alteraciones al orden público como consecuencia de esto. Esta problemática ha sobrepasado las competencias

de muchas de las instituciones que velan por mantener el orden y restaurar la tranquilidad, lo que conduce a pensar que la única forma de superar esta situación es a través de la declaración y ratificación de incompatibilidad con la norma urbana.

En el 2019, el alcalde Enrique Peñalosa presentó ante el Concejo de Bogotá la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bogotá. Este POT buscaba que el 30% de los predios que tenían un uso múltiple pasarán a ser residenciales. Y para proteger las áreas residenciales de las zonas donde hay polígonos de alto impacto se dividieron en dos categorías, dependiendo de la mezcla de usos a permitir y la colindancia con predios de actividad residencial, así: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019):

Polígonos de alto impacto A: son los de Chapinero, Primero de Mayo, Restrepo y Venecia, lugares donde se permiten comercios asociados a la venta y consumo de licor; además moteles, bodegas de reciclaje, talleres de vehículos y autopartes. Son zonas donde no es predominante el uso residencial (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019).

Los Polígonos de Alto Impacto B: Estos polígonos están localizados en el Parque de la 93, Zona T, Galerías, Modelia, Bosa Central y Calle 116. Allí no se permiten moteles, bodegas, talleres de vehículos y autopartes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019). Dicho POT no permitía el funcionamiento de bares en zonas residenciales, por lo que se propuso que los bares de hasta 80m² se localizaran frente a malla vial arterial (grandes avenidas), o sobre malla vial intermedia (vías principales), en los corredores comerciales consolidados (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019).

Por su parte, los bares de hasta 250 m² podrían ubicarse al interior de los polígonos de Áreas de Desarrollo Naranja (zonas con usos múltiples) y en las zonas industriales que no colinden con zonas residenciales. A los establecimientos con más de 250m² se les permitiría funcionar exclusivamente adentro de los polígonos de alto impacto y en las zonas industriales que no limiten con zonas residenciales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019).

Incluso, el ex secretario Distrital de Planeación, Andrés Ortiz Gómez, enfatizó que “el nuevo POT busca reglamentar la actividad de los bares exigiendo el cumplimiento de unas acciones que garanticen la mitigación de los impactos en los sectores propicios para tal actividad, como vías comerciales consolidadas o sobre vías arteriales e intermedias, zonas de uso múltiple y zonas industriales. No, sobre vías locales” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019).

Como es de conocimiento general, el POT presentado por el ex alcalde Enrique Peñalosa no fue aprobado por el Concejo de Bogotá, y ahora el Decreto 555 se convirtió en la nueva norma que regirá la ordenación del territorio durante los próximos 12 años.

Así pues, y aunque parezca totalmente lógico que los bares no deban mezclarse con las viviendas, el Artículo 243 del Decreto 555 de 2021, se encargó de abrir la puerta a que los servicios especiales se ubicaran en las áreas de Proximidad. Esto, como se ha mencionado anteriormente, resulta ser un atentando directo para la paz, tranquilidad y descanso de los bogotanos.

3. MARCO LEGAL

Del nivel Constitucional

ARTICULO 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Jurisprudencia

Sentencia No. T-112/94

TEMA: Derecho a la tranquilidad e intimidad en el lugar de habitación, cuando el sector en donde se encuentra ubicada ha sido declarada como una zona residencial.

I. ANTECEDENTES.

A. Las pretensiones.

La peticionaria, en ejercicio de la acción de tutela, formula las siguientes pretensiones:

Que, "se declare la zona de la carrera 5 entre calles 28 y 26 donde se encuentra ubicado el Conjunto Residencial, como Zona Residencial, en la que el uso principal es la vivienda. Situación existente en 1968, año en el cual se expidió el decreto No. 762 de agosto 19, por medio del cual el Alcalde Mayor de Bogotá, D.E. en uso de sus atribuciones legales, reglamenta el conjunto, situación que a todas luces debe ser concordante con la zonificación y definición contemplada en el artículo 335 del Acuerdo 6 de 1990, y por ende con el uso residencial actual, el cual corresponde a la vivienda de cerca de trescientas familias".

Que, "se ordene a quien corresponda la revocación de las licencias de funcionamiento expedidas por la administración, de los establecimientos nocturnos ubicados en el citado sector, por cuanto el desarrollo de sus actividades atenta contra mi seguridad y mi vida y entorpecen la paz y tranquilidad de las familias residentes que habitamos el sector".

Que, "se ordene a quien corresponda la clausura de los establecimientos nocturnos ubicados en el citado sector, que no disponen de las respectivas licencias de funcionamiento, por cuanto el desarrollo de sus actividades atenta contra mi seguridad y mi vida y entorpecen la paz y tranquilidad de las familias residentes que habitamos el sector".

Que, "se prohíba a la Administración Distrital, expedir nuevas licencias para el funcionamiento de establecimientos comerciales, cuyo uso no sea concordante con el uso residencial, principal predominante del sector".

Que, "se ordene a quien corresponda, se reglamente y limite el horario de los establecimientos comerciales, que, siendo compatible con el uso residencial del sector, permanecen abiertos hasta altas horas de la madrugada".

B. Los hechos.

La señora Aurora Pachón de Reyna presenta como hechos que sustentan sus pretensiones, los siguientes:

"1. Soy residente desde hace cerca de 19 años del apartamento antes citado, el cual pertenece a la torre A del denominado Conjunto Residencial El Parque, lugar de residencia de cerca de trescientas familias".

"2. Al trasladarme al apartamento de mi propiedad, en el año de 1974, localizado en el segundo piso del edificio, con amplio frente sobre la carrera quinta, esta zona de uso residencial llenaba las condiciones necesarias para disfrutar de los derechos ciudadanos establecidos por la Constitución, de los cuales se disfrutaba plenamente (día y noche), tanto dentro de la propiedad privada y como la propiedad comunal, esto con las mejores condiciones de seguridad y derecho a la vida".

"3. En el transcurso del tiempo, debido a los usos y actividades que la Administración Distrital y la Alcaldía Menor de Santa Fe han venido permitiendo en el sector y específicamente en la acera occidental de la carrera quinta, el conjunto y mi apartamento se han convertido en zonas de alto riesgo tanto a nivel de la comunidad en su conjunto, como a nivel de mi persona. Es así como los días jueves, viernes y sábados en la noche y a altas horas de la madrugada no faltan los escándalos y problemas graves, originados en el tipo, tamaño y uso de los establecimientos que la administración distrital ha venido permitiendo, los cuales se clasifican dentro de los denominados "Venta de Servicios y de Alto Impacto Social, urbanístico y Ambiental", incompatibles a todas luces con el uso residencial del sector".

"4. El hecho más grave registrado, directamente contra mi propiedad, mi persona y mi vida, ocurrió en noviembre pasado, cuando afortunadamente me encontraba de vacaciones y por ende no había persona en mi apartamento. En uno de los escándalos y problemas ocurridos, no sé, si en uno de los establecimientos o en el espacio público de la carrera quinta, un tiro de arma de fuego entró por la ventana de mi alcoba, golpeó el techo y la pared y terminó en mi cama".

"5. El anterior hecho fue denunciado por la Administración del Conjunto a la Alcaldía Menor correspondiente y posteriormente a mi regreso de vacaciones, personalmente lo hice ante la autoridad competente, Policía Metropolitana de Bogotá, Quinta Estación, sin tener hasta el momento, respuesta alguna diferente de una citación a la Inspección

Tercera Distrital de Policía donde solicité se hagan las pruebas correspondientes. Aún no he cambiado el cristal de la ventana, ni reparado el techo y pared y además conservo el pedazo de plomo encontrado en mi cama".

"6. En el transcurso de este año de 1993, el problema ha sido aún mayor, encontrándome desprotegida y privada del disfrute de mis derechos fundamentales y en alto riesgo de perder mi integridad y mi vida, esto en razón de los frecuentes tiroteos que se presentan en el lugar, principalmente de los jueves, viernes y sábados en la noche y a altas horas de la madrugada. No conozco a fondo los hechos ocurridos solamente el escándalo y los tiros, esto en razón de que cuando esto ocurre, con el fin de protegerme salgo de mi alcoba y me refugié en uno de los baños del apartamento los cuales no tienen ventanas sobre la carrera quinta. Por lo anterior, sé solamente, que además de los escándalos se presentaron tiros de arma de fuego en la zona localizada frente a los ventanales de mi apartamento y alcoba".

"7. Los últimos insucesos de alto impacto y a todas luces han atentado contra mi paz y tranquilidad ocurrieron en la madrugada del día domingo 18 de julio, el viernes 30 de julio en la noche y el domingo primero de agosto en la madrugada".

"8. Siento por todo lo anterior que estoy altamente amenazada, en mi hogar, en mi tranquilidad durante las horas nocturnas de descanso y en mi vida, por tanto, se están violando, con anuencia de la Administración, mis derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, y a los cuales tenemos derecho todos los ciudadanos. Todo lo anterior es debido a riñas que se originan por los establecimientos nocturnos que el Estado en la persona de la Administración Distrital ha permitido que funcionen, en zonas residenciales donde habitamos familias y en locales no aptos para tal fin".

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR las sentencias de los Juzgados 20 Civil Municipal y 27 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, de fecha 20 de agosto y 27 de septiembre de 1993, en las cuales se resolvió denegar por improcedente la tutela impetrada.

SEGUNDO: CONCEDER la tutela a la señora Aura Pachón Reyna de sus derechos a la tranquilidad y a la intimidad.

TERCERO: ORDENAR tanto al Alcalde Mayor de Santa Fé de Bogotá D.C., como al Alcalde Local de Santa Fe Localidad III, que procedan a impedir el funcionamiento de los establecimientos comerciales que carecen de licencia, y abstenerse de conceder nuevas licencias de funcionamiento, y de renovar las que se encuentren vencidas o las que se hallen vigentes, en cuanto su destinación no sea compatible con el uso residencial de la zona, conforme a las reglamentaciones que sobre el particular existan.

CUARTO: LIBRAR comunicación al Juzgado Veinte (20) Civil Municipal de Santa Fé de Bogotá, a efectos de que notifique esta sentencia a las partes y adopte las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo aquí dispuesto.

Del nivel nacional

LEY 388 DE 1997.

ARTÍCULO 1º.- Objetivos. La presente Ley tiene por objetivos:

1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental.
2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.
3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres.
4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación,

en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política.

LEY 1454 DE 2011

ARTÍCULO 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la organización político-administrativa del territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político-administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la organización territorial.

Del nivel Distrital

ACUERDO 20 DE 1995

Artículo 1º.- Adoptase el Código de Construcción del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, definido por el siguiente articulado en el cual se fijan sus políticas generales, su articulado, su alcance, se establecen mecanismos para su aplicación, se fijan plazos para su reglamentación por parte de la Administración Distrital y se señalan mecanismos para su actualización y vigilancia.

Artículo 2º.- El Código de construcción es uno de los elementos constitutivos del Plan General de Desarrollo Integrado del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, en sus aspectos del desarrollo físico, por consiguiente, su desarrollo y aplicación se harán mediante un proceso de planeación permanente, orientado a coordinar las acciones de los sectores públicos y privado dentro de un estricto criterio de justicia social.

Artículo 3º.- El presente Código de construcción completa las políticas y normas sobre el desarrollo urbanístico. Por lo tanto, su interpretación y aplicación deben realizarse teniendo en cuenta capitalmente las normas vigentes sobre los siguientes aspectos los cuales no son modificaciones en manera alguna por el presente Código.

- a. Perímetro de servicios públicos y posibilidad técnica de prestación de servicios.
- b. Zonificación y reglamentación de usos de la tierra.
- c. Afectaciones de la tierra por Plan Vial y Planes Maestros de Servicios.
- d. Las normas y reglamentaciones específicas para cada zona de la ciudad.
- e. Las normas y procedimientos sobre los procesos de urbanización, apropiación de proyectos licencias para su ejecución.

DECRETO 765 DE 1999

Artículo 1º. *Ámbito de Aplicación.* Para la aplicación del presente Decreto se establecen dos áreas de influencia del Aeropuerto Internacional El Dorado, con base en la delimitación concertada entre le Departamento Administrativo de Planeación Distrital, El DAMA y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, los cuales aparecen delimitadas en el plano anexo y se relacionan a continuación:

(...)

Artículo 3º. *Usos permitidos en área de influencia aeroportuaria.* Se permitirán únicamente los siguientes usos:

USO INDUSTRIAL: Se permite el uso industrial en las mismas condiciones en que lo autoricen los Decretos de asignación de tratamiento, con excepción de los polígonos de zonificación con tratamiento de desarrollo, en los que dicho uso tendrá que adecuarse a las características de la industria que más adelante se establecen. Se consideran prohibidos en el sector los usos que impliquen la fabricación y almacenamiento de explosivos.

USO COMERCIAL: Se permite la actividad comercial en las mismas condiciones en que la autoricen los Decretos de asignación de tratamiento, siempre que se cumpla con las restricciones de altura impuestas por la Aeronáutica Civil.

DECRETO 619 DE 2000. “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital.”

DECRETO 1110 DE 2000. "Por el cual se adecua el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., según lo dispuesto en la resolución 0621 de 2000 dictada por el Ministerio del Medio Ambiente"

DECRETO 469 DE 2003. "Por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C."

DECRETO 190 DE 2004. "Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003."

(...)

Subcapítulo 2. Subprograma de Fortalecimiento y Consolidación de Barrios Residenciales

Artículo 291. Objetivo general (artículo 282 del Decreto 619 de 2000)

El subprograma tiene por objeto identificar las unidades barriales existentes para definir las acciones de cualificación del espacio público y los equipamientos, y el fortalecimiento de los esquemas de organización ciudadana que permitan su consolidación y recuperación como núcleos básicos de calidad de vida urbana.

Mediante la aplicación de incentivos y sanciones se propende por la protección de las áreas residenciales que se conservan y la recuperación de los barrios que han perdido sus condiciones de habitabilidad.

Artículo 292. Objetivos específicos (artículo 283 del Decreto 619 de 2000).

1. Proteger las áreas residenciales que poseen buenas condiciones urbanísticas y ambientales.
2. Fortalecer y mejorar las condiciones de habitabilidad en las áreas en las que el uso residencial se ha conservado o la mezcla de usos no ha causado desajustes graves o irreversibles
3. Reconocer el fenómeno de la vivienda con actividad económica, generando las condiciones para una implantación adecuada que garantice la permanencia del uso residencial.

Artículo 293. Metas (artículo 284 del Decreto 619 de 2000).

El programa propone mantener las condiciones actuales de aproximadamente 4.600 hectáreas urbanas en las que hoy existen barrios residenciales y atender aproximadamente

8.000 hectáreas urbanas de los barrios en los cuales se han presentado cambios que han deteriorado los mismos.

Las anteriores acciones se aplicarán en las Unidades de Planeamiento Zonal tipo 2 y 3, las cuales agrupan sectores consolidados de estratos medios y altos con uso residencial predominante o que anteriormente hayan sido de uso residencial.

Artículo 294. Estrategias (artículo 285 del Decreto 619 de 2000).

Para el cumplimiento de los objetivos y metas previstas se adoptan las siguientes acciones estratégicas:

1. De planeamiento y ordenamiento urbano

- a. Adoptar la escala de planeamiento y gestión en que se constituyen las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) para definir los requerimientos de equipamientos, espacio público, vías, entre otros.
- b. Caracterizar los sectores residenciales para definir acciones de carácter urbano y las de carácter colectivo requeridas para la recuperación y consolidación de las unidades de vivienda.
- c. Proponer una normativa urbana comprensible y reconocible que permita regular los usos urbanos mejorando las condiciones de los barrios y fortaleciendo su carácter residencial.
- d. Apoyar los procesos de reconocimiento de las transformaciones de los barrios o conjuntos de barrios mediante la aplicación de normativas específicas que permitan la compensación a la ciudad para mantener las calidades urbanas.

2. De participación y gestión

- a. Generar los espacios de participación ciudadana para los procesos de toma de decisiones en relación con la aplicación de la normativa urbana que incentive los procesos de convivencia y las condiciones para el adecuado control de aplicación de la misma.
- b. Apoyar los esquemas de comunicación e información ciudadana en relación con los temas de interés del barrio.
- c. Aplicar instrumento de gestión y coordinación institucional que apoyen las iniciativas
- d. privadas de los ciudadanos en relación con el mejoramiento de sus barrios.

(...)

Artículo 347. Normas para los usos de comercio y servicios (artículo 336 del Decreto 619 de 2000).

1. Comercio Metropolitano y Urbano. El desarrollo del comercio metropolitano, de más de 6.000 M2 de área de ventas, y el Urbano con área de ventas de más de 2000 M2 y hasta 6000 m2, se sujetará a un Plan de Implantación. Se permite su localización en las zonas pertenecientes al Área de Actividad de Comercio y Servicios, en las Areas de Actividad Industriales, y en ejes viales de la siguiente manera:

- a. (Modificado por el artículo 231 del Decreto 469 de 2003). El comercio metropolitano se permite en determinados tramos de ejes de la malla arterial V - 0 y V - 1, señalados en el cuadro anexo No. 3 "listado de tramos de ejes viales para la localización de comercio metropolitano", cumpliendo con las condiciones definidas en el cuadro anexo No.2. "Clasificación de usos del suelo". No se permite en las áreas de orejas de las intersecciones viales

El comercio urbano se permite en ejes de la malla arterial V-2 y V-3, cumpliendo las condiciones definidas en el Cuadro anexo N° 2. " Clasificación de usos del suelo".

2. (Modificado por el artículo 231 del Decreto 469 de 2003). Comercio Zonal y Vecinal. El comercio zonal con área de hasta 2000 M2 y el comercio vecinal clase A de hasta 500 m2 de área de ventas, se permiten en manzanas con otros usos, localizadas en las Zonas de Comercio y Servicios y en las áreas delimitadas de comercio y servicios pertenecientes a Zonas Residenciales, cumpliendo las condiciones señaladas en el Cuadro Anexo No. 2. - Clasificación de usos del Suelo - y en la ficha reglamentaria.

El comercio vecinal clase B de hasta 60 m2 de área de ventas, se permite en las zonas residenciales de conformidad con lo dispuesto en las fichas normativas de cada sector normativo.

3. Los servicios de alto impacto de diversión y esparcimiento de escala metropolitana ligados al trabajo sexual, clasificados como Wiskerías, Strep-tease, casas de lenocinio y similares, deben cumplir con las siguientes condiciones desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico:

- a. El establecimiento deberá cumplir con las normas urbanas referentes a los usos del suelo y edificabilidad. Para el desarrollo de los usos permitidos se deberá obtener la correspondiente licencia de construcción en sus diferentes modalidades o el reconocimiento.

- b. Cuando en la ficha reglamentaria se establezca una zona para el desarrollo de servicios de alto impacto y en la misma zona existan usos dotacionales: educativos y de culto, con anterioridad a la entrada en vigencia del respectivo decreto de la UPZ, primará la presencia de dichos usos dotacionales: educativos y de culto y, por lo tanto, no se permitirá el desarrollo de servicios de alto impacto en el área de influencia determinada por la ficha.
- c. Los establecimientos destinados al Trabajo Sexual y actividades ligadas deberán funcionar en estructuras diseñadas y construidas para el uso o adecuaciones para los mismos. Se permitirá el desarrollo de vivienda para el celador o administrador, la cual debe funcionar como una unidad privada independiente.
- d. Los establecimientos prestadores de servicios turísticos, presentes en la zona donde se permitan los servicios de alto impacto de diversión y esparcimiento de escala metropolitana (Wiskerías, streap-tease y casas de lenocinio o similares), deben cumplir con los requisitos establecidos por la Ley 300 de 1996 "Por la cual se expide la Ley de Turismo y se dictan otras disposiciones".

Parágrafo 1: Las condiciones relativas al funcionamiento y ejercicio del trabajo sexual en cuanto a salubridad, saneamiento, bienestar social, seguridad y medio ambientales serán las contenidas en el Decreto Distrital 188 de 2002 y las demás normas que lo complementen o modifiquen.

Parágrafo 2: La ficha normativa correspondiente hará la delimitación precisa de los subsectores en las áreas de actividad señaladas como Zona Especial de Servicios de Alto Impacto y definirá la asignación específica de usos principales, complementarios y restringidos y las normas de edificabilidad correspondientes en cada uno de ellos.

DECRETO 555 DE 2021. Artículo 1. Adopción de la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.

El presente acuerdo adopta la revisión general de los contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá Distrito Capital. Los documentos anexos y la cartografía se encuentran integrados en este acto administrativo.

Parágrafo. Las disposiciones del presente Acuerdo aplican para toda la jurisdicción del Distrito Capital en sus suelos urbano, rural y de expansión.

(...)

Artículo 233. Usos permitidos en Bogotá. Los usos que se mencionan a continuación se permiten en el suelo urbano y de expansión urbana del Distrito Capital:

(...)

4. *Usos comerciales y de servicios.* Es la destinación asignada al suelo para el conjunto de actividades económicas en las cuales se dé el intercambio de bienes y servicios. Según el área construida en el uso se tipifican, así:

a. Comercial y de servicios Tipo 1. Edificaciones o espacios que alberguen el uso de manera aglomerada o individual con un área construida menor a 500 m².

b. Comercial y de servicios Tipo 2. Edificaciones o espacios que alberguen el uso de manera aglomerada o individual con un área construida entre 500 m² y 4.000 m².

c. Comercial y de servicios Tipo 3. Edificaciones o espacios que alberguen el uso de manera aglomerada o individual con un área construida mayor a 4.000 m².

Artículo 234. Clasificación de usos comerciales y de servicios. Los usos de comercio y servicios se clasifican así:

(...)

5. *Servicios Especiales.* Corresponden a los establecimientos cuya actividad principal está destinada a público adulto, caracterizados principalmente por cualquiera de estas actividades: a) el expendio de bebidas embriagantes para el consumo dentro del establecimiento; b) el servicio de estancia por horas en residencias o moteles (no inscritos en el Registro Nacional de Turismo), c) encuentros sexuales, incluidas las actividades sexuales pagadas; d) la proyección de contenido sexual explícito no apto para menores de edad, ni que reproduzca, utilice o promueva contenido alusivo a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, trata de personas y explotación sexual; e) la prestación de servicios donde se ejecuten música o ruidos que puedan afectar la tranquilidad.

(...)

Parágrafo 2. Las actividades sexuales pagadas corresponden a una actividad y no constituyen un uso del suelo; para su desarrollo deberá acogerse a lo dispuesto en la Ley 902 de 2004 y el Decreto Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 240. Áreas de Actividad del suelo urbano y de expansión urbana. En función de la estructura urbana definida en el presente Plan, el suelo urbano y de expansión se zonifica en tres (3) áreas de actividad, las cuales se identifican en el Mapa n.º CU-5.2 “Áreas de actividad y usos de suelo” del presente Plan, así:

1. *Área de Actividad Estructurante.* Corresponde a las zonas interconectadas a través de corredores de alta y media capacidad con el resto de la ciudad, y en las cuales se permite mayor intensidad en la mezcla de sus usos.

Se compone de dos zonas:

- a. Zona receptora de vivienda de interés social. Corresponde a las áreas que por sus condiciones de soportes urbanos buscan la mezcla social del hábitat, incentivando la producción de vivienda de interés social.
- b. Zona receptora de actividades económicas. Comprende a las áreas donde se busca incentivar la localización de actividades económicas y nuevos empleos.

2. *Área de Actividad de Proximidad.* Corresponde a las zonas cuyo uso principal es el residencial, destinadas a la configuración de tejidos residenciales y socioeconómicos locales que permiten el acceso y cercanía de su población a los servicios y al cuidado inmediato requerido, y en el cual se promueve el incremento de la vitalidad urbana, la interacción social y la vida en comunidad, salvaguardando la calidad residencial de los territorios que la conforman.

Se compone de dos zonas:

- a. Zona generadora de soportes urbanos. Corresponde a las áreas que por sus condiciones tienen el potencial de aportar al equilibrio territorial con la generación de soportes urbanos.
- b. Zona receptora de soportes urbanos. Corresponde a las áreas más deficitarias en soportes urbanos densamente pobladas, donde se requiere consolidar los tejidos socioeconómicos locales y mejorar los entornos urbanos.

3. *Área de Actividad de Grandes Servicios Metropolitanos.* Corresponde a las áreas destinadas a la localización de usos que promueven el desarrollo económico, necesarias para el funcionamiento de la ciudad, que aportan servicios para todos los habitantes, albergan aglomeraciones de servicios sociales especializados, y permiten mayor intensidad de los usos económicos.

Artículo 242. Usos principales, complementarios y restringidos. Son usos principales, complementarios y restringidos los siguientes:

1. Uso principal: Uso predominante, que determina el destino urbanístico del Áreas de Actividad y, como tal, se permite en la totalidad del área, zona o sector objeto de reglamentación.
2. Uso complementario: Aquel que contribuye al adecuado funcionamiento del uso principal y se permite en los lugares que señale la norma específica.
3. Uso restringido: Uso que no es requerido para el funcionamiento del uso principal, pero que bajo determinadas condiciones normativas puede permitirse.

Parágrafo: Sólo se adquiere el derecho a desarrollar un uso permitido una vez cumplidas integralmente las obligaciones normativas generales y específicas, y previa obtención de la correspondiente licencia urbanística.

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ (Ley 1421 de 1993)

ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

(...)

5. Adoptar el Plan General de Ordenamiento Físico del territorio, el cual incluirá entre otras materias, la reglamentación de los usos del suelo y el desarrollo físico en las áreas urbanas y rurales. Con tal fin, dictará las normas que demanden los procesos de urbanización y parcelación, la construcción de vías y el equipamiento urbano.

(...)

12. Promover y estimular la industria de la construcción, particularmente la de vivienda; fijar los procedimientos que permitan verificar su sometimiento a las normas vigentes sobre uso del suelo; y disponer las sanciones correspondientes. Igualmente expedir las reglamentaciones que le autorice la ley para la vigilancia y control de las actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.

ARTÍCULO 13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

5. IMPACTO FISCAL

Teniendo en cuenta los mandatos de la Ley 819 de 2003, se declara que el proyecto de acuerdo no genera un impacto fiscal que implique o conlleve a una modificación en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, toda vez que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de unas nueve fuentes de financiación.

6. CONCLUSIONES

Con la entrada en vigencia del nuevo POT, es importante traer nuevamente a colación el tema de la prohibición del funcionamiento de bares en zonas residenciales de la ciudad de Bogotá.

Asi pues, es claro que no se puede permitir, bajo ningún término, el funcionamiento de bares y/o servicios de alto impacto en las zonas residenciales de la ciudad de Bogotá. Por ello, el nuevo POT debe garantizarles a los hogares bogotanos un ambiente sano en el cual puedan desarrollarse y llevar a cabo una vida tranquila. De esta forma, se ratifica la total incompatibilidad de este tipo de usos (especiales) cerca de las zonas residenciales de la ciudad.

Cordialmente,

DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA
Concejal de Bogotá D.C
Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 109 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA RATIFICAR LA INCOMPATIBILIDAD DEL USO RESIDENCIAL CON EL USO DE SERVICIOS ESPECIALES”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que les confiere el numeral 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

ARTÍCULO 1. Objeto. Excluir los servicios especiales de las áreas de proximidad en Bogotá.

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. Los lineamientos contenidos en el Proyecto de Acuerdo, tendrán el mismo efecto y alcance que estipula el Decreto 555 de 2021. Por tanto, se ordena que estos cambios se regulen y actualicen a través de la expedición de los Decretos modificatorios a los que haya lugar.

ARTÍCULO 3. Lineamientos.

1. Exclúyase por completo los servicios especiales de las áreas de actividad estructurante y de las áreas de Proximidad.
2. Prohíbese la ubicación de servicios especiales, sin importar el tamaño del equipamiento en las áreas de Proximidad de la ciudad.
3. Revísese la seguridad jurídica de todos los establecimientos dedicados a la promoción de servicios especiales, con el fin de conocer de antemano si esta determinación aplicará únicamente a equipamientos nuevos.

4. Establézcase un sistema de vigilancia, monitoreo y control para aquellas zonas en las que se puedan llegar a mantener este tipo de incompatibilidades.

ARTÍCULO 5. Responsabilidades. La Secretaría Distrital de Planeación será la encargada de diseñar y expedir el Decreto reglamentario y modificadorio para excluir este tipo de servicios sobre las áreas de proximidad de la ciudad.

ARTICULO 5. Evaluación y seguimiento.

La Secretaría Distrital de Planeación se encargará de rendir un informe semestral para dar cuenta de la cantidad de establecimientos que no cuentan con la seguridad jurídica para mantenerse y deberán ser levantados.

Asimismo, la Secretaría de Planeación se encargará de revisar el funcionamiento ordinario de las Áreas de Proximidad con el fin de que no se presenten irregularidades propias de los servicios especiales.

ARTÍCULO 6. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los ____ días del mes de ____ del año

Presidente del Concejo

Secretaría General

Alcalde Mayor

Referencias

Alcaldía Mayor de Bogotá. (30 de agosto de 2019). Obtenido de Alcalde Peñalosa escucha inquietudes y aportes de ciudadanos al POT: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/planeacion/cabildo-abierto-pot-bogota>

Alcaldía Mayor de Bogotá. (14 de marzo de 2019). Obtenido de Propuesta del POT no da vía libre al funcionamiento de bares en barrios residenciales:

<https://bogota.gov.co/mi-ciudad/planeacion/bares-no-funcionarian-en-barrios-residenciales>

PROYECTO DE ACUERDO NO 110 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES PARA QUE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO ADOPTEN MEDIDAS MÍNIMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO FRENTE A LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS, SUBSIDIOS O CUALQUIER OTRA CLASE DE APOYO ECONÓMICO POR PARTE DEL DISTRITO”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**I. OBJETO DEL PROYECTO**

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objeto establecer medidas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que deben exigir las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo a las personas naturales y jurídicas beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico.

La iniciativa tiene como finalidad crear y fortalecer una cultura de prevención del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT), que les permita a los beneficiarios desarrollar mecanismos mínimos para gestionar estos riesgos y proteger su actividad económica de acciones ilegales en las que los puedan involucrar delincuentes organizados o no. Así mismo, impedir la instrumentalización de las entidades pertenecientes al Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo en la canalización de operaciones tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes, recursos mal habidos o la entrega de recursos para ser usados con fines terroristas.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA.

Convención de Viena de 1988: Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Aprobada por la Ley 67 de 1993 – Sentencia C-176 de 1994).

Firmada en 1988 por 169 países. Trata principalmente sobre las medidas para combatir el tráfico ilícito de narcóticos y los problemas conexos de la aplicación de la ley. Aunque no utiliza el término lavado de activos, la Convención define el concepto y apela a los países para que tipifiquen esta actividad. Sin embargo, la Convención de Viena se limita al narcotráfico como delito subyacente y no aborda los aspectos preventivos del lavado de activos. La Convención entró en vigor en noviembre de 1990.

Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 (Aprobado por la Ley 808 de 2003 – Sentencia C-037 de 2004).

Esta convención exige a los Estados que la han ratificado que tipifiquen como delito el terrorismo y los actos terroristas. Bajo esta convención, es ilegal que cualquier persona proporcione o recaude fondos con (i) la intención de que estos fondos se usen para, o (ii) el conocimiento de que estos fondos se usarán para, llevar a cabo cualquiera de los actos de terrorismo definidos en las otras convenciones específicas que se anexan a esta convención.

“(…)

1. Cada Estado Parte, de conformidad con sus principios jurídicos internos, adoptará las medidas necesarias para que pueda establecerse la responsabilidad de una entidad jurídica ubicada en su territorio o constituida con arreglo a su legislación, cuando una persona responsable de su dirección o control cometa, en esa calidad, un delito enunciado en el artículo 2. Esa responsabilidad podrá ser penal, civil o administrativa”.

Convención de Palermo de 2000: Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada (Aprobada por la Ley 800 de 2003 – Sentencia C-962 de 2003).

La Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) fue firmada en el año 2000 con el propósito de ampliar los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada internacional. Con respecto al lavado de activos, la Convención obliga específicamente a cada país que la ratifica, entre otras cosas, a:

“tipificar el lavado de activos y considerar todos los delitos graves como delitos subyacentes al lavado de activos, tanto los cometidos dentro como fuera del país, y permitir que el conocimiento o la intención criminal que se requieren como elemento de un delito tipificado puedan inferirse de circunstancias objetivas”. Así mismo, “establecer regímenes fiscalizadores para impedir y detectar todas las formas de lavado de activos, que incluyan la identificación del cliente, el mantenimiento de registros y el reporte de operaciones sospechosas”

(…)

ARTÍCULO 7. MEDIDAS PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE DINERO.

1. Cada Estado Parte:

a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los

bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas;

Convención de Mérida de 2003: Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (Aprobada por la Ley 970 de 2005 – Sentencia C – 172 de 2006).

(...)

Artículo 5º *Políticas y prácticas de prevención de la corrupción*

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

(...)

Artículo 23. *Blanqueo del producto del delito 1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente (...):*

(...)

Artículo 26. *Responsabilidad de las personas jurídicas 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, según sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participar en delitos tipificados según esta Convención (...).*

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

(...)

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

NORMATIVA EN PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LA/FT

La gestión de los riesgos en materia de lavado de activos y la financiación del terrorismo aplicable a entidades públicas tiene bases en regulación que inicialmente fue concebida

para el sistema financiero (Decreto 663 de 1993, denominado Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, EOSF) a través de la aplicación del *literal d) del numeral 2 del artículo 102* (modificado por el Artículo 1 de la Ley 1121 de 2006)¹ del esto es, reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero, en razón a que fue a través del Decreto 1497 de 2002 (Reglamentario de la Ley 526 de 1999, que creó la UIAF) que se obligó a las entidades públicas diferentes al sector financiero a reportar operaciones.

En este mismo sentido, mediante la modificación al Numeral 1, del Artículo 3º, de la Ley

526 de 1999, *Funciones de la UIAF*, a través del Artículo 33 de la Ley 1762 de 2015, **las entidades del Estado están obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la UIAF la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del EOSF².**

Así mismo, en aplicación del artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, se establece la obligación que, en procesos de contratación, las entidades del Estado deben identificar plenamente a las personas naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como el origen de sus recursos, con el fin de prevenir actividades delictivas.

LEY 526 DE 1999, Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero.

Artículo 1o. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL. <Inciso 1o. modificado por el artículo [32](#) de la Ley 1762 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Créase la Unidad

¹ Literal modificado por el artículo 1 de la Ley 1121 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación

² “La Unidad tendrá como objetivos centrales los siguientes:

1. La prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para ello centralizará, sistematizará y analizará mediante actividades de inteligencia financiera la información recaudada, en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias o complementarias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar relevantes para el ejercicio de sus funciones. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales.

de Información y Análisis Financiero, como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones serán de intervención del Estado con el fin de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo y las conductas relacionadas con la defraudación en materia aduanera.

(...)

Artículo 3o. FUNCIONES DE LA UNIDAD. <Artículo modificado por el

artículo [33](#) de la Ley 1762 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> La Unidad tendrá como objetivos centrales los siguientes:

(...)

1. La prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritaria mente el lavado de activos y la financiación del terrorismo (...)

Artículo 4o. FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL. <Artículo modificado por el artículo [4](#) de la Ley 1762 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las siguientes serán las funciones generales de la Dirección General:

(...)

11. Participar en las modificaciones de normas jurídicas a que haya lugar para el efectivo control del lavado de activos, de la financiación de terrorismo, del contrabando y del fraude aduanero.

(...)

Artículo 9o. MANEJO DE INFORMACION. La Unidad creada en la presente ley podrá solicitar a cualquier entidad pública, salvo la información reservada en poder de la Fiscalía General de la Nación, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.

La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio

colombiano o cuando al Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales.

El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación:

(...)

b) A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;

LEY 2195 DE 2022, Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. Cuyo objetivo fue adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar y promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por el público.

(...)

Artículo 9o. Adiciónese el artículo [34-7](#) a la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:

Artículo [34-7](#). Programas de transparencia y ética empresarial. Las personas jurídicas sujetas a su inspección, vigilancia o control adoptarán programas de transparencia y ética empresarial que incluyan mecanismos y normas internas de auditoría.

(...)

ARTÍCULO 12. PRINCIPIO DE DEBIDA DILIGENCIA. La Entidad del Estado y la persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica o similar, que tenga la obligación de implementar un sistema de prevención, gestión o administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas o que tengan la obligación de entregar información al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), debe llevar a cabo medidas de debida diligencia que permitan entre otras finalidades identificar el/los beneficiario(s) final(es), teniendo en cuenta como mínimo los siguientes criterios:

(...)

PARÁGRAFO 2o. La identificación plena de las personas naturales y personas jurídicas a las que hace referencia el artículo [27](#) de la Ley 1121 del 2006, se cumple con lo descrito en el presente artículo.

(...)

ARTÍCULO 31. Programas de transparencia y ética en el sector público. Modifíquese el artículo [73](#) de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:

Artículo [73](#). Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Este programa contemplará, entre otras cosas:

- a) Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público;
- b) Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las

listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;
- c) Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;
- d) Canales de denuncia conforme lo establecido en el artículo [76](#) de la Ley 1474 de 2011;
- e) Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad;
- f) Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

PARÁGRAFO 1o. En aquellas entidades en las que se tenga implementado un Sistema Integral de Administración de Riesgos, este deberá articularse con el Programa de Transparencia y Ética Pública.

Documento CONPES 4042 del 9 de agosto de 2021, Política Nacional Anti Lavado De Activos, Contra La Financiación Del Terrorismo Y Contra La Financiación De La Proliferación De Armas De Destrucción Masiva.

Documento CONPES D.C. 01 del 6 de febrero de 2019, Política Pública Distrital De Transparencia, Integridad Y No Tolerancia Con La Corrupción.

III. COMPETENCIA DEL CONCEJO

Decreto Ley 1421 de 1993

Artículo 8. *Funciones generales. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.*

Artículo 12. *Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:*

1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)*

IV. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

El lavado de activos es el proceso a través del cual se realiza la conversión o la transferencia de bienes o ganancias obtenidas de una actividad delictiva, encubiertas para ocultar sus orígenes ilícitos. Básicamente, el lavado de activos comprende las ganancias obtenidas de bienes de origen delictivo más que de los bienes mismos (Banco Mundial, 2007).

El financiamiento del terrorismo puede ser entendido como un apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquéllos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. No obstante, es más complicado definir al terrorismo en sí mismo, porque el término puede tener connotaciones políticas, religiosas y nacionales dependiendo de cada país. El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo general, presentan características de operaciones similares, sobre todo en relación con el encubrimiento.

De acuerdo con esto, la comunidad internacional ha desarrollado herramientas vinculantes para combatir este flagelo proveniente del tráfico de drogas, delincuencia organizada transnacional y corrupción a través de las convenciones de Naciones Unidas como la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999, por la intensificación en todo el mundo de los atentados terroristas en todas sus

formas y manifestaciones; Convención de Palermo de 2000 contra la delincuencia organizada transnacional cuyo propósito es el de promover la cooperación para prevenirla y combatirla más eficazmente; y Convención de Mérida en 2003 contra la corrupción.

En observancia a estas acciones de la comunidad internacional los países que conformaban el G7 constituyeron en 1989 el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI como ente intergubernamental con el mandato de fijar estándares de prevención y combate del lavado de activos, expidiendo así recomendaciones como iniciativa para luchar contra los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de lavadores de dinero del tráfico ilícito de drogas.

En esta misma línea de prevención se crearon organismos regionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT (anteriormente Gafisud), del cual Colombia hace parte desde el año 2000, escenario en el que se promueve de manera permanente el cumplimiento de las Convenciones Internacionales en materia de prevención y lucha contra lavado de activos y financiación del terrorismo, así como el cumplimiento de las Recomendaciones de GAFI, dentro de las que se establece el deber de cooperación y

coordinación entre entidades a escala nacional permitiendo entablar entre sí el intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (GAFI, 2023).

Como desarrollo de lo anterior, Colombia en la vigencia 2022, promulgó la Ley 2195, por la cual se adoptaron medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y prevención del lavado de activos, y desde las cuales las entidades públicas del orden nacional y distrital deben enfocar esfuerzos para implementar las orientaciones definidas en la ley, enfocadas en mecanismos para prevenir y detectar la corrupción y el lavado de activos.

La política criminal en Colombia para combatir el fenómeno del lavado de activos y la financiación del terrorismo se ha orientado principalmente a la sanción penal o administrativa. No obstante, el Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025 precisa que Colombia es un país vulnerable donde las acciones realizadas para mitigar las conductas de lavado de activos tienen muy bajo impacto. Por lo que se requiere fortalecer una política de prevención que no se limite al derecho penal, sino que debe orientarse hacia mecanismos de cumplimiento normativo con instrumentos y mecanismos preventivos, que incluso involucren otras disciplinas (Lozano, 2023).

Dentro del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, estableció en el programa 3 de su primer objetivo “Bogotá avanza en seguridad” que la Administración Distrital implementará

*acciones encaminadas a mitigar el mercado de estructuras criminales de hurto a celulares para el control del delito de receptación, incluyendo el énfasis de inteligencia y **persecución criminal en cuanto a las rentas criminales y el lavado de activos**, en coordinación con los organismos policiales, militares y judiciales dentro del marco de sus competencias.*

Igualmente, este Plan Distrital de Desarrollo establece en el **artículo 93** unos programas y estrategias para la entrega de apoyo financiero al tejido productivo en cabeza del sector Desarrollo Económico que pondrá en marcha el otorgamiento de créditos con tasa compensada, la operación de líneas de crédito, la asignación de recursos no reembolsables, y, en general, la implementación de otros mecanismos alternativos de financiamiento. Más adelante, el **artículo 96** propone un incentivo a la creación de empleo cuyos destinatarios serán empleadores de naturaleza privada que realicen la contratación laboral. Así mismo, el **artículo 115** crea el Fondo para el Desarrollo de los Micronegocios de Bogotá FONDEM, cuyos recursos asociados podrán ser administrados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a través del esquema fiduciario.

Las estrategias antes descritas, incluidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, deben implementar medidas que eviten la instrumentalización de las entidades pertenecientes al Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo para canalizar operaciones tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de sus bienes o recursos mal habidos y la recolección de recursos para ser usados con fines terroristas. Por lo que este proyecto está armonizado para ayudar en la implementación del Plan Distrital de Desarrollo vigente.

En relación con los ODS formulados desde Naciones Unidas y, de manera específica, frente al objetivo número 16 *Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas*, este proyecto al promover medidas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, aporta al cumplimiento de la meta: “**16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada**” (resaltado fuera del original).

Una primera versión de este proyecto de Acuerdo fue presentado en el periodo de sesiones del año 2024, en donde tuvo ponencia positiva con modificaciones de los honorables Concejales **ANDRÉS BARRIOS BERNAL** y **MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ**. Las modificaciones de dicha ponencia, por su pertinencia, fueron incorporadas al articulado del proyecto de Acuerdo que aquí nuevamente se presenta.

V. IMPACTO FISCAL

Como lo establece el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es obligatorio esclarecer el impacto fiscal que tienen las normas sobre las finanzas públicas, lo que significa medir la carga fiscal

que estas pueden tener tanto en el presupuesto anual y en el Marco Fiscal de mediano Plazo que deben observar las diferentes entidades del Estado. Ahora bien, esto no significa que los instrumentos normativos que pueda aprobar el Concejo de Bogotá estén limitados por este hecho, pues como lo aclara la Sentencia C-911 de 2007, el impacto fiscal no se puede convertir en una limitación absoluta para que las corporaciones públicas cumplan con sus funciones legislativas o de orden normativo. En este sentido, la sentencia establece:

En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

(...) el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.

Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto del proyecto y cómo este se alcanzará, se considera que no se genera impacto fiscal y los recursos con los que cuentan las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito son suficientes para su puesta en marcha.

VI. CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto y de conformidad con el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 2019, nos permitimos presentar a su consideración el presente proyecto de acuerdo, para su trámite y aprobación.

Respetuosamente,

DAVID HERNANDO SAAVEDRA
Concejal de Bogotá

ANDRÉS BARRIOS BERNAL
Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 110 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES PARA QUE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO ADOPTEN MEDIDAS MÍNIMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO FRENTE A LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS, SUBSIDIOS O CUALQUIER OTRA CLASE DE APOYO ECONÓMICO POR PARTE DEL DISTRITO”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Objeto- Establecer responsabilidades para que las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo implementen medidas de prevención y control del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).

ARTÍCULO 2.- Las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo adoptarán medidas mínimas preventivas para la prevención y el control del riesgo de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) frente a las personas naturales y jurídicas que se les otorgue algún apoyo o subsidio económico por parte del Distrito.

ARTÍCULO 3.- Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo expedirán en un término máximo de seis (6) meses un documento que contenga los lineamientos mínimos que deben cumplir las personas naturales y jurídicas para ser beneficiarias de ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico, y determinar su alcance. Los lineamientos mínimos deben contemplar y desarrollar entre otros los siguientes temas:

- 1- Mecanismos para identificar sus capacidades de los beneficiarios en relación con la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- 2- Acciones específicas para fortalecer sus capacidades en relación con la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- 3- Instrumentos de prevención y monitoreo de los riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- 4- Procesos pedagógicos y de sensibilización que contribuyan a fomentar la transparencia, integridad y ética empresarial.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo se encargarán de diseñar e implementar las acciones específicas para fortalecer sus capacidades institucionales en relación con la prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como la promoción de la Transparencia, Integridad y Ética Empresarial, de conformidad con los estándares internacionales. Para ello, podrán solicitar el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Cámara de Comercio de Bogotá, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) o cualquier otra organización con experiencia en la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y la prevención y lucha contra la Corrupción.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo considerarán como una señal de alerta la renuencia de las personas naturales y jurídicas a cumplir los lineamientos mínimos que establezcan. Por lo tanto, ante esta renuencia estas entidades enviarán el respectivo reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

ARTÍCULO 4.- Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, incluirán dentro de sus medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital, las siguientes acciones:

- 1- Solicitar a la Dirección de Delitos Fiscales de la Fiscalía General de la Nación, información sobre investigaciones que puedan estar cursando o condenas que recaigan sobre la persona natural o los representantes legales y miembros de las personas jurídicas que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito.
- 2- Solicitar a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, información sobre investigaciones que puedan estar cursando

o condenas que recaigan sobre la persona natural o los representantes legales y miembros de las personas jurídicas que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito.

- 3- Solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – información tendiente a determinar si la persona natural o los representantes legales y miembros de las personas jurídicas que reciban ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito, ha estado involucrada en aprehensiones por contrabando.

PARÁGRAFO: Las entidades Distritales que otorguen ayudas, subsidios o cualquier clase de apoyo económico serán las encargadas de obtener la autorización por parte de los beneficiarios de esos rubros para el tratamiento de datos personales que permitan solicitar la información determinada en este artículo.

ARTÍCULO 5.- La Administración Distrital iniciará un proceso de análisis, diseño y estructuración de capacitaciones y programas educativos sobre la prevención de riesgos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo, así como el cumplimiento de los lineamientos que se expidan al respecto, dirigido a:

1. Funcionarios de las entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo.
2. Personas naturales o jurídicas que acceden a ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico por parte del Distrito.

PARÁGRAFO: La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico incluirá en los Talleres de Educación Financiera que hacen parte de la estrategia Academia Financiera, o aquel programa o estrategia que los reemplace, un componente sobre prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como la promoción de la Transparencia, Integridad y Ética Empresarial.

ARTÍCULO 6.- La Administración Distrital deberá realizar, dentro del término de un año a partir de la vigencia de este Acuerdo, un informe donde se analice la viabilidad para crear un Comité Distrital de Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo que tenga como función hacer el seguimiento periódico y verificar el cumplimiento de las medidas establecidas en este Acuerdo.

ARTÍCULO 7.- Las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, podrán, en coordinación con las instancias distritales competentes, promover incentivos que

fomenten el desarrollo e implementación de buenas prácticas frente a la prevención de riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como la promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción, y el fomento de la denuncia.

ARTÍCULO 8.- CANAL DE DENUNCIA. La Administración Distrital establecerá un protocolo para ser implementado en los canales de denuncias de las Entidades del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo. Este protocolo deberá precisar las responsabilidades de los funcionarios designados de atender las denuncias recibidas y el tratamiento que debe darse a la información recibida, asegurar el anonimato de los denunciantes si estos así lo solicitan y verificar una ruta de atención a los denunciantes para evitar represalias por parte de las personas denunciadas.

ARTÍCULO 9.- TRANSICIÓN. Las personas naturales y jurídicas que aspiren a recibir ayudas, subsidios o cualquier otra clase de apoyo económico del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, contarán con un término de seis (6) meses a partir de la expedición de los lineamientos mínimos de que trata el artículo segundo del presente Acuerdo para acreditar el cumplimiento de estos.

ARTÍCULO 10.- VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BIBLIOGRAFIA

Banco Mundial, 2007, “Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo Segunda edición y suplemento sobre la Recomendación Especial

IX

”.

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/832871468156887361/pdf/350520SPANISH0101Official0Use0Only1.pdf> , Bogotá: Banco Mundial

ONU, 2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>

GAFI, 2023, “Estándares Internacionales Sobre la Lucha Contra El Lavado de Activos, El Financiamiento del Terrorismo, y El Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. <https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publicaciones-web/4692-recomendaciones->

[metodologia-actdic2023/file](#).

Lozano Maturana, G. (2023). ¿Hacia un modelo de (in)cumplimiento penal? Reflexiones a partir del delito de lavado de activos en Colombia. Universidad de los Andes. Disponible en: <http://hdl.handle.net/1992/6869>

PROYECTO DE ACUERDO NO 111 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS, CORRESPONSABLES Y CUIDADORAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA**

Este proyecto de acuerdo tiene como fin contribuir a la transformación de las masculinidades tradicionales, mediante la generación de reflexiones y espacios que contribuyan con el desaprendizaje del machismo y la construcción de formas de ejercer las masculinidades no violentas, corresponsables y cuidadoras.

En Colombia, el sistema patriarcal ha logrado arraigarse en todas las esferas de la vida cotidiana. Dicho sistema de opresión se nutre de conductas socialmente pactadas para ser normalizadas ante la mirada del tejido social, entendido como un todo. Si bien, se ha evidenciado que la carga histórica de esta forma de organización social, política, económica y cultural ha tenido sus mayores afecciones en las mujeres¹ y las personas feminizadas, también es fundamental darle visibilidad a la otra cara de la moneda: cómo este sistema repercute en los hombres mientras que, a su vez, los beneficia.

Teniendo en cuenta que, desde la división sexual del trabajo² los roles de género han determinado el

¹ Se entenderán tales afecciones como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. CEDAW en Sentencia T-878/14. VIOLENCIA DE GÉNERO.

² De acuerdo con la tesis de S. Federici, a partir de la nueva división sexual del trabajo las mujeres son reclutadas para cumplir el trabajo doméstico y reproductivo. (...) Se estableció que las mujeres eran inherentemente inferiores a los hombres, excesivamente emocionales,

deber ser de hombres y mujeres, es fundamental identificar cuáles son los factores que se encargan de perpetuar ese establecimiento. La configuración de un sistema heterosexual, binario y normativo es el medio que se ha encargado de coartar la libertad de los cuerpos y ha generado una serie de expectativas que, al día de hoy, explican hallazgos como: brechas de desigualdad salarial, paternidades ausentes, índices de depresión preponderantes en hombres, violencia intrafamiliar, entre otros.

Así pues, aspectos de la vida en sociedad como las labores del cuidado, la crianza y la garantía de una óptima salud mental son solo un abrebocas de los retos venideros en el marco de un modelo comportamental alternativo, corresponsable y cuidador para los hombres que habitan Bogotá.

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

Este proyecto de acuerdo surge bajo la necesidad de dar un nuevo aporte a la conversación sobre los problemas derivados de los roles de género en Bogotá. Si bien, el papel de las entidades que protegen a las mujeres y hacen prevención y contención a violencias ha sido vital en la visibilidad de este panorama, la importancia de -no solo incluir, sino también- responsabilizar a los hombres como agentes activos en la eliminación de barreras patriarcales hacia una vida libre de violencias, radica en la incidencia directa de esferas individuales y colectivas de cara a nuevas formas de socialización.

Contexto y situación actual

Las masculinidades tradicionales tienen como principal causa la perpetuación del patriarcado en la sociedad y esto ha presupuestado un privilegio para quienes las habitan y ha generado la necesidad de continuar con el estado de cosas que oprime generalmente a las mujeres y cuerpos feminizados. La forma en que esto se materializa en todos los tipos de violencia, como la estructural, simbólica, física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, entre otras.

poco razonables, vanidosas, salvajes, despilfarradoras y lujuriosas, incapaces de manejarse por sí mismas y que, por lo tanto, debían estar bajo control masculino.

En muchos países, incluyendo Colombia, los hombres y niños enfrentan desafíos y problemas en relación a las expectativas de género y las normas culturales asociadas con la masculinidad.

Algunos de los problemas más comunes incluyen:

Violencia y criminalidad: de acuerdo con información remitida por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con fecha de 20 de febrero 2023, CORDIS 20235410070331, puede concluirse que el patriarcado ha logrado cimentarse en la sociedad, a través de una mirada masculinista que dicta la perpetuación de dinámicas machistas y problemas derivados en VBG.

En concordancia con lo anterior, y de acuerdo a la información suministrada por la Secretaría, un gran porcentaje de las personas privadas de la libertad provienen de entornos familiares disfuncionales y de sectores sociales con vulnerabilidades significativas y con acumulados generacionales de pobreza estructural. Factores que determinan el desarrollo y la movilidad social, convirtiéndose en razones para el estancamiento y la reproducción de esquemas y estereotipos tradicionales de sus masculinidades, mostrándose al exterior como el prototipo de macho competidor. De manera textual se hace referencia al machismo y las posturas tradicionales como:

“Una relación de injerencia en la magnificación de la conducta delictiva y en el poder violento del transgresor pues es parte del imaginario del hombre invencible y que no se doblega ante el dolor. Estas conductas y posturas se alimentan en los entornos carcelarios por los interaccionismos simbólicos con sus pares de interrelación”.

(Respuesta Preposición 122 de 2023 “Masculinidades no violentas, cuidadoras y corresponsables” CORDIS 20235410070331. 2023).

Impactos de la salud mental: Para la sociedad las expectativas frente a cómo debe ser la masculinidad y el comportamiento de los hombres genera altos impactos en la salud mental, replicando comportamientos dañinos a través de los estereotipos que sugieren que: “los hombres no lloran”, “la masculinidad se demuestra siendo agresivo” “los hombres son proveedores” “los hombres no saben cuidar”, entre otros, desencadenando en que estos desarrollen dificultades para el manejo y

la comprensión de sus emociones, dificultando también el que recurran a ayuda. Esto basado en la práctica social de que solo se están permitidas ciertas emociones a los hombres y ciertas a las mujeres.

Remitiéndose a cifras la Secretaría de Salud del Distrito menciona en la preposición 122 “Masculinidades no violentas, cuidadoras y corresponsales” CORDIS 2023ER6905 con fecha del 23 de febrero del 2023 que durante el periodo de enero a noviembre de 2022 se tiene un total de 615.425 personas diagnosticadas con algún tipo de patología de salud mental. De las cuales 234.835 son hombres en contraste con las 341.285 mujeres. Datos que llevan al número de casos atendidos a 690.088 y 914.473 respectivamente, mostrando una clara diferenciación entre hombres y mujeres a la hora de tomar asistencia en salud mental.

Buscar ayuda en la gestión de emociones es fundamental para encontrar el bienestar y construir relaciones saludables. El no mostrar las emociones y las grandes expectativas sociales que se ponen en lo que significa ser un “hombre de verdad” puede generar grandes problemas relacionales para las personas que habitan las masculinidades.

Panorama Nacional

POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES: HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS. CONPES 4080:

Existen aún retos en el cierre de brechas de género y en la creación de condiciones igualitarias para que mujeres y hombres puedan tener las mismas oportunidades y participar de igual forma en el desarrollo económico y social del país, así como en posiciones de liderazgo a nivel público y privado. Estas brechas se profundizan en el marco de la crisis económica generada por el COVID-19, la cual no ha sido neutral al género con un impacto diferencial sobre las mujeres (OCDE, 2020). Persisten desventajas para las mujeres en múltiples campos, asociadas a problemáticas de carácter multidimensional que se encuentran presentes en su curso de vida,

y se agudizan de acuerdo con condiciones o características de diferentes grupos de mujeres. Desde una perspectiva de capacidades de las mujeres para vivir una vida autónoma y libre, con oportunidades para desarrollarse plenamente, existen obstáculos en tres ámbitos: en su autonomía económica, su autonomía en la toma de decisiones y su autonomía física. Persisten en todas estas esferas la falta de igualdad de oportunidades para hacer efectivos los derechos e incluso violencia contra las mujeres, fundamentadas en estereotipos culturales acerca de los roles de género, asociados en gran medida con el trabajo de cuidados, que se hace de manera no remunerada por gran parte de las mujeres.

De manera particular las mujeres enfrentan las siguientes problemáticas que se desarrollan en esta política. La primera está relacionada con la existencia de barreras en el acceso a oportunidades sostenibles de autonomía económica, en condiciones de equidad, que les permita una participación efectiva en el desarrollo social y productivo, incluyendo su participación efectiva en la toma de decisiones en el sector privado. La segunda es la necesidad de una mayor participación de las mujeres en cargos de elección popular, cargos directivos de las organizaciones comunales y altos cargos del sector público. La tercera tiene que ver con las afectaciones diferenciales en salud y la pertinencia de los servicios de atención. La cuarta refiere a los vacíos en prevención y atención de las violencias de género y barreras en el acceso a la justicia. La quinta está relacionada con los obstáculos para que las mujeres sean agentes activas en la construcción de paz y, finalmente, la necesidad de fortalecer la institucionalidad de tal manera que se incorpore la agenda de género en el ámbito público a nivel estratégico.

Panorama Distrital

La Línea Calma.

De acuerdo a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en comunicación del 22 de febrero del 2023, la estrategia de cambio cultural y comportamental denominada "La Línea Calma" se basa en el enfoque metodológico de la cultura ciudadana. Para identificar la necesidad y el modelo de atención

de esta iniciativa, se llevó a cabo un ejercicio investigativo de dos fases entre los años 2020 y 2021. Este diagnóstico se basó en la recopilación de fuentes primarias y secundarias de información.

- Fase 1: En el año 2020 se desarrolló un estudio general “Características de la Violencia Intrafamiliar y de Pareja en Bogotá” el cual buscó describir y analizar algunas características sociodemográficas, socioculturales y psicosociales de las violencias intrafamiliar y de pareja en la ciudad, con el propósito de brindar insumos y guiar el diseño y desarrollo de estrategias de cultura ciudadana lideradas por la Administración Distrital encaminadas a la prevención de las violencias de género en el contexto de las relaciones intrafamiliares y de pareja, entre ellas una línea de escucha emocional y atención telefónica dirigida a hombres en la ciudad, “Línea Calma”.

Los resultados en esta primera fase mostraron la importancia de generar una línea de escucha telefónica para hombres y la importancia de profundizar en el análisis en los temas de Masculinidades y el desarrollo de las Emociones y Amor Romántico como elementos culturales que generan relaciones e interacciones de dependencias posesividad, control y dominación en las relaciones de pareja, siendo estas temáticas cruciales para comprender las violencias y susceptibles de ser abordadas para generar transformaciones culturales.

- Fase 2: En el año 2021, se desarrolló la Encuesta de Seguimiento a la Línea Calma, buscando justamente focalizar mejor las problemáticas encontradas en el estudio desarrollado en 2020 pero además y especialmente evaluar si las ciudadanías en Bogotá tenían conocimiento de este nuevo servicio en la ciudad y su acogida. Esta encuesta fue todos los niveles socioeconómicos en Bogotá. Se garantizó un muestreo probabilístico por localidad y con selección aleatoria simple. 971 encuestas efectivas.

Los resultados de esta encuesta permitieron conocer mejor las temáticas de masculinidades y expresión de las emociones, resultados que fueron retomados en 2022 para la Fase tres en la cual se hizo una triangulación de lo encontrado en las fases anteriores para su meror abstracción y focalización. Los resultados también mostraron que aunque la Línea Calma aún no era muy conocida en la ciudad a nivel masivo, sí se reconoce por la ciudadanía una

necesidad y demandada por los hombres que habitan Bogotá en aras de poder expresar sus emociones y poderlas manejar mejor para evitar violencias hacia ellos mismos, hacia otros hombres y hacia sus parejas.

Respecto a las llamadas la Secretaría informa:

“La Secretaría tenía como meta cuantitativa trazada para atenciones de hombres a través de la era de 5.000. Para la vigencia 2023, se atendieron 1763 hombres a través de la línea. Para la vigencia 2022, la cual inició el 08 de junio de 2022 y se implementó hasta el 11 de febrero de 2023 (8 meses y 3 días) la línea Calma recibió un total 9461. El promedio mensual para 8 meses de operación es de: 1.182 llamadas entrantes al mes.

Para la vigencia 2021, la cual inició en septiembre de 2021 y terminó en mayo de 2022 (8 meses) la línea Calma recibió un total 3958. El promedio mensual para 8 meses de operación es de: 494 llamadas entrantes al mes.

Para la vigencia 2020, la cual inició en diciembre de 2020 y terminó en mayo de 2021 (5 meses) la línea Calma recibió un total 1913. El promedio mensual para 5 meses de operación es de: 382.6 llamadas entrantes al mes.”

Localidades

Respecto a las localidades desde las cuales hay un porcentaje de comunicación más alto por parte de los usuarios se encuentra que el 14.79% refieren pertenecer a Usaquén, el 10.04% a Kennedy y el 9.07% a Suba, el 8.57%

Causas de llamadas:

Protocolo 1. Situaciones emocionales

| Detalle | Total |
|--|-------|
| Protocolo: P1 - Situaciones Emocionales en General | 2771 |
| Tres principales causas: | |
| -20.39% Sentimientos de tristeza | |
| -19.78% Síntomas de ansiedad | |
| -14.40% Duelo amoroso | |

Protocolo 2. Violencia de pareja.

| | |
|--|------|
| Protocolo: P2 - Situaciones que Involucran Violencia de Pareja | 1550 |
| Tres principales causas: | |
| -25.87% Motivantes asociadas a estallido emocional: porque al usuario le da rabia y le es difícil controlarse. | |
| -25.25% Motivante de control romántico: celos, desconfianza o sospecha de infidelidad por parte del usuario. | |
| -14.77% Motivantes asociadas al honor masculino: porque mi pareja “me provocó”; por “no dejármela montar” de mi pareja; porque el usuario se sintió humillado como hombre. | |

Protocolo 3. Violencias Machistas

| | |
|--|-----|
| Protocolo: P3 - Otras Violencias Machistas | 102 |
| Tres principales causas: | |
| -32.25% Motivantes asociadas a estallido emocional: porque al usuario le dio rabia y le es difícil controlarse | |
| -25.49% Motivantes asociadas al dominio masculino: desobediencia, altanería, alguien le llevó la contraria o desafió la autoridad masculina del usuario | |
| -24.51% Motivantes asociadas al honor masculino: porque "alguien me provocó"; por "no dejármela montar de nadie"; porque el usuario se sintió humillado como hombre (el tipificador debe desagregar cada una de las tres opciones) | |

Estrategia Escuela Hombres al Cuidado

De acuerdo a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en comunicación del 22 de febrero del 2023, la Estrategia Hombres al Cuidado tiene como objetivo promover la participación activa de los hombres en las actividades de cuidado y atención en sus hogares, familias y comunidades. Esta iniciativa se enmarca dentro de una estrategia de cultura ciudadana, y desde su lanzamiento en octubre de 2021 se han implementado diversas acciones comunicativas para difundir y promover sus objetivos.

Las cifras remitidas por la Secretaría son:

| Total participantes | Actividad | | | |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| | ESCUELA MÓVIL | ESCUELA PRESENCIAL | SOCIO HABLEMOS DE CUIDADO | Suma total |
| Fecha - Año-Mes | | | | |
| 2022-may | 36 | 81 | 73 | 190 |
| 2022-jun | 33 | 20 | 80 | 133 |
| 2022-jul | 120 | 20 | | 140 |
| 2022-ago | 78 | 39 | 281 | 398 |
| 2022-sept | 64 | 41 | 115 | 220 |
| 2022-oct | 117 | 201 | 10 | 328 |
| 2022-nov | 566 | 335 | 10 | 911 |
| 2022-dic | 459 | 225 | 196 | 880 |
| Suma total | 1473 | 962 | 765 | 3200 |

Además, en respuesta a nuestra proposición 121 de enero de 2024, la Secretaría de Cultura manifestó que 2699 personas participaron en la Escuela de Hombres al Cuidado, de las cuales 1924 corresponden a hombres.

Escuela padres cuidadores y masculinidades alternativas

Por otro lado, la Secretaría Distrital de Integración Social informa en comunicación escrita del 24 de marzo 2023, que durante el año 2022 desde el Proyecto de Inversión 7744 se adelantó la construcción del documento para el lineamiento Escuela de padres cuidadores y masculinidades alternativas implementadas en el marco de la atención en Jardines Infantiles y Casas de pensamiento Intercultural. El objetivo de la Escuela es presentar una alternativa de solución a los altos índices de violencia perpetrados por los hombres en un rango de edad entre los 17 y 59 años, en contra de las mujeres de su entorno, a través de procesos de educación con la finalidad de disminuir acciones violentas y cambiar los imaginarios y paradigmas violentos que le han sido asignados culturalmente a los hombres, mediante procesos de sensibilización y socialización, en articulación con las entidades distritales y locales.



Ilustración 1. Invitación Lanzamiento Escuela de Padres cuidadores. 2021

Asimismo, acorde a información remitida por la Secretaría Distrital de Educación, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del s. XXI”, se establece la política de educación inclusiva con enfoque diferencial, a través del proyecto de inversión 7690 “Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos el cual, dentro de su estructura, establece la línea de acción: Prevención y protección con enfoque de género. En este marco, se desarrollan acciones encaminadas al cierre de brechas y barreras en la permanencia educativa de los grupos y poblaciones de especial protección constitucional, en particular de mujeres en sus diferencias y diversidades, así como la población con orientaciones e identidades de género diversas - OSIGD. En esta línea de acción se abordan 5 ejes temáticos: a) equidad de género; b) diversidad sexual; c) trata de personas; d) trabajo infantil; y e) explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes - ESCNNA; fortaleciendo el trabajo en el sector educativo constituyendo e implementando procesos significativos de enseñanza aprendizaje, para promover la adquisición de saberes diferenciales y minimizar la deserción escolar en el Distrito.

Violencia estructural extrapolada en Bogotá

Para el caso de los niños y hombres del Distrito, el relacionamiento interpersonal suele implicar dificultades que derivan en violencia basada en el género (VBG)³, siendo la violencia económica una de las más presentes en este contexto. Como se expone en la siguiente cifra, según encuestas especializadas al respecto, Colombia se encuentra “entre los países de América Latina con incidencia más alta de violencia física contra las mujeres (Bott et al., 2012)”. Así pues, esto se ve materializado en el siguiente estudio de violencia económica y patrimonial, de la Universidad del Rosario (2021):

³ El patriarcado concibe a la mujer como el objeto de control y dominio por parte de un sistema social masculino y opresivo. Por lo tanto, la lógica patriarcal concibe la violencia como pauta de domesticación y amansamiento de la mujer (Cantera, 2007). De esta descripción, cabe destacar que el maltrato está relacionado con el control, no por el hecho de perderlo, sino por ejercerlo para dominar a la mujer maltratada (Mullender, 2000).

Tabla 1.
Violencia de pareja contra la mujer alguna vez unida durante la relación, por forma y estado civil, 2015

| Estado civil | MUJERES (13 a 49 años de edad) | | | | | No. de mujeres alguna vez unidas |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | Alguna violencia psicológica | Alguna violencia física | Alguna violencia económica | Alguna violencia sexual | Alguna forma de violencia | |
| Casada | 54,5 | 22,9 | 23,0 | 4,7 | 57,4 | 6498 |
| Unida | 61,8 | 27,4 | 25,4 | 4,9 | 64,4 | 12400 |
| Viuda | 66,9 | 39,2 | 40,1 | 13,6 | 70,2 | 503 |
| Divorciada | 84,5 | 58,0 | 64,6 | 22,9 | 87,1 | 245 |
| Separada | 81,0 | 53,4 | 53,9 | 17,0 | 83,8 | 4873 |
| Total | 64,1 | 31,9 | 31,1 | 7,6 | 66,7 | 24519 |

Fuente: compilación de Profamilia de ENDS 2015.

Este análisis pone de plano aquellos nexos existentes entre la violencia económica y patrimonial, y la violencia física. Los datos tienen una correlación evidente que expone la urgencia de tener la subordinación en razón al género en el radar, pues tal construcción social ha impedido una vida libre de violencias en el marco de entornos seguros, equitativos y democráticos para mujeres y hombres de la ciudad, dejando a las primeras arrinconadas en ciclos de violencia sumamente nocivos.

Del mismo modo, según información remitida por la Secretaría Distrital de la Mujer el veinte (20) de febrero 2023, la mayoría de casos de violencia se generan en familias nucleares, como se evidencia en el siguiente recuadro:

Número de mujeres atendidas en la SDMujer por situaciones de violencia sexual, según tipo de familia, 2022

| Tipo de familia | Mujeres atendidas | Proporción |
|--------------------------------|-------------------|-------------|
| Familia nuclear | 2.691 | 44% |
| Familia monoparental | 1.301 | 21% |
| Familia extensa | 1.069 | 18% |
| Familia recompuesta y ampliada | 392 | 6% |
| Familia unipersonal | 360 | 6% |
| Familia homoparental | 48 | 1% |
| Familia adoptiva | 5 | 0,1% |
| Otro | 203 | 3% |
| Total parcial | 6.069 | 100% |

Donde adicionalmente, se evidencia el siguiente hallazgo:

Número de exámenes médico-legales practicados a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar según presunto agresor. Bogotá, 2022

| Tipo de agresor | Número |
|--|--------|
| Compañero permanente | 3518 |
| Excompañero permanente | 2466 |
| Esposo | 708 |
| Hermano(a) | 546 |
| Padre | 494 |
| Madre | 489 |
| Exnovio | 406 |
| Novio | 332 |
| Hijo(a) | 314 |
| Cuñado(a) | 239 |
| Otros familiares civiles o consanguíneos | 196 |
| Exesposo | 133 |
| Padrastro | 119 |
| Tío(a) | 110 |
| Primo(a) | 102 |
| Sobrino(a) | 94 |
| Sin información | 60 |
| Suegro(a) | 48 |
| Yerno | 48 |
| Nuera | 43 |
| Abuelo(a) | 32 |
| Madrastra | 29 |
| Nieto(a) | 25 |
| Pareja o expareja | 24 |
| Amante | 5 |
| Encargado del cuidado | 4 |
| Examante | 4 |
| Conocido | 1 |

Para las mujeres bogotanas, el foco de mayor riesgo de ser víctima de VBG está en el compañero permanente. Lo cual pone de relieve la necesidad de reforzar y diseñar instrumentos de resocialización en cuanto a convivencia entre pares respecta. La necesidad de ver en perspectiva este grave panorama es que, aunado al ámbito de las labores del hogar, las cifras anteriormente expuestas dan fe de cómo las nociones de cuidado y labores domésticas resultan complejas en el marco de una vida libre de violencias pues, para los hombres, históricamente no se les ha proporcionado

herramientas que los responsabilicen en este sentido y, por otro lado, tienen inconvenientes con el trámite de emociones que impiden canales de comunicación tempranos y efectivos para evitar desencadenantes fatídicos como la violencia intrafamiliar, económica e incluso el feminicidio.

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Desarrollo y Plan Distrital de Desarrollo.

- **Objetivos de Desarrollo Sostenible**

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, velando por la construcción de sociedades justas, incluyentes, democráticas y participativas, reconoce la importancia de mantener el enfoque de género de manera transversal en tales esfuerzos. A continuación, se encuentran los puntos más sobresalientes en esta materia:

Objetivo 5: Igualdad de género: igualdad de género. Entre las metas asociadas a este objetivo, se encuentran la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, así como la promoción de su participación en la toma de decisiones y en la vida económica, entre otras medidas.

Objetivo 4: Educación de calidad: una educación inclusiva y equitativa de calidad, así como garantizar oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y todas. En este sentido, se busca promover una educación que fomente la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos, incluyendo el enfoque de masculinidades cuidadoras y corresponsables.

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico: promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, así como defender el fomento del trabajo decente para todos y todas. Para lo anterior, se busca promover la igualdad de oportunidades y reducir las brechas de género en el ámbito laboral, incluyendo nociones de entornos relacionales seguros en los que sea posible conciliar vida laboral y familiar libre de violencias.

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades: reducir las desigualdades entre los países y dentro de ellos, incluir las nuevas conversaciones de género a la construcción coyuntural de las naciones, así como la eliminación de las barreras que impiden el acceso a oportunidades

y recursos a mujeres y niñas.

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas: promover sociedades justas e inclusivas, incluyendo los temas de igualdad de género. Entre las metas relacionadas a este objetivo, se encuentran la eliminación de la violencia de género y la promoción de la participación igualitaria de mujeres y hombres en la vida política y pública.

- **Plan Nacional de Desarrollo**

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 denominado “Colombia potencia mundial de la vida” establece en su acápite Sistema de cuidado para la vida y para la paz que se “promoverá la corresponsabilidad del cuidado entre hombres y mujeres, y entre todos los actores de la sociedad. Se priorizarán programas de sensibilización, educación y comunicación para la promoción de masculinidades cuidadoras y no violentas, que incentiven la plena participación de los hombres, los jóvenes y los niños en las responsabilidades de cuidado”

- **Plan Distrital de Desarrollo**

El Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá 2024-2027 "Bogotá camina segura" aborda la igualdad de género y la promoción de masculinidades cuidadoras y corresponsables en varios de sus capítulos y secciones. Por ejemplo, en el programa Bogotá cuida a su gente, se establece que: “Se hará promoción de masculinidades no violentas, corresponsables y cuidadoras, a través de la generación de espacios de reflexión en la oferta educativa institucional, en instituciones públicas y además contará con una estrategia comunicativa, la cual estará orientada a la promoción de los derechos humanos de las mujeres, la prevención de violencias en su contra, entre otros, dirigida tanto a la ciudadanía como a las instituciones públicas y privadas y los medios de comunicación formales y alternativos”

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El presente Proyecto de Acuerdo se sustenta en las siguientes normas:

3.1. ORDEN CONSTITUCIONAL

El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia señala que:

"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados..." **Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 13**

- El artículo 25 de la Constitución Política de Colombia el cual establece que:

"El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas". **Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 25**

- El artículo 43 de la Constitución Política de Colombia, el cual señala que:

"La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia". **Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 43**

- El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que señala que:

"Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 44

3.2 JURISPRUDENCIA

Este apartado consta de cuatro (4) sentencias emitidas por la Corte Constitucional que hacen alusión a los derechos y deberes que se manifiestan en el sentido del presente Proyecto de Acuerdo:

Corte Constitucional Sentencia T-239/18: Acción de tutela para obtener reintegro laboral de docente que denunció actos de violencia de género y acoso laboral en institución universitaria.

A partir de esta sentencia la Corte Constitucional esclarece la interrelación entre el principio de igualdad y la prohibición de la discriminación. Enfatizando en la violencia y discriminación ejercidas contra la mujer históricamente por razones de sexo y género. Frente a ello la Corte reza lo siguiente:

“El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por razón del sexo y del género es indivisible e interdependiente respecto de otros derechos fundamentales. Este tipo de violencia está “arraigada en factores relacionados con el género, como la ideología del derecho y privilegio de los hombres respecto de las mujeres, las normas sociales relativas a la

masculinidad y la necesidad de afirmar control o el poder masculino, imponer los

papeles asignados a cada género o evitar, desalentar o castigar lo que se considera un comportamiento inaceptable de las mujeres. En estos términos, la obligación de protección, respeto y garantía del derecho a estar libre de violencia comprende el deber de tomar todas las medidas necesarias administrativas, legislativas, judiciales, financieras y fiscales para la adopción, implementación y seguimiento de políticas públicas efectivas y adecuadas tendientes a eliminar toda manifestación de violencia y discriminación en razón del género”.

(Sentencia T-239/18. Corte Constitucional de Colombia, 2018).

Con esta jurisprudencia se hace evidente la necesidad de generar nuevos paradigmas que rompan con la tradición heteropatriarcal frente a los oficios del cuidado. Pues, repensar las masculinidades y asignarles un rol cuidador, es repensar las brechas y barreras de la discriminación y la violencia contra la mujer.

Corte Constitucional Sentencia T-587/17: Acción de tutela contra providencias judiciales. Caso en que se decidió otorgar custodia definitiva a la madre de niña, sin tener en cuenta que ella había manifestado querer vivir con su padre

Con esta sentencia la Corte Constitucional se encargó de sentar un precedente judicial con respecto a los casos de obtención de la patria potestad de los menores de edad. Concluyendo que, el accionar de los jueces no se debe corresponder con estereotipos acorde al género e ignorando que los menores son sujetos de derecho y especial protección. Puesto que, su derecho a hablar y ser escuchados no puede ser ignorado ni olvidado.

Dentro del problema jurídico tratado por la Corte se hace alusión a la discriminación basada en estereotipos de género pues “por estereotipos de género se le otorgue la custodia de la menor a su madre, exclusivamente en razón al mismo sexo que comparten y apreciaciones subjetivas sobre la adolescencia que vive”. (Sentencia T-587/17).

Por lo anterior, la Corte Constitucional argumenta que:

“ [...] el juzgador accionado omitió hacer el análisis detallado y completo de cada una de las probanzas recaudadas, [...] Además, tampoco efectuó un estudio de las conclusiones a las que llegaron los distintos profesionales en las pruebas interdisciplinarias, entre los

expuestos anteriormente, se resaltan los informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y de la Trabajadora Social, en los que si bien se concluyó que ambos padres exhibían comportamientos psicológicos estables y evidenciaban capacidades para procurar el bienestar a su hija, existía clara inclinación de la menor de permanecer bajo el cuidado su progenitor. [...] la Sala encontró el desconocimiento de normas constitucionales y legales (Constitución Política, Convención sobre los Derechos del Niño y Código de la Infancia y la Adolescencia), así como de jurisprudencia constitucional que protege el interés superior de los niños, su derecho a ser escuchados y sus opiniones valoradas, como sujetos titulares de derechos y objeto de protección constitucional reforzada. Así, el argumento del juez termina siendo discriminatorio en cuanto asigna roles absolutos a la mujer y al hombre en la crianza de los menores de edad con fundamento en las familias compuestas por un hombre y una mujer. En su concepción de género, solo las madres son aptas para guardar y cuidar a las niñas, mientras los padres, tendrían vedada dicha custodia por su sexo masculino. [...] En tal virtud, resulta improcedente que las autoridades judiciales reproduzcan o impongan los roles que tienen lugar al interior de las familias compuestas por un hombre y una mujer, por cuanto estas no son las únicas protegidas por la Constitución. En este caso, los estereotipos familiares afectaron no solo al padre sino a su hija menor de edad, sujeto vulnerable cuyo interés superior resulta resquebrajado”

(Sentencia T-587/17. Corte Constitucional de Colombia, 2017).

Corte Constitucional Sentencia SU-349/22: Acción de tutela contra providencias judiciales en proceso de exoneración de cuota alimentaria. Los jueces deben aplicar perspectiva de género para evitar escenario de revictimización institucional contra la mujer.

A partir de esta sentencia de unificación la Corte Constitucional sienta otro precedente judicial, argumentando que los jueces deben aplicar perspectivas de género para evitar escenarios de revictimización; además, de agregar componentes de reparación integral. Pues, esta sentencia de unificación se da en el contexto de una madre que no reconoce un fallo expedido por el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Armenia, donde —en un proceso de exoneración de cuota alimentaria— se reduce el importe que su ex-cónyuge debía dar. Todo esto tomando en consideración la violencia sistemática que sufrió durante los años que estuvo con él.

Para resolver el problema jurídico presentado la Corte aludió al bloque de constitucionalidad, tomando como referencia la Convención Belem Do Pará, La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, entre otros. Así como a la misma Corte y su jurisprudencia sobre “la necesidad de aplicar el enfoque de género en aquellos eventos en donde se evidencie el uso de la violencia que ha afectado, de manera desproporcionada, a la mujer, como sucede en el marco de las relaciones de pareja” (Sentencia SU-349/22).

Para ello la Corte se refirió a:

“(I) la violación directa de la Constitución Política, al crear un escenario de violencia institucional contra la accionante, desconociendo así lo dispuesto en los artículos 13 y 43 del Texto Superior, relacionados con el derecho a la igualdad y no discriminación contra la mujer, así como lo dispuesto en instrumentos internacionales. Manifestó que se configuró un escenario de violencia institucional en contra de quien ya había sido víctima de violencia por razón de género en contra de la mujer. Por último, indicó este tribunal que la actuación del juez de instancia, en

consideración de la Sala Plena, reprodujo estereotipos sobre la ausencia de valoración de las labores de cuidado como aporte a la sociedad conyugal.

*(II) Incurrió en un defecto específico de **ausencia de motivación**, al haber prescindido del enfoque de género, el cual es de obligatoria aplicación para los operadores judiciales.*

*(III) Incurrió en un **defecto fáctico**, por indebida valoración probatoria. Cuestionó este tribunal el desconocimiento de la prohibición de discriminación en los procesos judiciales e, incluso, reprochó la actuación de la autoridad judicial que restó importancia a las declaraciones de la víctima y al haber incluido argumentos que resultaron revictimizantes”.*

(Sentencia T-587/17. Corte Constitucional de Colombia, 2022).

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C

En atención a lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, especialmente en los artículos 8, 12, y 13 el Concejo de Bogotá es Competente para tramitar este Proyecto de Acuerdo ya que los contenidos del mismo no versan sobre los aspectos enunciados en los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 14, 16, 17, y 21, del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 la presentación de esta iniciativa no se encuentra restringida al Ejecutivo.

- Decreto Ley 1421 de 1993, Artículo 8. Funciones generales. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.
- Decreto Ley 1421 de 1993, Artículo 12. – Atribuciones. Corresponde al con-cejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)

- Decreto Ley 1421 de 1993, Artículo 13- Iniciativa: “los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero el contador y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

Solo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 14, 16, 17, y 21 del artículo anterior. Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del Distrito, autoricen enajenar sus bienes y dispongan excepciones tributarias o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir modificaciones a los proyectos presentados por el alcalde”.

V. IMPACTO FISCAL

De acuerdo con la Ley 819 de 1993 en su artículo 7, “Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo”.

El presente proyecto de acuerdo no presenta un impacto fiscal, por tanto, ponemos a consideración del Honorable Concejo de Bogotá D.C., la presente iniciativa.

Referencias:

Ambito Jurídico. Violencia Económica. Recuperado de:
<https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/la-violencia-economica-contr-la-mujer-un-dano-silencioso-dentro-del-proceso-de>

Potestad marital. Recuperado de:
<https://revistas.urosario.edu.co/xml/733/73365628012/html/index.html>

Violencia Económica. Recuperado de: <https://oemcolombia.com/la-violencia-economica-y-patrimonial-es-otra-forma-de-agresion-contr-las-mujeres/>

Atentamente,

Autor

JULIÁN FELIPE TRIANA VARGAS

Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

Coautor

JUAN JAVIER BAENA MERLANO

Concejal de Bogotá
Partido Nuevo Liberalismo

PROYECTO DE ACUERDO NO 111 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS, CORRESPONSABLES Y CUIDADORAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

El Concejo de Bogotá D.C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 313 numeral 1° de la Constitución Política, el artículo 12 numeral 1° del Decreto Ley 1421 de 1993;

CONSIDERANDO

Que el artículo 1 de la Constitución política establece que Colombia es un Estado social de derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana

Que el artículo 13 de la Constitución política establece el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación, protegiendo a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad

Con la Ley 823 de 2003 establece la obligación, en cabeza del Estado, de generar prevención y protección a las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia,

Que la Ley 1257 de 2008 busca garantizar la prevención y cuidado de cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres

Que la Ley 1542 de 2012 modifica el Código de Procedimiento Penal, eliminando el carácter querellable de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, lo que permite que estos delitos sean perseguidos de oficio por las autoridades

Que la Ley 1146 de 2007 establece normas para la prevención de la violencia sexual y la atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual

Que Decreto 164 de 2010 crea la "Mesa Interinstitucional para erradicar la Violencia contra las Mujeres", una comisión intersectorial destinada a coordinar acciones para eliminar la violencia de género en el país.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida”, establece que promoverán masculinidades cuidadoras y no violentas, que incentiven la plena participación de los hombres, los jóvenes y los niños en las responsabilidades de cuidado

Que el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá camina segura”, establece que se promoverán masculinidades no violentas, corresponsables y cuidadoras

ACUERDA:

Artículo 1 Objeto. Contribuir a la transformación de las masculinidades tradicionales, mediante la generación de reflexiones y espacios que contribuyan con el desaprendizaje del machismo y la construcción de formas de ejercer las masculinidades no violentas, corresponsables y cuidadoras.

Parágrafo 1. Esta construcción debe contar con enfoque diferencial, de género y territorial y contemplar la diversidad que hay en las personas que ejercen la masculinidad.

Artículo 2. Institucionalización de la Línea Calma La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte, pondrá a disposición de la ciudadanía la Línea Calma en un formato de 24 horas de lunes a domingo, orientando sobre el manejo de las emociones y facilitando el acompañamiento a personas que habitan las masculinidades en cualquier momento de manera rápida, oportuna y favorable.

Parágrafo 1: Dicha línea será atendida por profesionales en psicología y tendrá la opción de llamada o videollamada y chat vía WhatsApp

Parágrafo 2: La Línea Calma contará con datos confiables, sobre las personas que llaman y su caracterización, así como la razón de la llamada y el manejo dado. Asimismo, se realizarán estudios sobre el impacto de la línea en la reducción de violencias contra las mujeres y personas feminizadas.

Parágrafo 3: La línea calma garantizará condiciones de trabajo dignas y justas para los profesionales que trabajan en la misma. Asimismo, contará con actividades de cuidado al cuidador que protejan la

salud mental de estos trabajadores.

Artículo 3. Institucionalización de la Escuela Hombres al Cuidado. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte, pondrá a disposición de la ciudadanía la *Escuela de Hombres Al Cuidado* con el fin de desarrollar y fortalecer las habilidades y las prácticas de cuidado y transformar las creencias sobre la responsabilidad de cuidado de las personas que habitan las masculinidades.

Parágrafo: La Administración Distrital habilitará esta estrategia de manera virtual y presencial.

Artículo 4. Lineamientos: La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte, promoverá la participación activa de los hombres en la construcción de masculinidades no violentas cuidadoras y corresponsables en el Distrito Capital, a través de los siguientes mecanismos:

- Generación de actividades culturales de desaprendizaje del machismo con la implementación de acciones performativas en calle, campañas a través de medios de comunicación diversos (digitales y presenciales), privilegiando aquellos de origen comunitario e independientes, entre otras estrategias.
- Generación de actividades de apropiación de conocimientos sobre la importancia de la participación activa de los hombres en las tareas de cuidado y la crianza.
- Capacitación y apropiación de conocimientos en masculinidades cuidadoras y corresponsables dirigida a hombres de diferentes edades y contextos.
- Promoción de políticas de trabajo flexible que permitan a los hombres tener un mayor tiempo para la atención y cuidado de sus hijos e hijas.
- Creación de incentivos y reconocimientos a empresas que promuevan la participación de los hombres en las tareas de cuidado y crianza en el hogar.

Artículo 5. Prevención y educación. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Educación y en coordinación con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, promoverá en todas las instituciones educativas las masculinidades no violentas, cuidadoras y corresponsables, desde el diseño e implementación de actividades concretas para el desaprendizaje del machismo.

Parágrafo 1. La ejecución de estas actividades deberá garantizar la inclusión de las y los estudiantes,

padres, madres y acudientes.

Parágrafo 2. Las actividades vendrán acompañadas de material bibliográfico existente, que permita la reflexión y promueva masculinidades no violentas, cuidadoras y corresponsables. Se promoverá la asistencia y el consumo de contenido cinematográfico inherentes al tema.

Artículo 6. Entidades del Distrito. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte efectuará todas las acciones necesarias para transversalizar las masculinidades no violentas, cuidadoras y corresponsables al interior de todas las entidades distritales, con el fin de construir ambientes laborales libres de violencias machistas.

Artículo 7. Promoción de la salud. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Salud, realizará estudios sobre las afectaciones en la salud, derivadas del ejercicio de masculinidades violentas e implementará acciones para prevenir dichas afectaciones en las personas que habitan la ciudad.

Artículo 8. Promoción de modelos de paternidad y cuidado. La Administración Distrital de Bogotá promoverá la implementación y articulación de modelos de paternidad como la Escuela de Padres Cuidadores en los que las personas que habitan las masculinidades tengan un papel activo y relevante en el cuidado de los hijos y las labores domésticas.

Artículo 9. Monitoreo y gestión del conocimiento. La Administración Distrital, realizará seguimiento y monitoreo a las estrategias y actividades que realice en torno a la transformación de las masculinidades en el Distrito.

Parágrafo 1. La Administración Distrital realizará las acciones pertinentes para que la producción de conocimiento que proviene de la ejecución, seguimiento y monitoreo de todas las acciones previstas en este acuerdo, sea preservado y divulgado.

Artículo 10. Campañas de comunicación. La Administración Distrital de Bogotá, por todas las vías posibles y canales de comunicación habilitados para el Distrito, llevará a cabo campañas de comunicación para promover las masculinidades no violentas, cuidadoras y corresponsables en la ciudad. Asimismo, promoverá la Escuela de Hombres al Cuidado y la Línea Calma.

Parágrafo. La difusión se podrá hacer por radio, televisión, medios impresos, medios digitales, performance callejeros y todas las formas de comunicación con las que cuenta el Distrito Capital.

Artículo 11. Informes. La Administración Distrital de Bogotá, en cabeza de La Secretaría Distrital de Cultura, remitirá un informe anual que dé cuenta del avance en cada uno de los lineamientos del presente acuerdo.

Artículo 12. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 112 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA EL TRAZADO FERREO Y TURISTICO
“INGENIERO EDUARDO RODRIGUEZ ARDILA” EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D. C.”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETIVO**

El presente Proyecto de Acuerdo busca darle denominación al trazado Ferrero que se encuentra comprendido en la jurisdicción de la ciudad de Bogotá con el nombre de “ingeniero Eduardo Rodríguez” en la ciudad de Bogotá D.C.” con el fin de reconocer el legado ya que Eduardo Rodríguez fue un destacado promotor y gestor del Ferrocarril Turístico de Bogotá, (Turistren). conocido por su esfuerzo en resaltar la importancia histórica y cultural del ferrocarril en la región. Su trabajo se centró en recuperar y mantener la infraestructura del ferrocarril, así como en desarrollar rutas turísticas que permitieran a los visitantes disfrutar de los paisajes y la historia del trayecto. Gracias a su labor, se han realizado iniciativas que fomentan el turismo sostenible y la valorización del patrimonio ferroviario en Colombia.

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA**CONTEXTO GENERAL**

Entre finales del siglo XIX y 1984, se construyeron 3.300 kilómetros de ferrocarriles en Colombia. Las estaciones de las principales ciudades se convirtieron en hitos arquitectónicos y urbanos. Por ejemplo, la estación de la Sabana en Bogotá, diseñada por Mariano Santamaría y decorada por el escultor suizo Colombo Ramelli, Durante tres décadas, Eduardo Rodríguez se familiarizó con cada locomotora de Ferrocarriles Nacionales, conociendo su estado, funcionamiento y

objetivos. Vivió el periodo en que los más de tres mil kilómetros de vías en Colombia comenzaron a quedar en desuso, debido al impulso del transporte por carretera para pasajeros y mercancías, mientras que las bellas estaciones se transformaban en museos vivos.

JUSTIFICACIÓN

Eduardo Rodríguez, fundador de Turistrén, su labor fue esencial en la revitalización de antiguas locomotoras desde los años 90, convirtiéndolas en un emblemático atractivo de Bogotá y Cundinamarca en lo que hoy se conoce como el Tren Turístico de La Sabana, Esta compañía es la única del país que hoy transporta pasajeros por rieles.

En los años 80, Eduardo Rodríguez, que se desempeñaba como gerente comercial de la empresa estatal ferrocarriles nacionales donde convenció al entonces presidente de la república Belisario Betancur cuartas con la idea de crear una ruta turística que conectara Bogotá con Zipaquirá.

El proyecto de Eduardo Rodríguez para el tren sabanero quedó en suspenso tras la liquidación de Ferrocarriles Nacionales, ya que la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías), que tomó su lugar, determinó que las vías solo se utilizarían para el transporte de carga., a pesar de esta situación, Eduardo Rodríguez, quien había sentido una profunda nostalgia por los trenes de pasajeros desde su infancia, decidió no dejar que el Tren de la Sabana desapareciera. Junto a tres socios, fundó la empresa (Turistren) con el objetivo de continuar operando esta ruta y restaurar las antiguas locomotoras de Ferrocarriles Nacionales.

Entre sus logros, la empresa rehabilitó cuatro locomotoras de vapor del taller de Flandes (Tolima), que habían sido vendidas para desguace. Actualmente, estas son las únicas de su tipo en funcionamiento en toda América Latina.

Con el tiempo, la ruta turística de (Turistren) se consolidó como una opción popular para estudiantes de universidades como la Militar Nueva Granada, la del Bosque y la de la Sabana, transformando largas horas de tráfico y viajes intermunicipales en un cómodo trayecto de solo 41 minutos en tren.

Don Eduardo Rodríguez de origen santandereano sabía cómo ensamblar y desensamblar una locomotora casi de memoria. En entrevista a revista semana expreso que Recordaba que, cuando era niño, esperaba con ansias el tren que lo llevaba de Arcabuco (Boyacá) a Bogotá. Y que, Gracias a su habilidad con las matemáticas, decidió estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, a su vez Cuando terminó su pregrado, vio en la universidad un letrero que decía: "Los Ferrocarriles Nacionales de Colombia ofrecen beca para estudiar en Inglaterra". No lo dudó y se presentó. Situación que lo llevo a vivir dos años y medio en Mánchester, donde estudió todo lo relacionado con el ferrocarril. "Fue una época increíble de su vida, porque además le abrió muchas puertas", conto el ya fallecido ingeniero Eduardo Rodríguez Ardila.

Eduardo Rodríguez se resistía a aceptar la idea de abandonar los trenes, él era el último defensor de la causa ferroviaria del país y al recorrer los talleres de la Estación de la Sabana, parecía un niño pequeño mostrando feliz sus juguetes. Tenía cuatro locomotoras de vapor Baldwin fabricadas en Estados Unidos en 1947 y una más pequeña, de 1921, que había recuperado con la ayuda de un amigo británico que, al igual que él, era un apasionado de estas máquinas. En la estación había tornos, prensas y otras maquinarias de la primera mitad del siglo XX; techos altos de tejas de zinc, abundante luz natural y, como era de esperar en un lugar así, polvo, grasa, aceite y hollín que, tal vez por el encanto de la escena, no resultaba molesto para quien lo visitaba.

Andrés Felipe Vergara, quien tuvo la oportunidad de entrevistar a Eduardo Rodríguez, recordó que su primera aparición en El Tiempo ocurrió a los 10 años, cuando se realizó un reportaje sobre el Tren de La Sabana. Desde niño, Eduardo le permitió subirse a las cinco locomotoras a vapor que sobrevivieron de las más de 600 que hubo en el país. Un viaje a Villapinzón en febrero de 2007 fue la inspiración para su tesis de grado en Ciencia Política, donde analizó la desaparición de los ferrocarriles en Colombia. A lo largo de los años, Rodríguez compartió generosamente sus historias y conocimientos sobre trenes, ingeniería, geografía e historia, enriqueciendo la comprensión de quienes lo rodeaban. Su dedicación ha mantenido vivo el único tren turístico y de pasajeros en Colombia desde los años 90, a pesar de los desafíos. Actualmente, Turistrén opera rutas hacia Zipaquirá, conecta con universidades en el norte de Bogotá y presenta su famoso tren navideño cada diciembre. Así, Eduardo ha dejado un legado valioso, preservando el patrimonio ferroviario y creando un vínculo especial con quienes lo conocen.



Entrevistas vida y obra Eduardo Rodríguez Ardila

- Video conmemorativo fallecimiento del ingeniero Eduardo Rodríguez Ardila restaurador del Tren de la Sabana de Bogotá.

<https://www.youtube.com/watch?v=rTLjzwtUBW0>

- Turistren Colombia - Tren Turístico de la Sabana.

https://www.youtube.com/watch?v=XT9raLo_PfM

- crónicas canal capital.

<https://www.youtube.com/watch?v=hWXPYuZkwos>

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

De Orden Constitucional

- Artículo 300 Numeral 2: Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, **el turismo**, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera.

De Orden Nacional

- LEY 21 DE 1988 Por la cual se adopta el programa de recuperación del servicio público de transporte ferroviario nacional, se provee a su financiación y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1278 del 13 de octubre de 2021, con el propósito de promover la inversión privada en los proyectos ferroviarios de transporte de carga, y/o pasajeros en el país.

COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra sustentado en las normas circunscritas a la constitución Política de Colombia, a las Leyes colombianas, a los Acuerdos del Distrito Capital, al Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital, P. G.

A. 2008 - 2038, así como también es competente el Concejo de Bogotá D. C. para tramitar, debatir y aprobar esta iniciativa, apoyada en las disposiciones que de acuerdo con las facultades que le otorga al Concejo de Bogotá D. C. la carta política en el artículo 313 y el Decreto 1421 de 1993.

"ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen".

El Decreto Ley 1421 de 1993

“ARTÍCULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.”

IV. IMPACTO FISCAL

Siguiendo lo ordenado por la Ley 819 de 2003 que establece en su Artículo 7 que “...en todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”. Es de señalar que el presente Proyecto de Acuerdo no tiene impacto fiscal.

Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que no obstante la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”.

“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES – CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 112 DE 2025**PRIMER DEBATE**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA EL TRAZADO FERREO Y TURISTICO
“INGENIERO EDUARDO RODRIGUEZ ARDILA” EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D. C.”**

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ARTICULADO**ACUERDA:**

ARTÍCULO. 1º. OBJETO. El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto denominar el trazado férreo y turístico de Bogotá con el nombre “ingeniero Eduardo Rodríguez Ardila”.

ARTÍCULO. 2º. la secretaria distrital de turismo podrá llevar a cabo el levantamiento de una placa o insignia para tal reconocimiento en coordinación con las autoridades distritales pertinentes.

ARTÍCULO. 3º El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los _____ () días del mes de _____ de dos mil veinticinco (2025).

Autor

JOSE DEL CARMEN CUESTA NOVOA

Partido Colombia Humana.

PROYECTO DE ACUERDO NO 113 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS FAMILIAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****1. OBJETO DEL PROYECTO**

La presente iniciativa tiene por objeto adoptar la Política Pública de Fortalecimiento del Bienestar Integral de las Familias en el Distrito Capital, con el fin de promover su desarrollo, cohesión y bienestar, mediante acciones intersectoriales y participativas que aborden de manera integral los problemas que afectan a las familias en Bogotá, en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura” 2024-2027.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS***2.1 Antecedentes de la Iniciativa***

Antecedentes relacionados con la adopción de Política Pública de Fortalecimiento del Bienestar Integral de las Familias en el Distrito Capital que se haya presentado en el Concejo de Bogotá en la legislatura pasada no los hay.

Mediante el Decreto 545 de 2011 se adoptó la Política Pública para las Familias con una vigencia de 2010 a 2025 y teniendo en cuenta el CONPES D.C. 18 que tiene que ver con la actualización del Plan de Acción de la Política Pública para las Familias 2021 – 2025 presentado por el Sector de Integración Social y publicado en el Registro Distrital No. 7359 del 4 de febrero de 2022 se decidió en el Comité Operativo Distrital para las Familias en sesión ordinaria del 18 de junio de 2020 por actualizar el Plan de Acción de la Política Pública para el período 2021 - 2025⁴

⁴ CONPES D. C. 18 Actualización del Plan de Acción de la “POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS FAMILIAS 2021-2025” recuperado de https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/conpes_dc_18_familias_0.pdf

2.2 Justificación

La importancia de ésta iniciativa tiene que ver en el entendido que siendo la institución de la familia el núcleo fundamental de una sociedad y teniendo en cuenta lo preceptuado en la Constitución Política de Colombia en su artículo 5° El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad, es la familia la Institución más importante en nuestra sociedad se debe buscar una protección especial e implementar todas aquellas medidas para garantizar la importancia de lo que es la institución de la familia y proteger todas aquellas formas de familia que hoy puedan existir, con el paso de los tiempos el concepto de familia a evolucionado de tal forma que hay una mayor diversidad de tipos de familia.

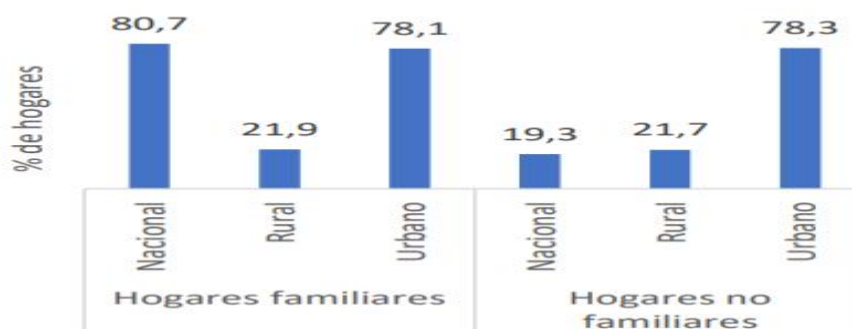
Es así que, para la Organización de las Naciones Unidas el término “Familia” no lo considera con una definición universal, ya que se encuentra a la vanguardia y entiende que hoy la familia es diversa en cuanto a su estructura.

En Colombia y de acuerdo al último censo de población y familia publicado en octubre de 2020 por el Departamento Nacional de Planeación⁵, establece que, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018 identifico a 43'835.324 personas las cuales se encuentran organizadas en 14'243.223 hogares, el 80,7% de los hogares en Colombia son familiares (tienen relaciones de parentesco), mientras un 19,3% son hogares no familiares (Gráfico 1).

A nivel de zonas, la mayor proporción de los hogares se ubica en la zona urbana, independientemente del parentesco entre sus miembros. 78,1% de los hogares familiares y 78,3% de los hogares no familiares habitan en el área urbana.

⁵ Boletín No. 14 Censo de población y familia recuperado de <https://observatoriodefamilia.dnp.gov.co/Documents/Boletines/BOLETIN%20No.14.pdf>

Gráfico 1. Tipologías de estructura familiar, hogares familiares y no familiares.



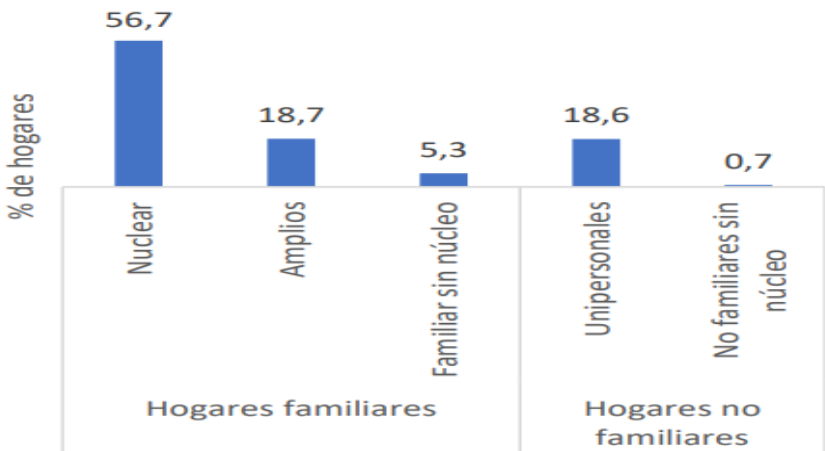
Fuente: CNPV-DANE 2018. Elaboración SPSCV, DNP.

Los hogares familiares se dividen en:

- Hogares nucleares: Conformados por padre y madre con o sin hijos. Pueden ser “biparentales” cuando están presentes ambos padres, o “monoparentales” si hay presencia de uno de los dos padres.
- Hogares amplios: Conformados por un hogar nuclear más otros parientes o no parientes. Pueden ser “extensos”, conformados por un hogar nuclear más otros parientes, o “compuestos”, que se conforman de un hogar nuclear (con o sin otros parientes) más otros no parientes.
- Familiares sin núcleo: No existe un núcleo conyugal primario o una relación padre/madre-hijo/hija, pero sí hay otras relaciones de parentesco en primer o segundo grado, como, por ejemplo, hermanos.

De este modo, en el Gráfico 2 se puede ver que más de la mitad de los hogares familiares en Colombia son nucleares (56,7%), donde predominan los hogares biparentales. Asimismo, un 18,7% de los hogares son amplios, predominando los hogares extensos. Adicionalmente, 5,3% de los hogares son familiares sin núcleo.

Gráfico 2. Tipologías de estructura familiar desagregadas.



Fuente: CNPV-DANE 2018. Elaboración SPSCV, DNP.

En cuanto a la edad que tienen los miembros que conforman los hogares, realizan la siguiente clasificación:

- Hogares generacionales con adultos mayores (mayores de 60 años).
- Hogares generacionales con generación intermedia (entre 15 y 59 años).
- Hogares sin niños: con generación intermedia y adultos mayores.
- Hogares sin generación intermedia: con adultos mayores y niños (menores de 14 años).
- Hogares sin adultos mayores: con generación intermedia y niños.
- Hogares multigeneracionales: con las tres generaciones.
- Hogares solo con niños.

Gráfico 3. Tipologías generacionales.

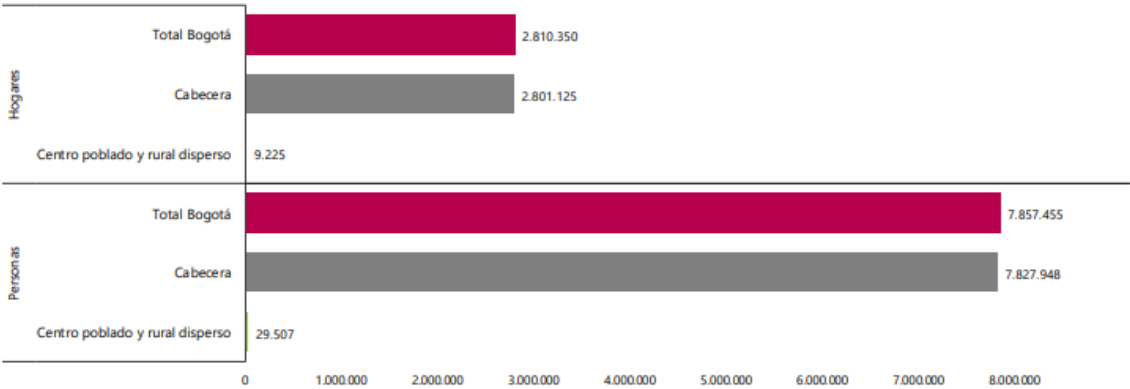
Fuente: CNPV-DANE 2018. Elaboración SPSCV, DNP.

La anterior gráfica muestra que la mayoría de los hogares en Colombia están conformados por niños y generación intermedia, es decir, sin presencia de adultos mayores (36,6%). Le siguen los hogares con generación intermedia (32,9%) y hogares sin niños (13,8).

En Bogotá y de acuerdo a la información publicada por el DANE el 1 de julio de 2022 la encuesta multipropósito realizada en el 2021 la cual de acuerdo a lo informado recoge de manera robusta y periódica las condiciones de vida de la población y refleja lo siguiente:

En cuanto a cantidad de hogares y personas que viven en Bogotá el Boletín Técnico⁶ refiere que en el año 2021 con base en las proyecciones de población del Censo Nacional de Población y de Vivienda del año 2018 (CNPV 2018), en la cabecera de la ciudad de Bogotá habitaban 7,8 millones de personas, distribuidas en 2,8 millones de hogares. En el centro poblado y rural disperso de la ciudad, la ciudad contaba con una población de 29 mil personas en 9 mil hogares.

⁶ Boletín técnico encuesta multipropósito Bogotá – Cundinamarca (EM) 2021 recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/multi/Boletin_EM_2021.pdf



Fuente: DANE, EM.

Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.

En cuanto al promedio de personas que hay por hogar con relación a la encuesta multipropósito del 2017 a la del 2021; allí informan que en el año 2021 en la cabecera de Bogotá fue de 2,79 en el año 2017 era de 2,98, hubo una disminución del 0,18, disminución que estadísticamente es significativa y refleja que las 3 localidades en la parte urbana que se conforman entre 3 o más personas se encuentran en Ciudad Bolívar, Bosa y Usme como se ve en el siguiente gráfico.

| Localidad urbana | 2017 | 2021 | Variación en puntos porcentuales 2017-2021 | Diferencia significativa |
|--------------------|------|------|--|--------------------------|
| Ciudad Bolívar | 3,24 | 3,12 | -0,11 | Sí |
| Bosa | 3,32 | 3,10 | -0,22 | Sí |
| Usme | 3,45 | 3,07 | -0,37 | Sí |
| San Cristóbal | 3,21 | 2,96 | -0,25 | Sí |
| Antonio Nariño | 3,22 | 2,92 | -0,30 | Sí |
| Kennedy | 3,13 | 2,83 | -0,29 | Sí |
| Puente Aranda | 2,95 | 2,82 | -0,12 | Sí |
| Suba | 2,89 | 2,82 | -0,07 | Sí |
| Rafael Uribe Uribe | 3,09 | 2,82 | -0,27 | Sí |
| Bogotá cabecera | 2,98 | 2,79 | -0,18 | Sí |
| Santa Fe | 2,53 | 2,76 | 0,23 | Sí |
| Engativá | 3,07 | 2,74 | -0,33 | Sí |
| Fontibón | 2,94 | 2,69 | -0,24 | Sí |
| Barrios Unidos | 2,79 | 2,62 | -0,17 | Sí |
| Tunjuelito | 2,98 | 2,56 | -0,41 | Sí |
| Los Mártires | 2,77 | 2,52 | -0,26 | Sí |
| Usaquén | 2,53 | 2,49 | -0,03 | No |
| La Candelaria | 2,25 | 2,36 | 0,12 | No |
| Chapinero | 2,08 | 2,23 | 0,15 | Sí |
| Teusaquillo | 2,32 | 2,18 | -0,14 | Sí |

Fuente: DANE, EM

Nota: la diferencia estadísticamente significativa se llamará «Diferencia significativa». Indica si hay o no evidencia estadística de que existe una diferencia entre los valores comparados.

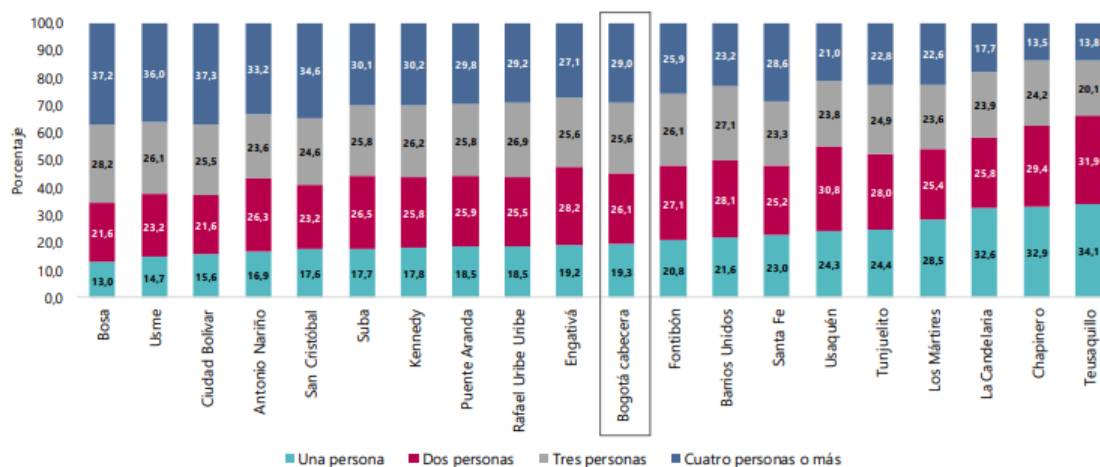
En la Bogotá rural el comportamiento con respecto a la encuesta multipropósito del 2017 con el 2021 presentó una disminución en puntos porcentuales pero sin diferencia significativa.

| Localidad rural | 2017 | 2021 | Variación en puntos porcentuales 2017-2021 | Diferencia significativa |
|---|-------------|-------------|--|--------------------------|
| Chapinero | 3,30 | 2,74 | -0,56 | No |
| Santa Fe | 4,15 | 3,06 | -1,09 | No |
| Suba | 3,43 | 3,16 | -0,27 | No |
| Sumapaz | 3,39 | 3,16 | -0,23 | No |
| Usme | 3,66 | 3,20 | -0,47 | Sí |
| Bogotá centro poblado y rural disperso | 3,67 | 3,20 | -0,47 | No |
| Ciudad Bolívar | 3,86 | 3,28 | -0,58 | Sí |
| Usaquén | 4,52 | 3,63 | -0,89 | No |
| San Cristóbal | 3,38 | 3,73 | 0,35 | No |

Fuente: DANE, EM

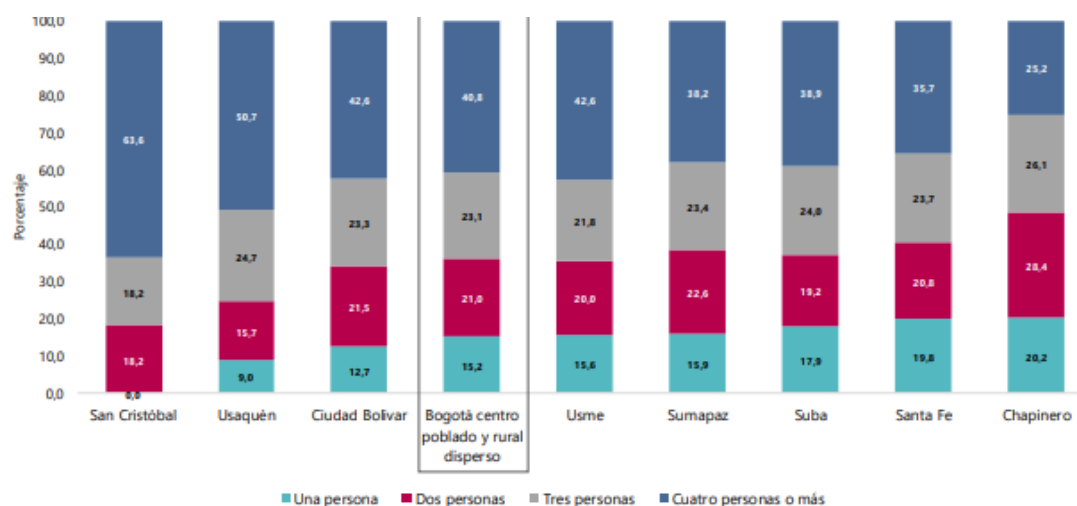
Nota: la diferencia estadísticamente significativa se llamará «Diferencia significativa». Indica si hay o no evidencia estadística de que existe una diferencia entre los valores comparados.

En cuanto al tamaño de los hogares en la Encuesta Multipropósito encontraron que para la cabecera de Bogotá el porcentaje de hogares unipersonales en 2021 fue del 19,3%. Las localidades con mayor proporción de hogares unipersonales fueron Teusaquillo (34,1%), Chapinero (32,9%) y La Candelaria (32,6%). Por su parte, los hogares conformados por 4 personas o más se observaron en mayor proporción en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Usme, en las cuales los hogares de este tamaño fueron el 37,3%, 37,2% y 36,0%, respectivamente.



Fuente: DANE, EM

En 2021, para centro poblado y rural disperso de Bogotá, el porcentaje de hogares unipersonales fue de 15,2%. Las localidades con mayor proporción de hogares unipersonales en su área rural fueron Chapinero (20,2%) y Santa Fe (19,8%). En la ruralidad de Bogotá se encontró que el 40,8% de los hogares estaban conformados por 4 personas o más. Los hogares grandes se observaron principalmente en la localidad de San Cristóbal en donde un 63,6% estaba conformado por 4 personas o más.



Fuente: DANE, EM

Además de saber cómo se encuentran conformadas las familias en Colombia y en especial de Bogotá, también podemos ver cómo los casos de violencia intrafamiliar han aumentado para éste 2024 y los casos de salud mental.

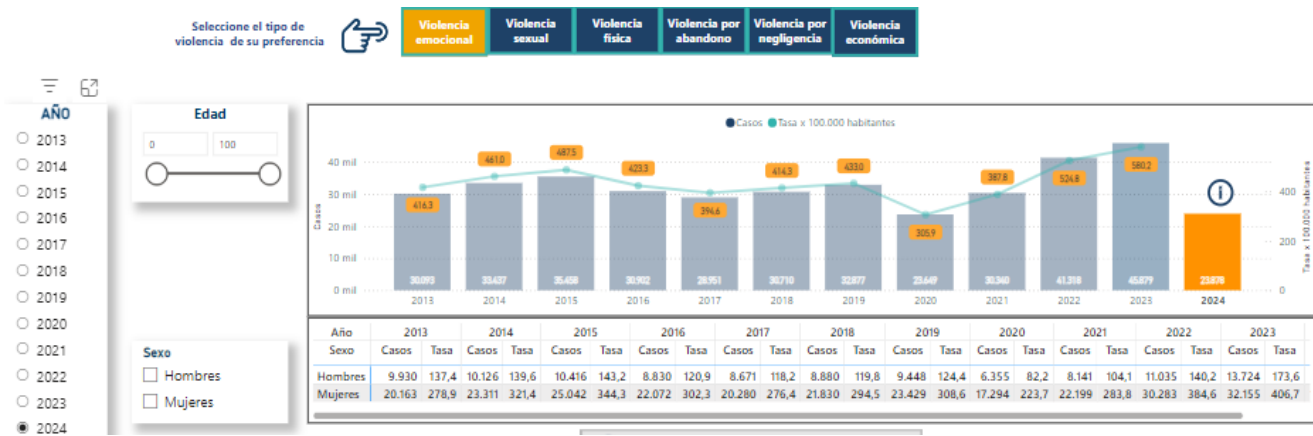
En cuanto al tema de violencia intrafamiliar y de acuerdo a los datos y a la información publicada en la página de la Secretaría Distrital de Salud - Observatorio de Salud de Bogotá – Datos abiertos, allí abordan el indicador de Violencia Intrafamiliar y de género en Bogotá donde la definición de violencia intrafamiliar se concibe como toda acción u omisión protagonizada por uno o varios miembros de la familia, a otros parientes infringiendo daño físico, psicoemocional, sexual, económico o social. En el tema de violencia intrafamiliar, se hace referencia al abuso de poder sobre los miembros más débiles que están a su cuidado, por eso afecta principalmente a los niños y niñas, a las mujeres, personas mayores y a quienes tienen discapacidad (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2006).

Y es que la violencia intrafamiliar constituye uno de los principales indicadores de los problemas prioritarios en salud mental.

La violencia intrafamiliar incluye diversas expresiones dentro de las cuales se encuentran la violencia emocional, física, sexual, económica, el abandono y la negligencia; una persona puede sufrir múltiples tipos de violencia a la vez pero para el conteo de casos únicos se toma la violencia emocional, la cual se encuentra presente en todas tipologías.

Para el primer semestre del año 2024; se notificaron 23.878 casos de violencia intrafamiliar con una variación porcentual al incremento del 1,6% (368 casos) con respecto, al primer semestre del año 2023 donde se reportaron 23.510 casos. El 68% (16.236) de los casos notificados la víctima es una mujer y en el 32% (7.642)

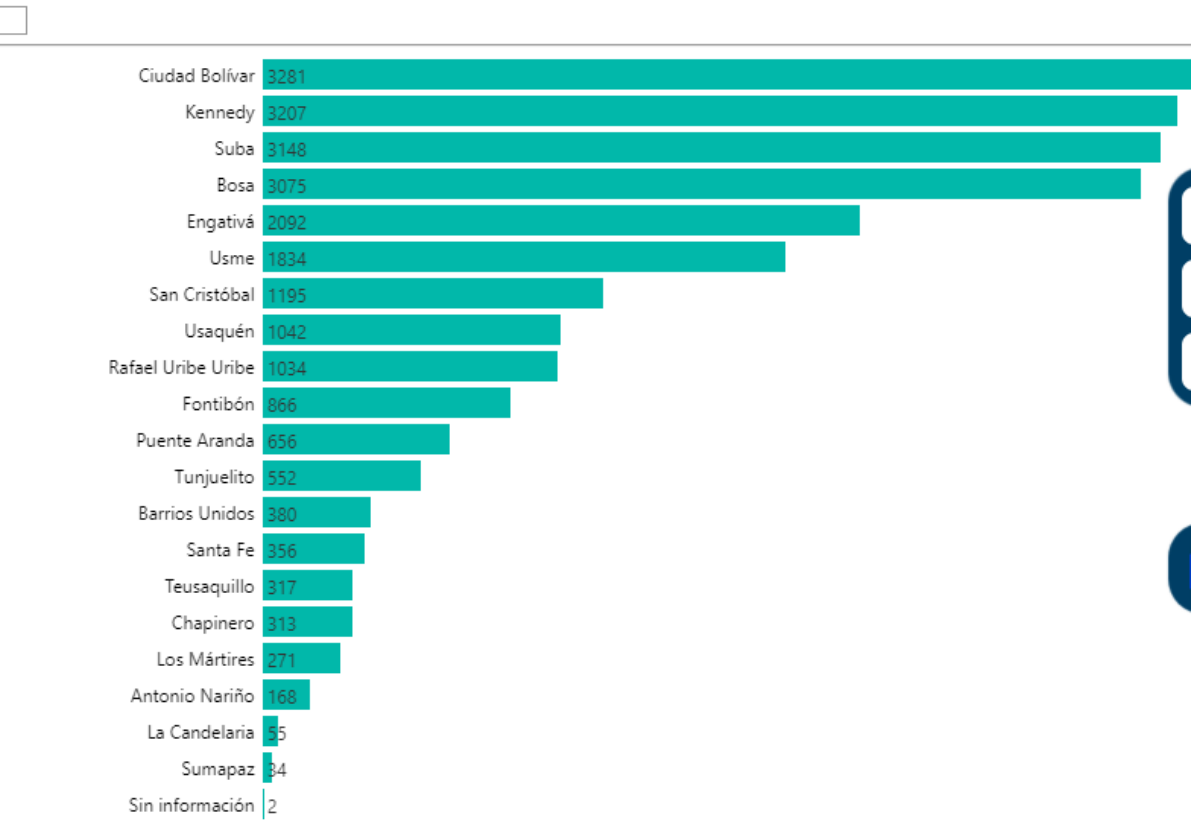
es un hombre. Lo anterior, muestra que por una razón de sexo de alrededor de 2,1 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar por caso que se presenta en un hombre. Con respecto, a la condición final de la víctima se encuentra que el 0,05% (13) de los casos notificados falleció; donde por sexo la mujer representa el 46,2% (6) y el hombre 53,8% (7) distribuidos por curso de vida de la siguiente manera: primera infancia (0 a 5 años) el 76,9% (10), adolescencia (12 a 17 años) el 7,7% (1) y vejez (mayor de 60 años) con el 15,4% (2). Resaltan que en los casos donde falleció la víctima no necesariamente están asociados directamente a una tipología de violencia. En este sentido, estos casos se encuentran en estudio por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).



Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>

Las localidades que agrupan el 53,2% (n=12.711) de los casos notificados para el primer semestre del 2024 son: Ciudad Bolívar con un 13,7% (n=3.281), Kennedy con el 13,4% (n=3.207), Suba con el 13,2% (n=3.148) y Bosa con un 12,9% (n=3.075). El lugar más frecuente donde ocurren las situaciones de violencia es la vivienda con el 82,4% (n=19.666). De otra parte, al revisar la relación de la víctima con el agresor se encuentra que la madre representa el 26,6% (n=6.345), seguido de la pareja o la expareja con un 22,9% (n=5.475) y el padre el 11,9% (n=2.830) concentrando el 61,4% (n=14.650) de los casos.

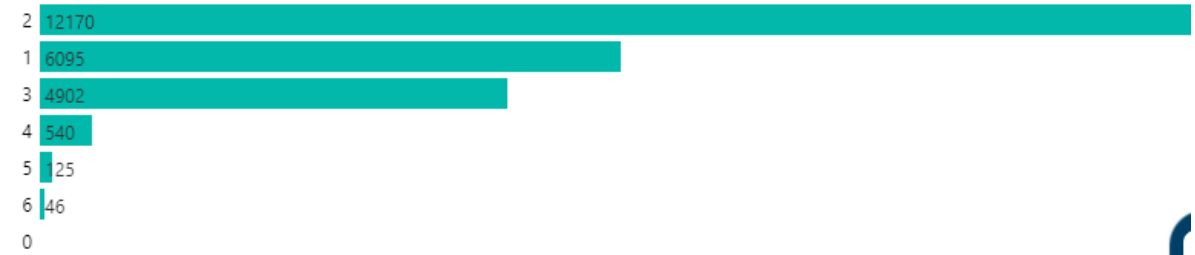
NÚMERO DE CASOS POR LOCALIDADES



Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>

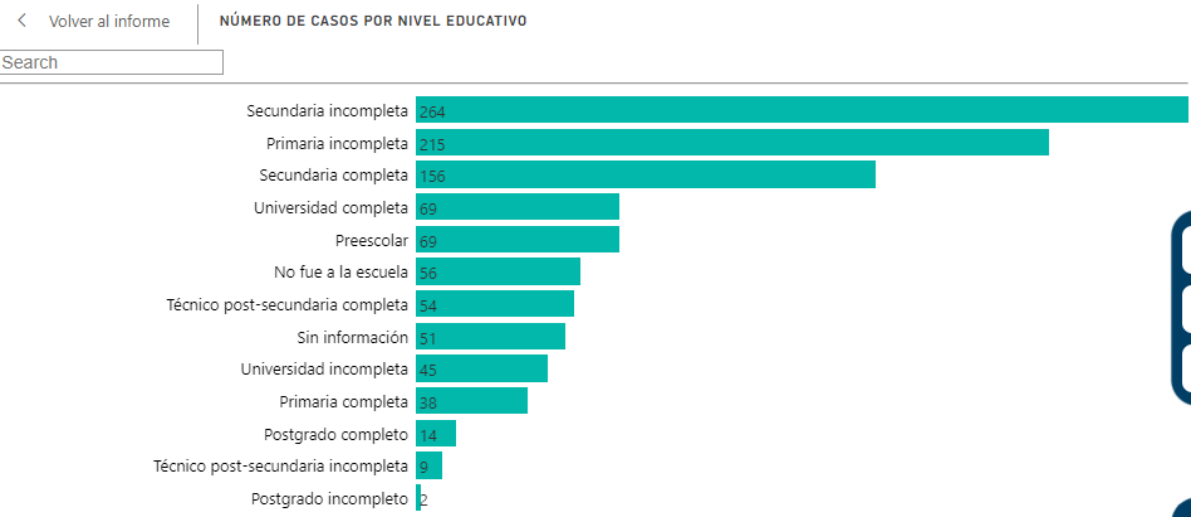
Frente a la variable de estrato socioeconómico de la víctima el estrato uno (1) agrupa el 25,5% de los registros, el estrato dos (2) un 51% y el tres (3) el 20,5%.

NÚMERO DE CASOS SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO



Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>

Con respecto, al nivel educativo de las víctimas el 13,4% (n=3.201) de los casos notificados se encuentran en preescolares, el 27,9% (n=6.669) en la primaria y el 42,2% (n=10.080) en la secundaria.



Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>

Con respecto, al curso de vida el 62,4% (n=14.675) de los casos notificados de violencia intrafamiliar se presentaron en niños, niñas y adolescentes y distribuidos de la siguiente manera: primera infancia (0 a 5 años) el 15,3% (n=3.648), infancia (6 a 11 años) el 21,7% (n=5.184) y en la adolescencia (12 a 17 años) el 27,5% (n=6.576) concentrando el 64,5% (n=15.408) de los casos registrados para el primer semestre de 2024.

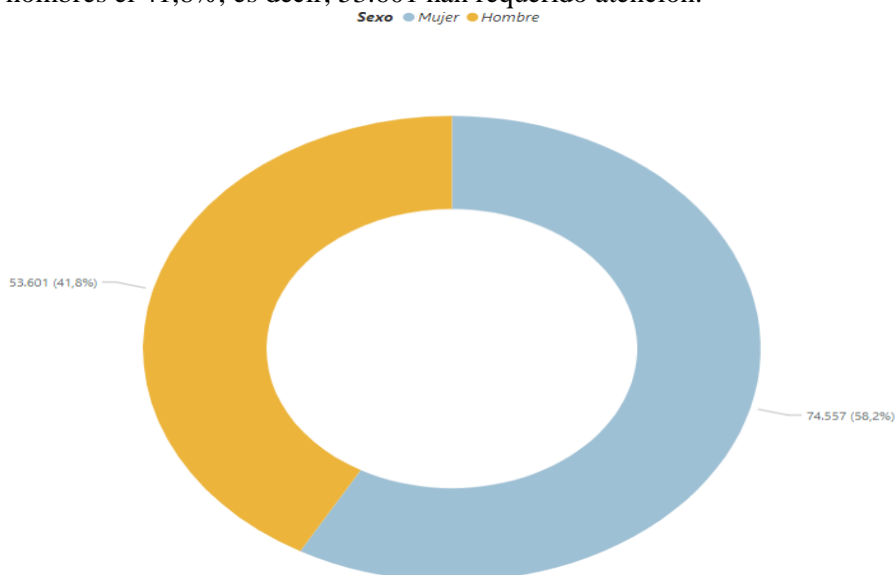
La información sobre las principales causas de atención en los servicios de salud mental en la población de la ciudad se obtiene a partir de la consulta a los Registros Individuales de Prestación de servicios de salud (RIPS), los cuales dependen del reporte periódico y obligatorio de las instituciones encargadas de la prestación de dichos servicios y entidades encargadas de la administración de estos servicios tales como Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB).

De acuerdo a los registros encontrados en la página de la Secretaría Distrital de Salud - Observatorio de Salud de Bogotá – Datos abiertos, allí se encuentra la información en una clasificación General teniendo en cuenta los tres grandes grupos de la Política Nacional de Salud Mental, que son:

- 1) Trastornos y problemas mentales,
- 2) Trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones; y, 3) Epilepsia

De manera general y de acuerdo a las estadísticas que se encuentran de los años 2019 a 2024 se encuentra que las mujeres asisten más frecuentemente a los servicios de salud para la atención de problemas mentales que los hombres; por ejemplo en lo corrido del año 2024 se ha registrado que han solicitado atención en salud

mental el 58,2% de mujeres, esto quiere decir, 74.557 mujeres han solicitado algún tipo de atención; mientras que en los hombres el 41,8%, es decir, 53.601 han requerido atención.

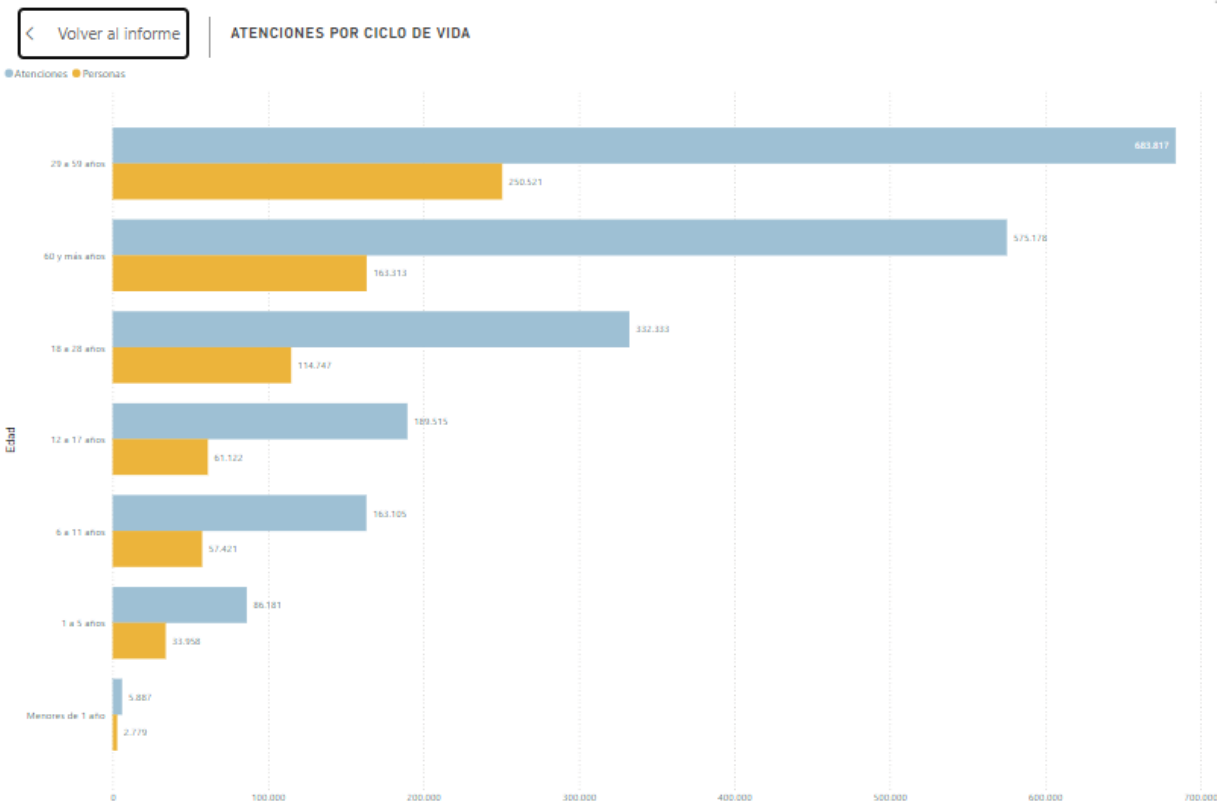


Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>.

En la tabla sobre la concentración en las atenciones en salud mental, se logra ver que las atenciones desde el año 2019 han ido en aumento ya que por ejemplo en el año 2019 las atenciones estuvieron en 1'495.099 y para el año 2023 las atenciones aumentaron a 2'036.016, esto en cuanto a atenciones; en cuanto a las personas atendidas la gráfica también muestra un aumento de personas atendidas años tras año donde en el 2019 se atendieron 554.181 personas y en el 2023 se atendieron 663.456 personas; lo que indica que cada vez son más las personas que acuden a atenciones médicas referentes con la salud mental.

Al examinar la información por eventos específicos se identifica que para el año 2023 los trastornos de Ansiedad ocupan el primer lugar de las afectaciones en salud mental con un total en lo corrido del año de 380.018 atenciones a 179.197 personas reportada en los servicios de salud, seguida de Epilepsia, Trastornos del estado de Ánimo como trastornos depresivos, de Sueño y Vigilia, esquizofrenia y trastornos cognitivos. En el análisis expresan que se debe tener en cuenta que los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo (especialmente la depresión) se asocian más frecuentemente con desenlaces negativos como la conducta suicida.

Desde el año 2019 hasta el año 2024 el grupo etario que más atenciones a tenido está en el ciclo de vida entre los 29 a los 59 años; por ejemplo para el año 2023 se atendieron 683.818 casos dirigidos a 250.521 personas; seguido por el grupo de personas de 60 años en adelante con 575.178 casos dirigidos a 163.313 personas y en el tercer puesto se encuentran las personas entre los 18 a los 28 años de edad con 332.333 atenciones dirigidas a 114.747 personas; lo que indica que cada vez son más las personas que acuden a éste servicio. Es importante resaltar el segundo y el tercer puesto de los diferentes rangos etarios se han mantenido desde el año 2019.



Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>.

Bogotá ha enfrentado, en los últimos años, una serie de desafíos críticos que impactan directamente en el bienestar de las familias, tales como el aumento de la violencia intrafamiliar, la crisis de salud mental, la creciente desigualdad socioeconómica, y el limitado acceso a servicios sociales. Informes recientes de la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Integración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) evidencian un preocupante aumento en los casos de violencia intrafamiliar y problemas de salud mental.

En respuesta a estos desafíos, el proyecto de acuerdo propone una intervención estructurada y multidimensional que busca no solo mitigar los efectos de estos problemas, sino también prevenir su ocurrencia a través de la implementación de estrategias de apoyo comunitario, programas de resiliencia familiar, y servicios integrales de salud mental.

La adopción de esta política pública tiene un alto potencial para transformar positivamente las condiciones de vida de las familias bogotanas. Al priorizar la prevención de la violencia intrafamiliar, el fortalecimiento de la salud mental, y la protección de la infancia y la adolescencia, el proyecto de acuerdo contribuirá

significativamente a la reducción de los índices de violencia y a la promoción de entornos familiares más seguros y protectores. Adicionalmente, al fomentar la participación y empoderamiento comunitario, se fortalecerá el tejido social, creando comunidades más cohesivas y resilientes.

Además, incorpora un enfoque diferencial que garantiza la atención de grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad, como las familias migrantes y aquellas ubicadas en zonas de alta marginalidad. Al desarrollar programas piloto en localidades con altos índices de vulnerabilidad y crear centros de innovación social para la familia, se asegura que estas intervenciones sean adecuadas y efectivas en contextos específicos, promoviendo la equidad y la inclusión social.

El éxito en la implementación de la política pública propuesta depende de una sólida articulación interinstitucional. La Secretaría Distrital de Integración Social, en coordinación con entidades clave como la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, será responsable de la implementación, seguimiento y evaluación de las acciones estratégicas definidas en el proyecto de acuerdo. Esta coordinación permitirá un abordaje integral de los problemas que afectan a las familias, garantizando una respuesta eficiente y coherente del aparato estatal.

La implementación de un sistema robusto de monitoreo y evaluación, liderado por la Secretaría Distrital de Planeación, es fundamental para medir el impacto de la política pública y realizar los ajustes necesarios para asegurar su eficacia. El establecimiento de indicadores de impacto claros permitirá un seguimiento continuo de los avances, facilitando la toma de decisiones informadas y la adecuación de las estrategias para cumplir con los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027.

3. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El Proyecto de Acuerdo está sólidamente fundamentado en la normativa constitucional, legal y distrital, respondiendo a las necesidades urgentes de las familias en Bogotá. Su aprobación e implementación es no solo jurídicamente viable, sino también socialmente necesaria y técnicamente factible. Al promover un enfoque integral y diferencial para el fortalecimiento del bienestar familiar, este proyecto se alinea con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” y contribuye a la construcción de una ciudad más equitativa, segura y próspera.

Aunado a lo anterior, se exponen las normas de carácter constitucional, legal, distrital y jurisprudencia que fundamentan la viabilidad jurídica de este Proyecto de Acuerdo, en aras de garantizar el bienestar integral de las familias en el Distrito Capital.

3.1. Orden Constitucional

El Proyecto encuentra su sustento principal en los siguientes artículos de la Constitución Política de 1991 en la que obliga a las autoridades a implementar políticas públicas que garanticen el desarrollo y protección integral de las familias lo cual se encuentra sustentado en los siguientes artículos:

Artículo 5. *El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.*

Artículo 15. *Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas (...)*

Artículo 28. *Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia (...)*

Artículo 42. *La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables (...)*

Artículo 44. *Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.*

3.2. Orden Legal

Código Civil: *Ya que regula todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, regula todo lo relacionado con las relaciones jurídicas privadas, como las relaciones de familia.*

Ley 294 de 1996 “Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir remediar y sancionar la violencia Intrafamiliar”

Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia

Artículo 1º. *Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna (...)*

Ley 1361 de 2009 “Por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia”

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad; así mismo, establecer las disposiciones necesarias para la elaboración de una Política Pública para la familia (...)

Ley 1857 de 2017 “Por medio de la cual se modifica la Ley 1361 de 2009 para adicionar y complementar las medidas de protección de la familia y se dictan otras disposiciones”

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad.

En desarrollo del objeto se contempla como deber del Estado proveer a las familias y a sus integrantes, herramientas para potenciar sus recursos afectivos, económicos, culturales, de solidaridad y criterios de autoridad democrática, de manera que los programas de atención a la familia y a sus miembros prioricen su unidad y la activación de recursos para que funcione como el instrumento protector por excelencia de sus integrantes(...)

3.3. Orden Reglamentario

Decreto 545 de 2011 "Por medio del cual se adopta la Política Pública para las Familias de Bogotá, D. C."

Artículo 1°.- Objeto. Adóptase la Política Pública para las Familias de Bogotá Distrito Capital, 2010 – 2025, en el marco de una Ciudad de Derechos que reconozca, restablezca y garantice los derechos de las familias, contenidos en el documento Anexo que hace parte integral del presente Decreto

CONPES 18 de 2022 Política Pública para las Familias en Bogotá para el período 2021-2025.

Acuerdo 927 de 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura””

El actual Plan de Desarrollo establece como uno de sus ejes estratégicos la creación de entornos seguros y el acceso a servicios integrales para las familias, con un enfoque en la reducción de la violencia, el fortalecimiento del tejido social, y la mejora de la calidad de vida. Este proyecto de acuerdo se articula con dicho plan, ofreciendo una respuesta integral a las problemáticas que afectan a las familias en el Distrito Capital, y complementando otras políticas como el Sistema Distrital de Cuidado.

3.4. Orden Jurisprudencial

Corte Constitucional Sentencia T-572 de 2009 DERECHO A LA FAMILIA - Protección constitucional especial

En este orden de ideas, y recapitulando, la Sala considera que la familia, en tanto que núcleo fundamental de la sociedad, debe ser protegida de manera integral por el Estado. En tal sentido, más allá de la definición que de aquélla se tenga, las autoridades públicas, en tanto que se esta ante un derecho fundamental, deben abstenerse de adoptar medidas administrativas o judiciales que, en la práctica, impliquen violar la unidad familiar, so pretexto, por ejemplo, de amparar los derechos fundamentales de alguno de sus integrantes. Al mismo tiempo, desde la faceta prestacional del derecho a la unidad familiar, aquéllas se encuentran constitucionalmente obligadas a diseñar e implementar políticas públicas eficaces que propendan por la preservación del núcleo familiar, medidas positivas que apunten, precisamente, a lograr un difícil equilibrio entre la satisfacción de las necesidades económicas de las familias y la atención y cuidados especiales que merecen los niños, en especial, aquellos de menor edad. En otras palabras, las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben contar con programas sociales dirigidos a brindarle a las familias opciones para que los niños permanezcan en un ambiente sano y seguro, mientras que sus progenitores cumplen con sus deberes laborales. En este orden de ideas, la acción estatal no puede encaminarse exclusivamente hacia la implementación de medidas de restablecimiento de derechos (ubicación del menor en centros de emergencia, hogares de paso, adopción, etc.), en tanto que mecanismos legítimos y necesarios dirigidos a proteger los derechos de los niños frente a peligros o amenazas verdaderamente reales contra sus derechos fundamentales, sino que igualmente, y de manera prioritaria, debe encausar su accionar, presupuestal y burocrático, hacia la puesta en marcha de medidas que, como se ha señalado, les faciliten a los padres poder cumplir con sus deberes constitucionales y legales en relación con la prole, y al mismo tiempo, suplir las necesidades económicas del núcleo familiar (vr. Programas de madres comunitarias, jardines del ICBF, etc.).

Corte Constitucional Sentencia T-292 de 2016 PROTECCION CONSTITUCIONAL A LA FAMILIA – Importancia

La familia es una institución sociológica derivada de la naturaleza del ser humano, “toda la comunidad se beneficia de sus virtudes así como se perjudica por los conflictos que surjan de la misma”. Entre sus fines esenciales se destacan la vida en común, la ayuda mutua, la procreación, el sostenimiento y la educación de los hijos. En consecuencia, tanto el Estado como la sociedad deben propender a su bienestar y velar por su integridad, supervivencia y conservación. Lineamientos que permearon su reconocimiento político y jurídico en la Constitución de 1991. El constituyente reguló la institución familiar como derecho y núcleo esencial de la sociedad en el artículo 42 Superior. De acuerdo con esta disposición, la familia “se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. En todo caso, el Estado y la sociedad deben garantizarle protección integral.

4. COMPETENCIA

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según artículo 313 de la Constitución Política numeral 1 que estipula lo siguiente:

“ARTÍCULO 313. Corresponde a los Concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (...).⁷

Asimismo, esta Corporación es competente de acuerdo al artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá -, numerales 1 y 25, que determinan:

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...)

25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes”.⁸

Del mismo modo, el Concejo tiene competencia de acuerdo a la Ley 136 de 1994, la cual establece en su parágrafo 2 del artículo 32 que:

“Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderá asignada a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríen la Constitución y la ley”.⁹

5. IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” determina:

⁷ Artículo 313 Constitución Política de Colombia. (1991). Recuperado de <https://www.constitucioncolombia.com/titulo-11/capitulo-3/articulo-313>

⁸ Decreto Ley 1421 de 1993. (1993). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394>

⁹ Ley 136 de 1994. (1994). Función Pública. Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329>

"Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo".

El artículo 5 del proyecto de acuerdo establece la necesidad de asegurar la financiación de las acciones propuestas mediante la asignación de recursos dentro del presupuesto anual del Distrito Capital. La inclusión de mecanismos para fomentar la participación del sector privado y de organizaciones no gubernamentales es crucial para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo, diversificando las fuentes de financiamiento y permitiendo la ejecución continua de los programas.

Referencias Bibliográficas

1. CONPES D. C. 18 Actualización del Plan de Acción de la "POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS FAMILIAS 2021-2025" recuperado de https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/conpes_dc_18_familias_0.pdf
2. Boletín No. 14 Censo de población y familia recuperado de <https://observatoriodefamilia.dnp.gov.co/Documents/Boletines/BOLETIN%20No.14.pdf>
3. Boletín técnico encuesta multipropósito Bogotá – Cundinamarca (EM) 2021 recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/multi/Boletin_EM_2021.pdf
4. Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Recuperado de <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/>
5. Constitución Política de Colombia 1991 - – Sistema Único de Información Normativa Recuperado de: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988>
6. Código Civil recuperado de <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1827111>
7. Ley 294 de 1996 <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1657714>
8. Ley 1098 de 2006 recuperado de <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1673639>
9. Ley 1361 de 2009 recuperado de <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1678084>
10. Ley 1857 de 2017 <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30032737>
11. Decreto 545 de 2011 recuperado de <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1117406>
12. CONPES 18 de 2022 https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/conpes_dc_18_familias_0.pdf
13. Acuerdo 927 de 2024 recuperado de <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30052883>

14. Sentencia T-572 de 2009 Corte Constitucional. Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-572-09.htm>
15. Sentencia T-292 de 2016 Corte Constitucional. Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-292-16.htm>
16. Decreto Ley 1421 de 1993. (1993). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394>
17. Ley 136 de 1994. (1994). Función Pública. Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329>

Cordialmente,

DARÍO FERNANDO CEPEDA PEÑA

Concejal de Bogotá D.C.

Partido Liberal

6. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 113 DE 2025

PRIMER DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO N° XXXX DE 2025

"Por medio del cual se adopta la Política Pública de Fortalecimiento del Bienestar Integral de las Familias en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones."

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 1 y 13 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, y

ACUERDA

ARTÍCULO 1. OBJETO: El presente Acuerdo tiene por objeto adoptar la Política Pública de Fortalecimiento del Bienestar Integral de las Familias en el Distrito Capital, con el fin de promover su desarrollo, cohesión y bienestar, mediante acciones intersectoriales y participativas que aborden de manera integral los problemas que afectan a las familias en Bogotá, en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” 2024-2027.

ARTÍCULO 2. EJES ESTRATÉGICOS: La Política Pública de Fortalecimiento del Bienestar Integral de las Familias en el Distrito Capital se desarrollará en torno a los siguientes ejes estratégicos:

Eje 1: Prevención y Reducción de la Violencia Intrafamiliar.

Eje 2: Salud Mental y Bienestar Emocional.

Eje 3: Cuidado y Protección de la Infancia y Adolescencia.

Eje 4: Fortalecimiento Socioeconómico de las Familias.

Eje 5: Participación y Empoderamiento Comunitario.

Eje 6: Entornos Familiares Seguros y Protectores.

Eje 7: Programas Piloto y Enfoques Diferenciales.

ARTÍCULO 3. ACCIONES ESTRATÉGICAS: Para la implementación de los ejes estratégicos mencionados en el artículo anterior, se desarrollarán las siguientes acciones:

Eje 1. Prevención y Reducción de la Violencia Intrafamiliar:

a. Implementación de campañas educativas y de sensibilización: Se promoverán campañas que aborden temas de convivencia pacífica y resolución de conflictos en el ámbito familiar.

b. Fortalecimiento de redes de apoyo comunitario: Se crearán y consolidarán redes de apoyo en las localidades que permitan identificar y atender de manera temprana situaciones de violencia intrafamiliar.

Eje 2. Salud Mental y Bienestar Emocional:

- a. Creación de centros de atención psicosocial en todas las localidades: Estos centros brindarán servicios de orientación, consejería y tratamiento para la prevención y atención de problemas de salud mental en el entorno familiar.
- b. Desarrollo de programas de resiliencia familiar: Se implementarán programas que promuevan la resiliencia emocional y el manejo del estrés en las familias, particularmente en aquellas en situación de vulnerabilidad.

Eje 3. Cuidado y Protección de la Infancia y Adolescencia:

- a. Ampliación del Sistema Distrital de Cuidado: Se fortalecerán los servicios de cuidado para niños, niñas y adolescentes, con un enfoque diferencial que atienda las necesidades de grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad.
- b. Establecimiento de protocolos de detección temprana de riesgo: Se implementarán estrategias para la identificación y atención oportuna de menores en riesgo de violencia o abuso.

Eje 4. Fortalecimiento Socioeconómico de las Familias:

- a. Creación de programas de capacitación y empleabilidad: Se ofrecerán programas de formación técnica y vocacional que faciliten la inserción laboral de padres y madres en condiciones de vulnerabilidad.
- b. Expansión de programas de subsidios y apoyo económico: Se ampliarán los programas de apoyo económico a las familias en pobreza extrema, con enfoque en aquellas que cuidan a personas dependientes.

Eje 5. Participación y Empoderamiento Comunitario:

- a. Creación de Consejos Locales de Familia: Se establecerán espacios de participación donde las familias puedan incidir en la toma de decisiones que afectan su bienestar.
- b. Implementación de programas de formación en derechos y deberes familiares: Estos programas estarán orientados a fortalecer la corresponsabilidad y la solidaridad al interior de las familias.

Eje 6. Entornos Familiares Seguros y Protectores:

- a. Desarrollo de programas integrales para la mejora de entornos: Se trabajará en la recuperación de espacios públicos y viviendas, garantizando entornos seguros y saludables para las familias.
- b. Iniciativas de seguridad y convivencia: Se implementarán estrategias locales de seguridad que promuevan la convivencia pacífica y reduzcan los factores de riesgo que afectan la seguridad familiar.

Eje 7. Programas Piloto y Enfoques Diferenciales:

a. Programa Piloto de Bienestar Familiar en Zonas Prioritarias: Se implementará un programa piloto en las localidades con altos índices de vulnerabilidad, en los cuales se ofrecerá atención integral a las familias en aspectos de salud mental, apoyo económico y formación en habilidades parentales.

b. Centros de Innovación Social para la Familia: Se crearán centros especializados donde se desarrollen y prueben nuevas metodologías para la resolución de conflictos familiares, mejora de la convivencia y fortalecimiento de la comunidad.

c. Atención Específica a Familias Migrantes: Se desarrollará un componente específico para atender a las familias migrantes, garantizando su acceso a servicios básicos y facilitando su integración en la sociedad bogotana.

ARTÍCULO 4. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL: La Secretaría Distrital de Integración Social, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Educación, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y otras entidades competentes, serán las encargadas de la implementación, seguimiento y evaluación de la política pública establecida en el presente Acuerdo, en armonía con las directrices del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” 2024-2027.

ARTÍCULO 5. FINANCIACIÓN: Para la ejecución de las acciones contempladas en el presente Acuerdo, se destinarán los recursos necesarios, los cuales se asignarán dentro del presupuesto anual del Distrito Capital, con base en las disponibilidades financieras. Asimismo, se promoverá la participación del sector privado y de organizaciones no gubernamentales para cofinanciar proyectos y garantizar la sostenibilidad de las intervenciones.

ARTÍCULO 6. EVALUACIÓN Y MONITOREO: La Secretaría Distrital de Planeación, en coordinación con las entidades responsables de la implementación, definirá los indicadores de impacto para la evaluación y monitoreo continuo de la política pública. Anualmente, se deberá presentar un informe al Concejo de Bogotá sobre los avances y resultados obtenidos, y se realizarán los ajustes necesarios para alinearse con los objetivos del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”.

ARTÍCULO 7. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 114 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD RENOVADA (APS), “BOGOTÁ SALUDABLE” A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LAS Y LOS CIUDADANOS EN BOGOTÁ D.C.”

I.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**1.Objeto**

El objeto del presente Proyecto de Acuerdo (PA) es crear el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) “Bogotá Saludable”, a fin de garantizar el derecho a la salud de las y los ciudadanos en Bogotá D.C.

2. Objetivos específicos:

- 2.1. Fortalecer el conjunto de entidades, políticas, instrumentos, planes y proyectos necesarios para hacer realidad un Modelo de Atención de Salud Preventiva, en todas el Distrito Capital.
- 2.2. fortalecer un marco normativo para garantizar los diagnósticos necesarios para establecer el estado del derecho a la Salud en el Distrito Capital.
- 2.3. Ejecutar acciones de Promoción y prevención en materia de salud, para la garantía y restitución del derecho a la salud, promover el desarrollo integral, el cuidado personal, el aprendizaje y las habilidades para la población priorizada en la ciudad de Bogotá D.C.
- 2.4. Garantizar la accesibilidad de los y las ciudadanas a los servicios de salud preventiva de forma universal y progresiva.
- 2.5. Desarrollar acciones para la construcción de ambientes saludables, accesibles e incluyentes para la población priorizada en el Distrito Capital a través de la gestión interinstitucional y transectorial.
- 2.6. Generar espacios de participación que contribuyan a la movilización social y el empoderamiento como sujetos activos en la toma de decisiones en salud.

3. Antecedentes y justificación del proyecto:

Fortalecer la Atención Primaria en Salud, es una de las preocupaciones contemporáneas de gobiernos, sociedad civil, personal de salud y la ciudadanía en General. Avanzar en modelos preventivos orientados a mejorar la calidad de vida, establecer hábitos saludables y mejorar la participación de las decisiones institucionales del sector, se han convertido en objetivos estratégicos, en aras a profundizar la materialización del Estado Social de Derecho.

El ambiente de la discusión actual es más que propicio, después de tres décadas en las que el mercado se impuso sobre los derechos sociales, se redujeron los servicios públicos para el bienestar mientras se fortalecía la privatización y la flexibilización del mercado para asegurar ganancias de los inversionistas. Ha llegado el momento de corregir la tendencia mercadocéntrica y ello implica dotar al distrito de herramientas institucionales que le permitan avanzar en modelos garantistas, universales y progresivos del Derecho a la Salud, sobre todo en la fase preventiva y de atención primaria.

Durante los últimos años, el mundo vivió la Pandemia del COVID19, cuyos estragos fueron inconmensurables, no solo por la cantidad de vidas perdidas sino por sus impactos negativos en la vida social de las personas, el incremento del desempleo y la desprotección de los desocupados, el incremento de la pobreza y la desigualdad y el abandono de políticas sociales para recurrir a la cobertura de la emergencia. Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia es que se requiere la tendencia global y nacional del desmantelamiento de los servicios de salud y la seguridad social. Vimos como nuestro sistema mercadocéntrico de atención, privilegió la atención prioritaria y final de los pacientes, al tiempo que dejó ver la precariedad en que se encuentran los servicios de salud preventiva y primaria. Si algo dejó claro la pandemia es que se requiere robustecer la materialización de los derechos a la salud, no solo al nivel de la atención del enfermo, sino sobre todo en las etapas primarias, en la prevención y en los cambios de hábitos saludables. Ello implica necesariamente, ampliar la capacidad institucional, reenfocar los esfuerzos públicos y privados y sobre todo, fortalecer la capacidad participativa y democrática de las comunidades y las ciudadanías en la gestión de los derechos sociales para hacerlos realidad, a través del diálogo incidente y la toma de decisiones de política públicas.

Recuperar la capacidad de implementación del principio de precaución, planear para prevenir y enfocar los esfuerzos sociales e institucionales en reducir factores de riesgos. Prevenir más para cuidar más y sanar mejor. Esta es la consigna principal en que busca contribuir esta iniciativa normativa. Este propósito común, cuenta con antecedentes claves a nivel nacional e internacional, que vale la pena resaltar.

4. Instrumentos internacionales

4.1. Declaración de Constitución de la OMS (1946)

El derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos para asegurar la vida digna. En el plano internacional, se proclamó por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1946, en cuyo preámbulo se define la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades". También se afirma que "el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.

4.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, también se menciona la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. El Artículo 22 de la Declaración establece: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".

Por su parte, el Artículo 25, define: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

4.3. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

Artículo 12

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Las medidas que deberán adoptar los Estados partes en el presente Pacto para lograr la plena realización de este derecho incluirán las necesarias para:

- a) La disposición para la reducción de la tasa de mortalidad y de mortalidad infantil y para el desarrollo sano del niño;
- (b) La mejora de todos los aspectos de la higiene ambiental e industrial;
- (c) La prevención, tratamiento y control de enfermedades epidémicas, endémicas, ocupacionales y otras;
- (d) La creación de condiciones que aseguren a todo servicio médico y atención médica en caso de enfermedad.

4.4. Declaración De Alma-Ata (1978)

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, realizada en Kazajistán (entonces integrante de la URSS), del 6 al 12 de septiembre de 1978, fue el evento de política de salud internacional más importante de la década de los setenta. Su lema fue “Salud para todos en el año 2000”, en la que se recomienda a todos los sectores y los niveles de gestión y de administración introducir, desarrollar y mantener la APS como estrategia para promover y proteger la salud y alcanzar la cobertura universal del Derecho. La declaración plantea que, con el suministro de las medidas sanitarias y sociales adecuadas, a través de la APS, los gobiernos se propongan asumir la responsabilidad sobre la salud de sus poblaciones.

Se plantea, igualmente, la necesidad de realizar un abordaje de la salud y la asistencia sanitaria con nuevas perspectivas, y reiterando que la salud “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, un derecho humano fundamental y que el logro más alto posible es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización requiere la acción de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud” (OMS, 1978).

4.5. Convención Americana de los DD.HH. (1978) y el Protocolo de San Salvador (1988)

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, consagra en el artículo XI el derecho de toda persona a la preservación de la salud y el bienestar. La Convención Americana de Derechos Humanos, aunque no hace alusión expresa al derecho, sí afirma en su artículo 26 que los Estados partes se comprometen “a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica” para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que en su artículo 33 hace referencia al derecho a la salud.

Así mismo el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador suscrito en 1988, aprobado por Colombia en 1996 y que entró en vigor en 1999, protege igualmente el derecho a la salud al decir: “Artículo 10 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. extensión de los

beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”.

Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, y la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecieron algunas condiciones para la garantía del Derecho a la Salud (2008), que son importantes resaltar:

El derecho a la salud comprende algunos derechos; a. El derecho a un sistema de protección de la salud que brinde a todos iguales oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud; b. El derecho a la prevención y el tratamiento de las enfermedades, y la lucha contra ellas; c. El acceso a medicamentos esenciales; d. La salud materna, infantil y reproductiva; e. El acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos; f. El acceso a la educación y la información sobre cuestiones relacionadas con la salud; g. La participación de la población en el proceso de adopción de decisiones en cuestiones relacionadas con la salud a nivel comunitario y nacional.

También, la Oficina considera que “Deben facilitarse servicios, bienes e instalaciones de salud a todos sin discriminación. La no discriminación es un principio fundamental de los derechos humanos y es decisiva para el disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud” (OMS, 2008).

5. Marco constitucional de los Derechos a la Salud

Nuestra Constitución Política está orientada a la materialización de un Estado social de Derecho, lo cual implica un horizonte constitucional centrado en los derechos, afinado en la participación ciudadana y cuyo propósito principal es la paz, el bienestar y la igualdad de todos y todas.

El artículo 44 consagra la salud como derecho fundamental de los niños, y es claro que éste también se entiende incorporado en la protección de la vejez contenida en el artículo 46. El artículo 48 establece que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio “que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado”, cuyo desarrollo legal debe ajustarse a los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad, permitiendo también la participación de los particulares en el sistema de seguridad social. También, la Constitución establece que la seguridad social es no sólo un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado, sino que también representa un derecho irrenunciable, garantizado a todos los habitantes del Estado. Por su parte el artículo 49 de la Constitución establece que “la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”. Más adelante dispone que todas las personas puedan acceder a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Esto debe leerse en armonía con los artículos 36 y 366 ibídem, que establecen que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio.

Más adelante el mismo artículo dispone que “corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y el saneamiento” y el deber de ejercer la vigilancia y el control de la prestación de los servicios, que puede ser llevada a cabo por particulares. Finalmente, el mismo artículo establece el derecho de atención gratuita, en las instituciones que reciben aportes públicos, para todos los menores de un año.

En virtud del llamado bloque de constitucionalidad, esta recepción del derecho a la salud por la Constitución de 1991 implica también, en cierta medida, la constitucionalización de los estándares internacionales sobre dicho derecho, explicados en los apartes anteriores de este capítulo. En efecto, conforme a dicha figura, los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, y en particular el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San

Salvador tienen rango constitucional en el ordenamiento colombiano, por lo cual sus mandatos deben ser tomados en cuenta por las autoridades. A su vez, los criterios desarrollados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como intérprete autorizado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son criterios relevantes para determinar el contenido y alcance de los derechos sociales (CP art. 93), como el derecho a la salud, por lo que las doctrinas de dicho Comité, explicadas anteriormente en este capítulo, tienen clara relevancia constitucional en Colombia.

6. Antecedentes de la Atención Primaria en Salud

Como experiencias de trabajo en salud anteriores a la declaración de Alma-Ata, y que pueden ser ubicadas como antecedentes de la APS, se reconocen a partir de los años cincuenta del siglo XX: por una parte, el desarrollo de la propuesta de Promotoras Rurales de Salud (como agentes comunitarios de salud), llevada a cabo por Héctor Abad Gómez en la Universidad de Antioquia hasta ser un programa oficial en todo el país; y, por otra, las lideradas en la Universidad del Valle por Santiago Rengifo Salcedo (discípulo de Henry Sigerist).

A comienzos de los años setenta del siglo XX se destaca la experiencia liderada por Gustavo Molina, exiliado chileno en Colombia y docente de la Escuela Nacional de Salud Pública en la Universidad de Antioquia, desde donde promovió y desarrolló experiencias similares a las chilenas en la medicina integral y en la integración de los servicios, conocida con el nombre de integración operacional de abajo hacia arriba (IOAPA) para el sector urbano (Medellín) y para el rural (Carmen de Viboral), y que halló un ambiente propicio en el Sistema Nacional de Salud de 1975.

Tras la declaración de Alma-Ata (1978) la APS fue introducida en Colombia con el apoyo de la OMS y la OPS. Sin embargo, fue formulada e implementada como una versión limitada, y que, a través de planes de salud oficiales, compuestos por acciones simples con amplia cobertura, buscaba solucionar a corto plazo los problemas de salud de grupos prioritizados.

Durante los años ochenta del siglo XX la implementación de la APS (que se puede pensar como una APS selectiva) se dio a través de las Unidades Primarias de Atención (UPA) con unos componentes débiles de articulación intersectorial, participación comunitaria y algunos programas sectoriales de intervención selectivos. Por medio de las UPA se desarrollaban actividades como asistencia médica con promotoras y personal auxiliar de salud, suministro de medicamentos formulados, educación nutricional, vacunación y vigilancia epidemiológica, promoción de la construcción de sistemas de abastecimiento de agua e instalación de filtros caseros, educación para la disposición de basuras, control de zoonosis y mejoramiento de la vivienda.

Adicionalmente, para propiciar la participación comunitaria y la acción intersectorial se construyeron propuestas como la del Plan Nacional de Participación Comunitaria, de 1981, de donde surgen programas como el Vigía de la Salud, que logra articular el sector educación con el sector salud a partir del trabajo realizado en educación en salud a estudiantes del último grado de bachillerato. Sin embargo, dichos espacios y los demás creados para propiciar la participación comunitaria y la acción intersectorial no fueron duraderos, y lo que se vio fue un desarrollo de la APS únicamente desde el sector salud.

Con la Ley 10 de 1990, que descentraliza el SNS e introduce cambios de organización y de operación de este, se busca universalizar los servicios básicos de salud mediante el programa Salud Básica para Todos; también, promoviendo el aseguramiento privado y voluntario y fortaleciendo la participación comunitaria. Este programa centró su atención en la familia e intentó ampliar la participación comunitaria a través de la municipalización de la atención de salud, la intervención de los factores de riesgo y los determinantes de la salud, y el interés del Estado por asumir la salud como responsabilidad pública.

En el contexto de la iniciativa neoliberal, que buscaba promover la descentralización política, administrativa y financiera del Estado para reducir gastos dentro del marco de la política de ajustes fiscales del momento, se organizaron los Sistemas Locales de Salud (SILOS). Estos se pensaron como articuladores municipales de los sectores públicos y privados, de la comunidad y de los hospitales, y de las personas y su contexto. Dentro de este marco de acción se asumieron nuevos retos con nuevas perspectivas, se organizaron algunos programas con manejo integral y por etapa de ciclo vital, y se redujeron las intervenciones verticales y focalizadas.

La puesta en marcha de los SILOS logró hacer uno de los mayores acercamientos a la APS integral antes de la Ley 100 de 1993. Muestra de ello es la vinculación de epidemiólogos y profesionales de las ciencias sociales a los servicios de salud (Vega, 2009) para dinamizar procesos de producción y análisis de información; también, la puesta en marcha de la Estrategia de Promoción de la Salud (PS); la Programación Local de Salud, para formular los Planes Locales de Salud; el Programa de Municipios Saludables, y el de Comunicación para la Salud y la Participación Social en Salud. Para el mismo periodo uno de los principales logros fue la integración de los SILOS con la Estrategia de Promoción de la Salud.

Se dieron algunos desarrollos, principalmente organizacionales y estructurales, de los servicios de salud dentro del marco de la descentralización del Estado (política de modernización del Estado). Entre dichos desarrollos se cuentan la entrega a los alcaldes, en el ámbito municipal, de la responsabilidad de la dirección de salud, del liderazgo de la integración de los servicios y de la acción intersectorial; mediante ello se buscaba la conexión del sector salud con los planes locales de desarrollo social, y al primer nivel de atención (centros y puestos de salud) en las comunas o las localidades (subdivisiones político-administrativas de los municipios).

6.1. APS dentro del marco del Sistema General de Salud y Seguridad Social (SGSSS)

Con la Ley 100 de 1993, orientada por el Banco Mundial, se produjo un retroceso en los adelantos alcanzados en la APS integral, pues se la redujo a simple atención clínica y a un paquete básico de acciones en Salud Pública (Vega, 2009). La reforma, que tuvo como fondo la mercantilización de la salud, redujo la salud pública a bienes con altas “externalidades positivas” incluidas en el Plan de Atención Básico (PAB) y designó las demás actividades de atención médica a las personas como bienes privados o mixtos (incluidos en el Plan Obligatorio de Salud [POS]), y por los cuales se debía pagar una cotización. Esto generó, además de otras cosas, que entre 1993 y 1996 se debilitaran el accionar de los SILOS y los alcances de la promoción de la salud y del reconocimiento de los territorios, hasta llevarlos a desaparecer.

Aunque durante dicha etapa se realizaron algunos intentos por integrar las actividades de prevención, promoción, curación y rehabilitación, como el Programa Municipios Saludables por la Paz, el programa de Escuelas Saludables, la Resolución 412 del año 2000 y la Ley 715 de 2001, estos no mostraron grandes resultados, en tanto, estructuralmente, las acciones individuales de curación, promoción y prevención incluidas en el POS son bienes privados o mixtos, sin ninguna conexión con el PAB.

Sin embargo, hubo algunos intentos de incluir la estrategia de APS:

- a. En la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, donde se formula una línea orientada a “la identificación, sistematización, divulgación y apoyo de estrategias innovadoras en el campo de la atención primaria, salud familiar y/o salud comunitaria” (Vega, 2009).
- b. En la Ley 1122 de 2007 (definición de salud pública), que en su artículo 33, literal i, señala que el Plan Nacional de Salud Pública, creado por esta ley, incluye “los modelos de atención, tales como, salud familiar y comunitaria, atención primaria y atención domiciliaria” (Vega, 2009).
- c. En el Decreto 3039 de 2007, que regula el desarrollo del Plan Nacional de Salud Pública (página 56), y hace referencia a la APS dentro del marco de las Estrategias para mejorar la salud mental. La APS sigue quedando a “discrecionalidad de los entes territoriales” (Vega, 2009).

- d. Por la crisis que la Ley 100 produce en la salud pública, la OPS propone una estrategia en la cual la Salud Pública se entiende como “el conjunto de prácticas sociales e interdisciplinarias que posibilitan la intervención colectiva del Estado y de la sociedad civil para proteger y mejorar la salud de las personas” (Vega, 2009), que tiene como enfoque operativo las funciones esenciales de la salud pública (FESP).
- e. Aunque las FESP trascienden la idea de Externalidades Positivas para la Salud, tampoco incluyen la APS como parte de la salud pública. Ello, posiblemente, obedece a que la APS tiene un componente de atención médica a las personas, el cual no ha sido tradicionalmente incluido dentro de la salud pública, y, ante ello, la OPS y la OMS proponen la APS renovada, con ideas sobre cómo y en cuáles aspectos se puede avanzar en la articulación entre APS, salud pública y promoción de la salud.
- f. En el contexto de la APS renovada se pueden identificar experiencias significativas en ciudades como Bogotá y Medellín, y en regiones como el Valle del Cauca y Santander.
- g. Colombia, tras las imposiciones del Banco Mundial, es uno de los países que se orientan hacia un sistema de salud liberal o de competencia gerenciada, sobre lo cual las evidencias demuestran que no es un modelo positivo para la integralidad, la universalidad ni la equidad en salud. La lógica del mercado, a partir de la Ley 100 de 1993, arroja como resultado un sistema segmentado, fragmentado y de cobertura a APS vinculada al mercado, la competencia de servicios y la diversificación de las fuentes de financiación (Vega, 2009).

7. La Atención Primaria en Salud en Bogotá

En Bogotá existen algunos referentes de política pública distrital en los años ochenta y noventa del siglo XX, que hablan de la necesidad de poner en marcha una experiencia de atención primaria en salud (APS) para reducir las inequidades y fortalecer el sistema público en salud, y que cayeron en el olvido con la implementación de la Ley 100 de 1993 (Secretaría Distrital de Salud, 1991). En tal sentido, algunos autores coinciden en afirmar que con dicha ley diversas experiencias de desarrollo de la APS en el país fueron debilitadas, y se llegó, incluso, a censurar el término (Cardona, 2009).

La formulación del Plan Distrital de Desarrollo 2004-2008 “Bogotá sin Indiferencia” explicitó su compromiso con la garantía de los derechos humanos interdependientes. En coherencia con ese compromiso, el equipo de trabajo de la Secretaría Distrital de Salud diseñó una propuesta de política pública de salud que buscaba avanzar, específicamente, en la garantía del derecho a la salud en Bogotá.

Para ello, se tomó como punto de partida un balance de salud y de calidad de vida de las personas que habitan la ciudad y los problemas de la respuesta institucional en el contexto del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). En el balance se identifica a Bogotá como una ciudad más moderna, pero también más desigual, donde se destaca una inversión sostenida en infraestructura, cultura tributaria y ciudadana, aunque, igualmente, con graves problemas de desempleo, subempleo e informalidad, pobreza e indigencia, desplazamiento por el conflicto armado, incremento de enfermedades crónicas, infecciosas y por lesiones, y necesidades mayores y más complejas que reflejan profundas inequidades en salud: “Si bien los indicadores de salud de la población bogotana han mejorado de manera global, existen desigualdades enormes entre las localidades”. (Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital de Salud, 2004).

En este sentido, y en coherencia con el objetivo central del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá sin Indiferencia 2004-2008”, en términos de “construir las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos humanos establecidos en el pacto constitucional y en los convenios e instrumentos internacionales”. (Alcaldía Mayor de Bogotá-Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2004), se planteó como una prioridad sectorial avanzar en la garantía del derecho a la salud situando la disminución de la inequidad como asunto de interés transversal y en relación con la pobreza y la exclusión por situaciones o condiciones vinculadas al ciclo vital, al género, la etnia o la discapacidad.

Al considerar que la salud requiere tener en cuenta la calidad de vida de las personas y las opciones autónomas que conducen a ella, aun en situación de enfermedad o de discapacidad, la política de salud en el Distrito adopta una Estrategia Promocional de la Calidad de Vida y la Salud de las Personas que trascienda la simple atención y prevención de enfermedades, lesiones corporales o mentales. Esta perspectiva reconoce la naturaleza de derecho de la salud y la necesidad de la interacción permanente entre el sector salud y otros sectores del Estado, tanto como el papel de las personas y de las organizaciones sociales en la producción de la salud, en términos de calidad de vida (Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital de Salud, 2004).

En ese sentido, cuatro principios sustentan la política sectorial:

- a. La equidad, entendida como justicia social, y central en el propósito de la eliminación de los determinantes que permiten la existencia de diferencias injustas y evitables.
- b. La solidaridad, basada en la igualdad de la condición humana, y que permite ponerse en el lugar del otro y de la otra, sin importarnos cuál es el propio lugar.
- c. La autonomía, sustento del ejercicio de la libertad y de la autodeterminación de las personas, y que reconoce en cada uno al sujeto actuante que es, con todas las capacidades disponibles.
- d. El reconocimiento de las diferencias, que permite comprender y ajustar las decisiones públicas a la diversidad cultural, étnica, política, de género o de ciclo vital.

Para lograr dicha transformación, el sector salud integró sus acciones al Plan de Desarrollo Distrital a través de dos programas centrales y 11 proyectos de inversión. En el primero, denominado “Salud para la Vida Digna”, se destaca un proyecto prioritario: “Universalización de la Atención Integral en Salud”. En este proyecto se albergó el desarrollo del modelo de APS con enfoque familiar y comunitario, y llamado Salud a su Hogar, como una de las estrategias centrales para la universalización, junto con el componente de acceso a medicamentos esenciales y la regulación de la atención de urgencias, mediante la conformación de las redes de servicios y del Sistema de Emergencias Médicas.

Dentro de los diez proyectos restantes que permitirían dar cumplimiento al conjunto de objetivos, se destacan: los referidos al diseño de un sistema integrado de información de base local y con alcance distrital; el desarrollo de una estrategia de manejo de recursos que combina la administración de subsidios a la demanda del régimen subsidiado; el fortalecimiento de la red pública, de cara a las nuevas demandas que genere el desarrollo de la APS, y el inicio de un proceso de dignificación del talento humano en salud para mejorar la calidad del trabajo en el sector y propiciar el compromiso de los trabajadores y los profesionales con el imperativo de responder de la mejor manera posible a las necesidades de las personas (Alcaldía Mayor de Bogotá Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2004; Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital de Salud, 2004).

En el segundo programa, conocido como “Ciudadanía en Salud”, se plantea la idea de que la realización del Estado Social y Democrático de Derecho implica que las personas son sujetos de derechos y ejercen su autonomía en la apropiación de las decisiones y las acciones individuales y colectivas que les incumben. En tal sentido, la ciudadanía en salud se expresa tanto en la toma de decisiones relacionadas con los procesos de atención individual y colectiva como en la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas. El programa pretende fortalecer los espacios y los mecanismos de participación ciudadana y social en salud, pero también, favorecer el ejercicio de la autonomía de las personas y de las organizaciones sociales en el ámbito público relacionado con la salud, y tanto en la ciudad-región como en las localidades.

Así pues, para comprender la formulación de la APS debe entenderse que ella se enmarca dentro de un pensamiento articulador de la política sectorial, que la incluye, pero no se agota en ella, al tiempo que implica un ejercicio de articulación con el conjunto de programas de la política y un elemento inductor de la organización sistémica de los servicios de salud y su protagonismo dentro de un marco transectorial.

Entre las definiciones iniciales de la APS en Bogotá se destaca que para poner en marcha la estrategia (Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital de Salud, 2004) “Se propone un modo promocional de la calidad de vida y la salud que permita superar las restricciones del enfoque de los servicios hacia la enfermedad y la atención individual, y avance en una perspectiva colectiva de la salud, es decir, de una verdadera salud pública [...]”.

Esto significa un ordenamiento de todos los procesos, tanto sectoriales como transectoriales, tanto institucionales como sociales o comunitarios, tanto curativos como preventivos, educativos, protectores o de rehabilitación, tanto individuales como colectivos, hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el favorecimiento del ejercicio de su autonomía para la realización de sus proyectos de vida. Este modo promocional potencia la APS para garantizar el derecho a la salud, si se entiende por APS, siguiendo a Tejada Rivero, “el cuidado integral de la salud para todos y por todos” (OPS, 2003).

Esta opción implica pasar de un modo de atención basado en la enfermedad, donde predomina la gestión de los servicios curativos, se filtran las demandas y se identifican las necesidades de la población de manera fragmentada, al imperativo ético de responder a las necesidades sociales mediante un modelo de promoción de la calidad de vida y la salud, con un modo de gestión apropiado. Tal reto requiere comprender las esferas de la calidad de vida, en las que se expresan las necesidades sociales derivadas de los derechos humanos interdependientes (Negri, 2004; 2006):

- a. La esfera individual, en la que el valor ordenador es la autonomía, desplegada desde la capacidad de valerse por sí mismo, o autonomía funcional, hasta la posibilidad de lograr la suficiencia económica o de ejercer una opción política emancipadora.
- b. La esfera colectiva, cuyo valor central es la equidad, base de la redistribución.
- c. La esfera institucional, donde la transectorialidad, la integralidad y la democracia deben buscar la mayor eficacia social posible.
- d. La esfera subjetiva, donde se juega la construcción de los imaginarios sociales.
- e. La esfera ambiental, donde se construye la sostenibilidad.

7.1. Programa de territorios saludables durante la Bogotá humana (2012-2016)

El Plan de Desarrollo Distrital de la Bogotá Humana formuló el Programa Territorios Saludables, el cual define el desarrollo de subprogramas de salud ordenados por cada una de las etapas ciclos de vida y por situaciones/ condiciones diferenciales prioritarias en los micro territorios y territorios de Salud , con el fin de avanzar en la garantía del derecho a la salud para los y las ciudadanas del Distrito Capital, tomando como orientación la Estrategia de Atención Primaria en Salud Renovada (APS).

Estos subprogramas se desarrollaron en microterritorios y territorios de salud a través de las acciones en los ámbitos de vida cotidiana; esta guía operativa buscaba dar orientaciones metodológicas y temáticas respecto de las acciones a desarrollar por los y las técnicos y profesionales de los y equipos territoriales de APS (Equipos de Respuesta Inicial (ERI), los Equipos de Respuesta Complementaria (ERC), Equipo de gestión Equipo de vigilancia en salud pública) en el ámbito familiar, en la perspectiva de lograr la consolidación de “Familias Protectoras de la Salud y la Vida” con la finalidad de detectar, valorar, dar soporte y seguimiento a los problemas de salud del individuo, la familia y las colectividades, potenciando su autonomía y mejorando su calidad de vida.

La política territorial buscaba la Identificación de las condiciones y necesidades de salud de los individuos y los núcleos familiares; lo cual permitió determinar la vulnerabilidad familiar e individual. En esta etapa se elabora un Plan en el marco

del enfoque familiar, que motiva la asesoría familiar y que responde a la priorización (situación, condición y riesgo) de cada sujeto integrante de la familia.

También el Programa priorizó la atención inicial, cuyas acciones implicaron la valoración del riesgo en salud, la atención en casa (consulta resolutoria) y la remisión (canalización) a servicios según la necesidad identificada, dicha remisión podrá ser al ERC, a los servicios del Plan Obligatorio de Salud (POS).

Para lograr una política territorializada e integral de ATP renovada, era necesario promover una gestión Intersectorial, que permitiera la integración adecuada y eficiente de estrategias y recursos para lograr la cobertura adecuada y el cumplimiento de los propósitos de universalidad, integralidad y cobertura de la política de Salud.

7.2. La Salud Preventiva en el Plan de Desarrollo 2020-2024

El Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” el gobierno distrital ha atendido a más de 45 familias y a cerca de 67 mil personas en lo que va corrido del actual gobierno. El Modelo de atención denominado “equipos de atención en casa”, coordinado por la Secretaría Distrital de Salud, se centra en programas como, la prevención de la mortalidad y la desnutrición infantil, mortalidad materna y prevención del embarazo en adolescentes entre los 10 y 19 años, a través del Plan de Salud de intervenciones colectivas – PSPIC, que se materializan en los programas “Salud a mi barrio” y “salud a mi vereda”.

Sin embargo, el personal vinculado para la estrategia de salud preventiva se encuentran precarizados a través de contratos de prestación de servicios, lo cual implica que la estancia del personal es de corta duración con lo que se desaprovecha la experiencia y el saber acumulado.

Esta experiencia se puede consolidar, convirtiendo el Modelo de Atención Primaria en Salud, no solo en una prioridad de un gobierno, sino como un Acuerdo de Ciudad, a partir de la presente iniciativa.

Hoy el Distrito Capital cuenta con los recursos para implementar y organizar el Modelo de Atención Primaria en Salud, lo cual asegurará la permanencia en el tiempo y el fortalecimiento progresivo de las iniciativas actuales y las que se proponen en el desarrollo del presente Acuerdo.

8. Conveniencia del Proyecto de Acuerdo

Los aprendizajes derivados de 30 años de modelos de salud mercadocéntrico, sumados a los impactos negativos de la pandemia por COVID19, nos obligan a replantear la necesidad de estructurar un modelo de Salud preventiva, que garantice los principios de la Atención Primaria en Salud para todo el Distrito Capital, ello implica tres decisiones de ciudad estratégicas para lograr este propósito Común:

- 8.1. Redireccionar recursos del Sector hacia la Atención Primaria. Ello implica fortalecer las fuentes de financiación del sector para lograr el desarrollo de la atención desde los territorios, las familias y las comunidades.
- 8.2. Consolidar la Red Interinstitucional necesaria para la construcción del Modelo de Atención Primaria en Salud. Esta apuesta requiere de la competencia de entidades del nivel central y local, tanto del Distrito como de la Nación, para que la política de Atención Primaria logre ser un punto de convergencia de los esfuerzos y de esta manera se logre la focalización adecuada de recursos, políticas, y decisiones de la Administración.

- 8.3. Fortalecer las instancias de participación ciudadana y Comunitaria. Es necesario comprender este ajuste normativo, como el desarrollo de una visión de Estado Democrático y participativo, en el cual las comunidades hacen parte de la construcción colectiva de las decisiones y los arreglos institucionales; el nivel de participación de las comunidades será determinante para poder establecer el nivel de éxito del Modelo de Atención Primaria en Salud.

9. Competencia del Concejo de Bogotá D.C.

La facultad que le asiste al Concejo de Bogotá para crear el programa de Atención Primaria en Salud Renovada (APS) que se señalan en el articulado del Acuerdo son las siguientes.

Constitución Política de Colombia. Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. (...). Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: (...) 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan (...). Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Artículo 313. Corresponde a los concejos: (...) 9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio (...).

Decreto ley 1421 de 1993 Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Artículo 8. Funciones generales. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.

Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley: (...) 7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.

10. Impacto fiscal de la iniciativa

Este proyecto de acuerdo NO TIENE IMPACTO FISCAL, es decir, no requiere de más recursos de los que actualmente se presupuestan para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales establecidas al D.C. en materia de salud, educación, seguridad alimentaria, recreación y deportes, saneamiento ambiental y agua.

Como lo hemos expresado, actualmente la Administración Distrital desarrolla los programas y las metas de Salud Preventiva contenidas en el Plan de Desarrollo y las vigencias futuras autorizadas por el CONFIS; de lo que se trata no es de generar nuevos gastos sino de asegurar la permanencia en el tiempo de estas iniciativas, convirtiéndolas en Acuerdo de Ciudad.

Atentamente,

JOSE CUESTA NOVOA

Concejal de Bogotá

Autor

PROYECTO DE ACUERDO NO 114 DE 2025**PRIMER DEBATE****DEL PROYECTO DE ACUERDO Nro. ____ DE 2025**

“Por medio del cual se crea el modelo de Atención Primaria en Salud Renovada (APS), “Bogotá Saludable” a fin de garantizar el derecho a la salud de las y los ciudadanos en Bogotá D.C.”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.,

En uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el en el artículo 313 numeral 9 de la Constitución Política, los artículos 8 y 12, numeral 7 del Decreto- Ley 1421 de 1993, el numeral 2 del artículo 65 de la Ley 99 de 1993, artículo 32, numeral 7 de la Ley 136 de 1994, los artículos 2 y 3 de la Ley 1523 de 2012, artículos 2, 3, 9 y 12 de la Ley 1931 de 2018.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto crear el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) “Bogotá Saludable”, a fin de garantizar el derecho a la salud de las y los ciudadanos en Bogotá D.C.

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES. Para la adecuada aplicación de lo dispuesto en el presente Acuerdo, se adoptan las siguientes definiciones:

1. Atención Primaria Universal: Reconoce la salud como un derecho humano fundamental y lo que busca es articular las condiciones que contribuyen al bienestar de una comunidad con los servicios de salud desde la perspectiva de la cobertura territorial y poblacional de servicios de salud con un carácter preventivo.
2. Territorios Saludables: Son los territorios de la Ciudad en los cuales se implementará el Modelo de Atención Primaria en Salud “Bogotá Saludable.
3. Microterritorios Saludables: Es el territorio social en el que se encuentran hasta 50 mil familias, las Instituciones Educativas, las Unidades de trabajo formal e informal, las organizaciones comunitarias, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y de Servicios Sociales y las Instituciones de Protección que se encuentran en ese espacio vital.
4. Equipos Territoriales “Bogotá Saludable”: Son los Equipos interdisciplinarios que desarrollarán la implementación el Modelo de Atención Primaria a nivel territorial y microterritorial.
5. Familias Saludables: Familias beneficiarias y vinculadas a la implementación del Modelo de Atención Primaria en Salud Bogotá Saludable.

6. Comunidad Saludable: Espacios de participación comunitaria en la cual se construirán e implementarán los contenidos, políticas y Planes del Modelo de Atención Primaria en Salud “Bogotá Saludable”.

ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS RECTORES: son principios del Modelo de Atención Primaria en Salud “Bogotá Saludable”, los siguientes:

- a. La equidad, entendida como justicia social, y central en el propósito de la eliminación de los determinantes que permiten la existencia de diferencias injustas y evitables.
- b. La solidaridad, basada en la igualdad de la condición humana, y que permite ponerse en el lugar del otro y de la otra, sin importarnos cuál es el propio lugar.
- c. La autonomía, sustento del ejercicio de la libertad y de la autodeterminación de las personas, y que reconoce en cada uno al sujeto actuante que es, con todas las capacidades disponibles.
- d. El reconocimiento de las diferencias, que permite comprender y ajustar las decisiones públicas a la diversidad cultural, étnica, política, de género o de ciclo vital.

ARTÍCULO 4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Son Objetivos Específicos del Modelo de Atención Primaria en Salud “Bogotá Saludable”, los siguientes:

1. Fortalecer el conjunto de entidades, políticas, instrumentos, planes y proyectos necesarios para hacer realidad un Modelo de Atención de Salud Preventiva, en todas el Distrito Capital.
2. Fortalecer un marco normativo para garantizar los diagnósticos necesarios para establecer el estado del derecho a la Salud en el Distrito Capital.
3. Ejecutar acciones de Promoción y prevención en materia de salud, para la garantía y restitución del derecho a la salud, promover el desarrollo integral, el cuidado personal, el aprendizaje y las habilidades para la población priorizada en la ciudad de Bogotá D.C.
4. Garantizar la accesibilidad de los y las ciudadanas a los servicios de salud preventiva de forma universal y progresiva.
5. Desarrollar acciones para la construcción de ambientes saludables, accesibles e incluyentes para la población priorizada en el Distrito Capital a través de la gestión interinstitucional y transectorial.
6. Generar espacios de participación que contribuyan a la movilización social y el empoderamiento como sujetos activos en la toma de decisiones en salud.

ARTÍCULO 5.- APLICABILIDAD DEL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. Todas las acciones de las autoridades distritales, destinadas a la garantía del derecho de las y los bogotanos, deben aplicar el enfoque de derechos humanos. Este enfoque se aplica en el diseño, planeación ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación, de políticas, planes, programas y proyectos adelantados por el Distrito Capital sobre la materia.

ARTÍCULO 6.- CARACTERÍSTICAS. El modelo de Atención Primaria Renovada en Salud “Bogotá Saludable” tendrá las siguientes características:

1. Es un proyecto de ciudad, Lo cual significa que la cobertura incluirá a todas las localidades, poblaciones y estratos.
2. Contará con Equipos Territoriales “Bogotá Saludable”. Cada Equipo Teritorial contará a vez con Equipos microterritoriales, conformados de forma interdisciplinaria, por profesionales y técnicos del sector de la salud, el bienestar social y familiar y el trabajo social.
3. El modelo Atención Primaria “Bogotá Saludable”, contará con puestos y centros de salud y con equipos territorializados de forma permanente. La Secretaría de Saludo construirá los Equipos territoriales y microterritoriales, de acuerdo a las características que arrojen los diagnósticos realizados.

4. El Modelo es Participativo, lo que implica que se desarrollarán acciones orientadas a las familias, colegios, comunidades.
5. El Modelo es sistemático, así que en su desarrollo se irán integrando componentes de salud preventiva de acuerdo con las necesidades familiares y comunitarias para responder a los contextos específicos de los territorios y microterritorios.
6. El modelo es Científico. Así que consolidará procesos de conocimiento especializado, comunitario y cultural, de manera que logre articular saberes, prácticas científicas y comunitarias orientadas a fortalecer la salud preventiva.

ARTÍCULO 7.- EQUIPOS TERRITORIALES “BOGOTÁ SALUDABLE”: En cada localidad de Bogotá se creará un Equipo Interinstitucional e Interdisciplinario bajo la coordinación de la Secretaría de Salud, para la implementación del Modelo de Atención Primaria en Salud.

ARTÍCULO 8.- EQUIPOS MICROTERRITORIALES “BOGOTÁ SALUDABLE”: Por cada 50 mil familias o menos, se creará un Equipo microterritorial, Interinstitucional e Interdisciplinario bajo la coordinación de la Secretaría de Salud, para la implementación del Modelo de Atención Primaria en Salud.

ARTÍCULO 9.- ARREGLOS INSTITUCIONALES: El Distrito Capital adoptará los arreglos institucionales, financieros, operativos y administrativos que le permitan cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 10.- PUBLICACIÓN Y VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

H.C. José del Carmen Cuesta Novoa.
Autor

PROYECTO DE ACUERDO NO 115 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON CORREDORES DE BICICLETAS LIBRES DE DIESEL Y DE EMISIONES PERJUDICIALES PARA LA SALUD DE CICLISTAS EN EL DISTRITO CAPITAL, Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

1. OBJETO

El objeto del presente proyecto de acuerdo es establecer lineamientos para el diseño e implementación de corredores libres de diésel en la ciudad de Bogotá. El proyecto tiene como finalidad promover la creación de dichos corredores con el fin de reducir los niveles de exposición a material particulado a las poblaciones más vulnerables a éstos, como son los ciclistas y los peatones, a través de acciones preventivas, de mitigación y de control.

En este sentido, se plantea qué las calles deben ser seguras y accesibles para todos y el aire debe estar limpio y libre de emisiones nocivas, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ayudar a abordar la amenaza global del cambio climático.

El enfoque de estos corredores es el de priorizar que caminar, andar en bicicleta y el transporte compartido sean la forma en que la mayoría de los ciudadanos se mueven por nuestras ciudades. Este cambio hacia la movilidad de cero emisiones resultará en menos congestión y menos contaminación, al tiempo que hará que nuestras carreteras sean más silenciosas y el aire que respiramos más limpio.

Objetivos específicos:

1. Mejorar la experiencia del ciclista en la ciudad, a partir de decretos de diseño urbano sostenible, de reducción de contaminación y acceso a la información
2. Contribuir a la salud pública de la ciudad, disminuyendo la exposición de poblaciones vulnerables a material particulado

2. ATRIBUCIONES DEL CONCEJO

Este proyecto de acuerdo se sustenta en las atribuciones contempladas en el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1991 (numerales 1 y 7), al igual que en los numerales 1 y 9 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.

3. MARCO JURÍDICO GENERAL

El pasado 26 de julio de 2022, mediante resolución A/76/L.75, la Asamblea General de la ONU reconoció al ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano universal. Algo que ya había contemplado la Resolución 48/13 del 8 de octubre de 2021, expedida por el Consejo de Derechos humanos, pero que no contaba con el consenso

internacional¹⁰. Dentro de los considerandos del documento se reconoce la contaminación del aire como un factor que incide en su disfrute, de ahí la importancia de hacerle frente mediante la promoción de medios alternativos de transporte que no generen emisiones y condiciones para que las personas, que se movilicen en ellos, no padezcan –además– enfermedades.

Bajo estos lineamientos, el objetivo tercero (3°) de los ODS, que corresponde a la Agenda Urbana 2030 de la ONU, alude al deber de garantizar una vida sana a las personas, donde se promueva el bienestar para todas las edades. En este orden, el objetivo 9° de los ODS establece el impulso de infraestructuras sostenibles y de calidad que apoyen el desarrollo económico y la prosperidad humana. Es claro entonces, que la promoción de vías libres de agentes contaminantes en beneficio de biciusuarios y peatones se vincula a tales propósitos, y, por lo mismo, que se vincula con las atribuciones y funciones de este concejo en procura de la guarda y promoción de los derechos de los habitantes de la ciudad.

Se sabe que, junto a la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad, la polución es uno de los retos que afronta la humanidad en el presente siglo, por esto, este proyecto de acuerdo se apoya en la Ley 1972 de 2019, *“por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la salud y al medio ambiente sano estableciendo medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras disposiciones”*; y se inspira en mandatos de la Ley 1811 de 2016, *“por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el código Nacional de Tránsito”*, que busca incrementar la calidad y número de viajes en bicicleta, con el objeto de mitigar el impacto ambiental causado por emisiones de gases de efecto invernadero en la movilidad urbana.

En el ámbito constitucional, el proyecto de acuerdo se funda en los artículos 79, que contempla el derecho al ambiente sano, el 44 que desarrolla los derechos de los niños y niñas, el 49 que contempla el derecho a la salud, y 52 que alude a condiciones para el ejercicio del deporte.

Finalmente, este proyecto de acuerdo también se relaciona con el incentivo al uso de la bicicleta para funcionarios públicos del concejo de Bogotá, que se reguló mediante la Resolución 0788 de 2022.

4. Impacto fiscal

Esta iniciativa no tendrá un impacto fiscal por cuanto hace parte de los planes, programas y metas establecidas en el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”.

En el propósito 4° se alude a los ciclistas y peatones como ejes de un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible; mientras que en el propósito 2° se aborda la obligación de reducir la concentración de material articulado. En este sentido, el programa 35 desarrolla el manejo y prevención de la contaminación, donde se enfatiza en la reducción de la mortalidad por contaminación del aire; mientras que el programa 49 aborda la movilidad segura, sostenible y accesible, que incluye la mejora de la infraestructura.

Cordialmente,
JOSE CUESTA NOVOA
Concejal de Bogotá
Autor

¹⁰ La resolución se adoptó por 161 votos a favor y hubo 8 abstenciones: China, Rusia, Bielorusia, Camboya, Irán, Kirguistán, Siria y Etiopía.

PROYECTO DE ACUERDO NO 115 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON CORREDORES DE BICICLETAS LIBRES DE DIESEL Y DE EMISIONES PERJUDICIALES PARA LA SALUD DE CICLISTAS EN EL DISTRITO CAPITAL, Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.,**

En uso de las atribuciones Constitucionales y legales, en especial las contenidas en el en el artículo 313 numeral 9 de la Constitución Política, el artículo 8, numeral 7 del Decreto- Ley 1421 de 1993, el numeral 2 del artículo 65 de la Ley 99 de 1993, artículo 32, numeral 7 de la Ley 136 de 1994, los artículos 2 y 3 de la Ley 1523 de 2012, artículos 2, 3, 9 y 12 de la Ley 1931 de 2018

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°. OBJETO: El acuerdo es establecer lineamientos para el diseño e implementación de corredores libres de diésel en la ciudad de Bogotá; como una medida para reducir la exposición a material particulado de la población más vulnerable en la vía como lo son los peatones y ciclistas.

ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES: Para la adecuada aplicación de lo dispuesto en el presente Acuerdo, se adoptan las siguientes definiciones¹¹:

Corredores libres de diésel: son corredores viales, en su trazado no circulan vehículos que utilizan el diesel como fuente de energía.

Corredores Verdes. Son aquellos que soportan, o están destinados a soportar sistemas de transporte que comunican las principales zonas generadoras y atractoras de viajes de la ciudad y la región y que requieren, por su alto flujo de pasajeros, la segregación (elevada o subterránea o a nivel) de la infraestructura de transporte, para su uso exclusivo.

Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA). áreas determinadas del territorio donde se concentran acciones intersectoriales para mejorar progresivamente la calidad del aire y mitigar las emisiones de contaminantes atmosféricos y la disminución del riesgo en salud de las personas frente a la contaminación atmosférica.

Emisión: Cantidad de gases o partículas contaminantes del aire descargados a la atmósfera producto de una actividad humana o natural. Las fuentes contaminantes del aire más comunes en la ciudad son las industrias (fuentes fijas) y el tráfico vehicular (fuentes móviles). Las unidades más representativas se miden en g/km.

Concentración: Cantidad de gases o partículas contaminantes presentes en el aire ambiente. Esta cantidad representa la relación que existe entre la masa o el volumen de la sustancia y la unidad del volumen del aire en la cual esté contenida. Por ejemplo, la cantidad de material particulado en el aire normalmente se expresa en: µg de PM₁₀/m³ de aire.

¹¹Ciertas definiciones fueron extraídas del siguiente reporte: Rodríguez, M.H., Pinto, A.M., Bocarejo, J., Páez, D., Ortiz, M.A., Ramos, J.P., Sarmiento, O.L., Morales, R.A., Pacheco, J.M., Márquez, F., Franco, J.F., Vallejo, A.L., Quesada, C.V., Cantarella, J., & Binnatti, G. (2017). Cómo promover el buen uso de la bicicleta: Exposición del ciclista en ámbito urbano: Diagnóstico y recomendaciones.

Exposición personal - a gases Relación entre la cantidad, o concentración, de un contaminante en un espacio o ambiente específico, y el tiempo que la persona pasa en dicho ambiente. Para el caso de un ciclista urbano, la exposición estará determinada por la concentración media de material particulado en inmediaciones de las vías por donde circule y el tiempo de duración de su recorrido.

Dosis potencial. Cantidad de gases o partículas contaminantes que ingresan al cuerpo de la persona. Está en función de tres elementos fundamentales: La concentración de exposición, tasa de inhalación (que depende del tipo de actividad que se realice) y tiempo.

ARTÍCULO 3°. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN para la delimitación de los corredores libres de Diesel: la Administración Distrital tendrá en cuenta los siguientes criterios para la priorización y asignación de los corredores libres de diésel:

1. Vías cuyo flujo vehicular se mueve de norte-sur-norte, qué son los corredores con peor flujo de aire en la ciudad.
2. Vías con alto flujo de ciclistas y vehículos a diésel, especialmente aquellos qué tengan obras de infraestructura en ejecución.
3. Vías con perfiles viales compactos, edificios en altura y calles estrechas.
4. Vías con porcentajes bajos de precipitación.
5. Vías con alto flujo de vehículos de carga.
6. Vías con poca o ninguna arborización.
7. Trayectos de conectividad crítica para la mayoría de ciclistas generando alternativas libres de diesel, en una parte o la totalidad del trayecto.

ARTÍCULO 4°. LINEAMIENTOS: Las Secretarías Distritales de Movilidad y Ambiente, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación -SDP-, elaborarán y adoptarán lineamientos y protocolos para la identificación, reconocimiento, gestión, monitoreo, operación y administración de corredores libres de diesel en Bogotá. Para este efecto, contarán con el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedición del presente Acuerdo, garantizando de manera amplia la participación ciudadana.

Para la definición de los corredores libres de diésel, la administración distrital deberá atender los siguientes lineamientos:

1. La exposición de los ciclistas en el trayecto a los exostos de los vehículos de diésel y el nivel de tráfico de bicicletas en dichos corredores será una determinante para la construcción y la definición del trazado de nuevas ciclorrutas en la ciudad.
2. Se deberán identificar alternativas de movilidad para ciclistas, que prioricen su salud, a partir de estudios técnicos de calidad del aire en corredores de alta demanda de ciclistas, estudios de tráfico, cambio de patrones y trazado alternativos permanentes o temporales qué sustituyan completamente o parcialmente las ciclorutas existentes y disminuya la exposición de ciclistas a material particulado generados por vehículos a diésel o por obras en las vías.
3. Los estudios deberán incluir la posibilidad de establecer a lo largo de los corredores libres de diésel áreas libres de vehículos motorizados o ciertos tipos de vehículos como camiones, o buses a diésel, qué incentiven el uso de vehículos no contaminantes, y mejorar la calidad del aire para los ciclistas.

4. Para habilitar e identificar estos corredores se deberá incluir a los ciclistas, colectivos ciclistas, y académicos a través de la implementación de procesos participativos que contemplen medidas temporales o pilotos para la mitigación de los impactos de la calidad del aire.
5. Si el cambio de trazado de la ciclovía es posible se deberá tomar en cuenta en los nuevos trazados una buena calidad de la malla vial, continuidad de la misma y la iluminación apropiada para ciclistas.
6. En caso que después de haber realizado los estudios de tráfico y trazado alternativos no se pueda reubicar en su totalidad o parcialmente la ciclovía o se pueda desincentivar el uso por parte de vehículos a diésel, la administración buscará:
 - colaborar con proveedores, operadores de flotas y empresas que circulen en los corredores libres de diésel para acelerar el cambio a vehículos con cero emisiones motorizados y no motorizados e incentivar la eco-logística, y así reducir la exposición de los ciclistas a contaminantes.
 - Priorizar el diseño de ciclovías segregadas que contengan elementos para la mitigación de la contaminación auditiva y de exposición a material particulado a partir del uso de arbolado público, vegetación y otras medidas de mitigación estructural, no estructural y soluciones basadas en la naturaleza.
 - priorizar la adquisición de vehículos de cero emisiones para nuestras flotas urbanas lo más rápido posible, teniendo en cuenta que alguno de los corredores de bicicletas más usados están a lo largo de las troncales de Transmilenio y no podrán ser reemplazados

Parágrafo: Teniendo en cuenta que los corredores libres de diésel son en su mayoría proyectos temporales de mitigación de los impactos de los gases atmosféricos en los ciclistas, el Distrito Capital armonizará los corredores libres de diesel con la figura de corredores verdes y Zonas Urbanas por un Mejor Aire previstas en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, considerando que los corredores más exitosos podrían ser implementados permanentemente bajo estas figuras. Explicar mejor, cuál será entonces la denominación prevalente?

ARTÍCULO 5°. ZONAS PILOTO: En los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de este acuerdo, se implementarán corredores piloto libres de diésel.

Hasta tanto se efectúe el reconocimiento de dichos corredores, las autoridades distritales adelantarán todas las medidas para garantizar la integridad, de zonas que cuenten con las condiciones para ser consideradas como corredores libres de diesel, en el marco de las construcción de las nuevas troncales de Transmilenio, priorizando la implementación de pilotos en los corredores de la Av 68, la Carrera Séptima y la Av Ciudad de Cali.

Parágrafo 1: Durante la implementación del piloto se deberá evaluar el riesgo de cargas que recaería sobre los residentes de otras áreas como resultado de la política, como desplazamiento de la contaminación o pérdida de inversión

ARTÍCULO 6°. MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA CICLISTAS Se realizarán campañas sobre el impacto de la calidad del aire en la salud pública.

1. Se harán procesos de divulgación sobre las alternativas de movilidad y se acompañarán con campañas sobre el impacto de la calidad del aire en la salud.

2. Se brindarán máscaras antipolución en el marco de una campaña de pedagogía sobre el impacto de la calidad del aire en los ciclistas
3. La política Pública de Movilidad de Cero y Bajas Emisiones deberá establecer un sistemas de monitoreo y seguimiento en el espacio público de la calidad de aire en los corredores de mayor tráfico de ciclistas y peatones de la ciudad. La localización de estos puntos de medición de calidad del aire y difusión se definirá con los ciclistas.
4. Se incluirá en la aplicación Mapas Bogotá Bici, la posibilidad de planear el viaje en bicicleta teniendo en cuenta la calidad del aire a lo largo de las ciclorrutas de la ciudad.
5. Se propenderá por construir ciclo-infraestructuras inclusivas para todo tipo de bicicletas, bicicletas urbanas, de carga y triciclos, entre otros, para evitar que estas bicicletas tengan que bajarse de la ciclo ruta.
6. Se ahondará esfuerzos para incentivar y apoyar la reconversión energética de las bicicletas y bicitaxis de motor a gasolina.

ARTÍCULO 7. PUBLICACIÓN Y VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

JOSE CUESTA NOVOA
Concejal de Bogotá
Autor

PROYECTO DE ACUERDO NO 116 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE FOMENTA LA SENSIBILIZACIÓN Y ADOPCIÓN EN LA SIEMBRA DE ÁRBOLES POR PARTE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BOGOTÁ”

1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

Esta iniciativa tiene como objetivo específico sensibilizar y fomentar la siembra de árboles en las instituciones educativas en Bogotá, con el fin de culturizar a las nuevas generaciones en el cuidado y protección del medio ambiente.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO

| PROYECTO | PONENTES | PONENCIA |
|--|--|--|
| Proyecto de Acuerdo 395 “Por medio del cual se fomenta la sensibilización y adopción en la siembra de árboles por parte de los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas en Bogotá” | N/A | Archivado |
| Reenumerado 568 | H.C. Juan Daniel Oviedo Arango (Coordinador) y H.C. Quena María Ribadeneira Miño | Ponencia conjunta positiva con modificaciones |
| Reenumerado 816 | H.C. Juan Daniel Oviedo Arango (Coordinador) y H.C. Quena María Ribadeneira Miño | <i>Ponencia conjunta positiva con modificaciones</i> |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

2. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN

La presente iniciativa tiene como finalidad sensibilizar a los niños y niñas desde temprana edad para fomentar la siembra de árboles y cuidar la flora y fauna de la capital.

De igual forma, este proyecto, contribuye a mitigar las consecuencias generadas por el cambio climático, por ello, se deben realizar estrategias que contribuyan a la reforestación y recuperación de la flora y fauna de las zonas urbanas y rurales de la ciudad.

Es indispensable trabajar en este factor, crucial de la ciudad, del país y del mundo, es esencial continuar y fortalecer la educación hacia una cultura de respeto, protección y cuidado de la flora y fauna, así como de los bosques, arboles, ríos, humedales de la capital.

Crear conciencia y fomentar disposiciones en los jóvenes de Bogotá para participar en iniciativas de reverdecimiento a través de políticas en sus colegios, es crucial por varias razones. Primero, los jóvenes son los futuros custodios del medio ambiente, y su involucramiento temprano puede cultivar un sentido de responsabilidad y compromiso con la sostenibilidad. Además, integrar estas políticas en el ámbito educativo asegura que los estudiantes no solo reciban conocimientos teóricos sobre ecología y sostenibilidad, sino que también participen activamente en prácticas que benefician su entorno inmediato.

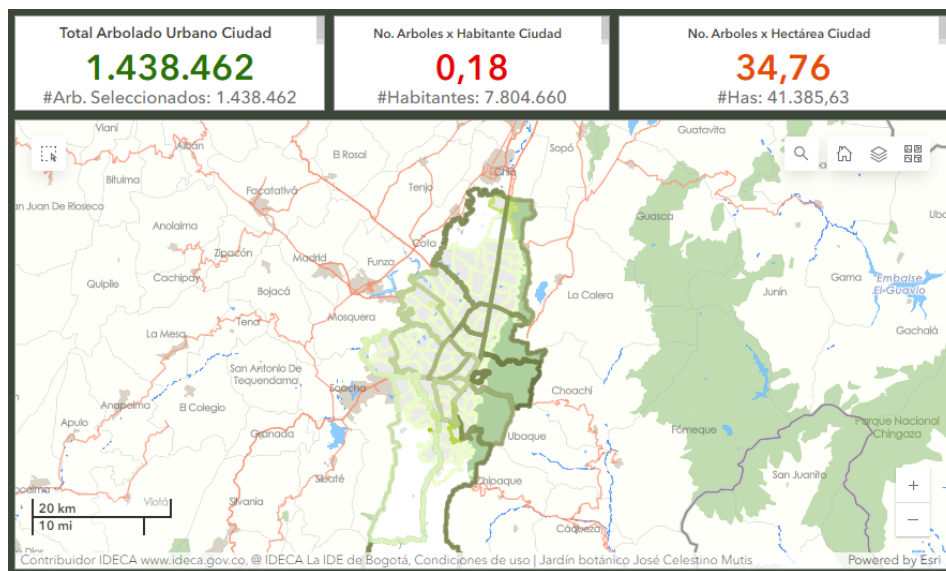
Incluir políticas ambientales en el currículo escolar, sienta un precedente importante para la integración de la sostenibilidad en otras áreas de la vida cívica y gubernamental. Esto puede inspirar a los jóvenes a convertirse en líderes y defensores del medio ambiente en sus futuras profesiones y comunidades, amplificando el impacto positivo en toda la ciudad de Bogotá y más allá. Por lo tanto, es fundamental que se desarrollen y promuevan

políticas que fomenten la participación juvenil en el reverdecimiento de Bogotá desde una etapa temprana en sus vidas educativas.

La ONU Hábitat señala que: “Los árboles desempeñan un papel importante en el aumento de la biodiversidad urbana, proporcionando plantas y animales con un hábitat, alimentos y protección favorables”¹² Así mismo, indica los grandes beneficios que tiene para la salud, el bienestar y la vida de los ciudadanos.

2.1 ARBOLES POR LOCALIDAD

Si bien es cierto, que en la ciudad según el Observatorio Ambiental hay 1.438.462 de arbolado Urbano en la ciudad, también es cierto que necesitamos enverdecer la ciudad en las diferentes zonas que lo requieren, por ello, educar a los niños, niñas y jóvenes desde las instituciones educativas es fundamental con el fin de culturizar a las nuevas generaciones en la siembra responsable.



¹³**Fuente: Observatorio Ambiental 2023**

¹² <https://onuhabitat.org.mx/index.php/siete-grandes-beneficios-de-los-arboles-urbanos>

¹³ <https://oab.ambientebogota.gov.co/localidades-con-mayor-numero-de-arboles/#:~:text=Seg%C3%BAAn%20el%20Jard%C3%ADn%20Bot%C3%A1nico%20de,18%20%C3%A1rboles%20en%20per%C3%ADmetro%20urbano.>

Según las estadísticas en la ciudad hay 0.18 árboles por número de habitantes y 34,76 por hectárea, lo que demuestra la necesidad de implementar estrategias desde las instituciones educativas para fomentar la siembra de árboles en la ciudad y sensibilizarlos en el cuidado del medio ambiente.

2.3 ESTRATEGIAS PARA TOMAR CONCIENCIA, SENSIBILIZAR Y EDUCAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS

- Sensibilizar y educar desde edad temprana sobre la importancia de la siembra de árboles, el cuidado de los recursos y el medio ambiente.
- Realizar actividades con la comunidad educativa sobre la importancia de la siembra de árboles y la protección del entorno en que se desarrolla.

2.4 CIUDADES MÁS VERDES DEL MUNDO

Algunas ciudades del mundo le han apostado a ser más amigables y sostenibles con el medio ambiente, para muchos países enverdecer la ciudad es fundamental e implementar estrategias que contribuyan no solo a mitigar el cambio climático, sino también para mejorar el bienestar, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

Estas ciudades cuentan con “espacios con bajos niveles de contaminación ambiental y gases de efecto invernadero, promueven prácticas de construcción ecológicas y sostenibles y sus ciudadanos se educan y actúan en de acuerdo con criterios pro ambientales. Sin embargo, no todas las ciudades se benefician de estar ubicadas en áreas que pueden albergar vegetación o parques públicos”¹⁴.

Reducir la contaminación en la ciudad debe ser una prioridad, por lo tanto, implementar nuevas zonas verdes y arboladas tanto en las calles como en parques que embellezca la ciudad es una necesidad.

¹⁴ <https://victormochere.com/es/top-20-greenest-cities-in-the-world>

2.5 LAS CIUDADES MÁS VERDES DEL MUNDO.

| Rango | Ciudad | % de espacios verdes públicos |
|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. | Oslo, Noruega | 68.00% |
| 2. | Singapur, Singapur | 47.00% |
| 3. | Sydney, Australia | 46.00% |
| 4. | Viena, Austria | 45.50% |
| 5. | Chengdu, China | 42.30% |
| 6. | Zürich, Suiza | 41.00% |
| 7. | Shenzhen, China | 40.90% |
| 8. | Nanjing, China | 40.67% |
| 9. | Helsinki, Finlandia | 40.00% |
| 10. | Hong Kong, China | 40.00% |
| 11. | Estocolmo, Suiza | 40.00% |
| 12. | Roma, Italia | 38.90% |
| 13. | Los Ángeles, Estados Unidos | 34.70% |
| 14. | Londres, Reino Unido | 33.00% |

¹⁵Fuente: Las 20 ciudades más verdes del mundo en 2024

¹⁵ <https://victormochere.com/es/top-20-greenest-cities-in-the-world>

2.6 CASOS SENSIBILIZACIÓN Y SIEMBRA DE ÁRBOLES EN BOGOTÁ Y LA SABANA

En la ciudad de Bogotá a continuación se puede evidenciar algunos casos de siembra de árboles por parte de instituciones educativas:

1. HUMEDALES ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.¹⁶

JORNADAS DE PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE ÁRBOLES

Siembra de árboles / Estas jornadas buscan que quienes estén interesados en procesos de arborización, puedan participar en la siembra y plantación de árboles de especies nativas en diferentes humedales y reservas a las afueras de Bogotá. Hemos plantado cerca de 25.000 árboles en los últimos tres años con diferentes empresas y ciudadanos. Algunos de estos programas para plantar árboles, se pueden de manera individual, cualquier ciudadano que quiera contribuir, podrá hacerlo, al igual que los grupos de personas, de empresas, universidades, colegios, etc. que quieran contribuir con procesos de reforestación son bienvenidos.

Queremos también, que ustedes sean parte del crecimiento de los árboles a través de nuestros planes de mantenimiento a largo plazo. El objetivo es que, por medio de un equipo de biólogos e ingenieros especializados, se certifique el diseño de siembra adecuado, abono, agua, cercado, controles de plagas y pasto, con el fin de garantizar los primeros años de vida del árbol. El equipo puede hacer seguimiento de sus árboles, por medio de visitas a las reservas o por imágenes e informes que la Fundación enviará periódicamente.

Además de los beneficios ambientales que ofrecen estas jornadas, las empresas e instituciones contarán con beneficios sostenibles corporativos como Certificado de donación - según lo establecido en el artículo 125 del Estatuto Tributario, Ejecución propia de impuestos e Imagen sostenible de su organización, apoyando eventos de transformación social y ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Dichas donaciones darán lugar a un descuento del impuesto sobre la renta y complementarios, equivalente al 25% del valor donado en el año o período gravable.

Siembra de árboles / Plantación de árboles

Siembra de árboles en Bogotá y la sabana de Bogotá

Programas de plantación y siembra de árboles



¹⁶¹⁶ ht <https://humedalesbogota.com/plantacion-de-arboles/#>

¹⁷ Fuente: Fundación humedales Bogotá



ECO Diciembre- siembra de árboles y actividades ambientales

¹⁸ Fuente: Fundación Humedales Bogotá

Día del Árbol – Jornada de Siembra

COLEGIO CRISTO REY BOGOTÁ

Fecha 02/05/2023



En el marco de la Celebración del Día del Árbol, el viernes 28 de abril los estudiantes del Colegio Cristo Rey Bogotá sembraron árboles en diferentes zonas verdes de la Institución.

Durante la actividad, organizada por el PRAE (Proyecto Ambiental Escolar), se sembraron las siguientes especies: Feijoa, Pino Colombiano, Peros, Mano de Oso, Cayeno y Durazno.

¹⁷ <https://humedalesbogota.com/plantacion-de-arboles/#>

¹⁸ <https://humedalesbogota.com/plantacion-de-arboles/#>

Fuente: Colegio Cristo Rey Bogotá

BUSCAN ESPACIOS EN DÓNDE SEMBRAR ÁRBOLES EN BOGOTÁ

El Jardín Botánico abrió una convocatoria para que los ciudadanos propongan zonas verdes, parques o sectores en barrios que sean propicios para mejorar los entornos y el arbolado urbano.



Cualquier ciudadano puede postular espacios públicos, institucionales o privados. Imagen de referencia.

Foto: Cortesía corpomacarena

En busca de espacios verdes y parques en Bogotá, el Jardín Botánico abrió una convocatoria para que la ciudadanía proponga zonas públicas, institucionales y privadas donde se puedan plantar uno o más árboles en la ciudad.

Para ello el Distrito pide a los interesados tener en cuenta lugares que se encuentren dentro del perímetro urbano, que no haya más árboles a menos de cinco metros a la redonda y que puedan recibir luz en la mayoría de sus costados.

Por otro lado, pide verificar que el punto a plantar no presente riesgos de inundación o elementos que puedan interferir con su crecimiento, como señales, postes, canecas, bancas, cables de servicios, tanques o redes de agua. Los interesados deben enviar un correo a bogotareverdece@ibb.gov.co en el que se señale el nombre de la persona o el grupo que lo solicita, un número de contacto, dirección, barrio y localidad, para que posteriormente, el grupo arborización se contacte y haga la plantación.

Durante el año pasado, el Distrito sembró 53.184 árboles en la ciudad, mientras que en tres viveros cuenta con 226.486, de los cuales 149.536 están disponibles para plantar y 76.950 se encuentran en desarrollo.

Pese a esto, en los últimos días se han avivado las críticas con respecto a los permisos de tala en el parque el Virrey (16 árboles), que presentaban riesgo en el canal, y otros 28 sobre la avenida Suba para dar paso a la ampliación de las estaciones de Transmilenio.

"La alcaldesa Claudia López y esta Administración estamos absolutamente comprometidos con eliminar la tala indiscriminada, sin embargo, hay algunos casos que después de hacer unos procesos de discriminación técnica, con el apoyo, el trabajo y el diálogo de la sociedad civil nos lleven a reducir el impacto de estas intervenciones", dijo al respecto la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

¹⁹ Fuente: Diario el Espectador

¹⁹ <https://www.elespectador.com/bogota/buscan-espacios-en-donde-sembrar-arboles-en-bogota-article/>

2.7 CASOS A NIVEL NACIONAL

VALLEDUPAR

Realizaron siembra de árboles en colegio de Valledupar 28 noviembre, 2023



Como parte de su modelo de sostenibilidad y de su compromiso continuo con la responsabilidad ambiental, Gases del Caribe, en colaboración con la institución educativa Milciades Cantillo Costa de Valledupar, llevó a cabo una siembra de árboles nativos de la región.



Con el fin involucrar a las nuevas generaciones con el cuidado de la biodiversidad y embellecer los espacios de aprendizaje, la compañía sembró 38 ejemplares de Cafaguate y mango en dicha institución, asimismo, otros 38 se sembrarán el próximo 29 de noviembre en institución educativa Consuelo Araujo Noguera para un total de 76 nuevos árboles para la ciudad.

«Esta actividad va más allá de sembrar árboles; es sembrar conciencia ambiental en las mentes jóvenes», destacó Alfonso Orozco, Gerente de Gases del Caribe zona Cesar. «Nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y la calidad del aire de los vallenatos es continuo. Esta iniciativa es una forma tangible de contribuir a un futuro más sostenible».

Cabe destacar, que las especies fueron seleccionadas por su capacidad para adaptarse al entorno local y por sus significativos beneficios ambientales.

La iniciativa cuenta con el respaldo legal de la Ley 2173, que promueve la restauración ecológica a través de la siembra de árboles y la creación de bosques en el territorio nacional. Además, se ajusta a la Resolución 0215 de CORPOCESAR, que establece criterios técnicos para la siembra, y al Decreto 01084 del 2023 de la Alcaldía de Valledupar, que reglamenta y promueve la restauración ecológica a través de las áreas de vida.

Es importante mencionar que esta siembra se suma al aporte económico que realizó la compañía para la adquisición de los buses del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar. Los automotores que operan 100% a gas natural también contribuyen con la óptima calidad del aire y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Valledupar.

²⁰Fuente: El País Vallenato

²⁰ <https://www.elpaisvallenato.com/2023/11/28/realizaron-siembra-de-arboles-en-colegio-de-valledupar/>

BUCARAMANGA

Con siembra de árboles y pedagogía ecológica en los colegios del área metropolitana, este cinco de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente



A través de la cultura ambiental, el Área Metropolitana busca establecer un contacto sano y respetuoso con la naturaleza.

#5dejunio | El Área Metropolitana junto a la Policía Ecológica, estudiantes de cuatro colegios y los parqueros celebra este 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente 2019, que tendrá como lema especial "la lucha contra la contaminación del aire". A las 8:30 de la mañana inicia la celebración de la fecha ecológica más importante del año en las instalaciones del Colegio Tecnológico Dámaso Zapata, con actividades de cultura ambiental del AMB conjuntamente con la Policía Metropolitana,

estudiantes y personal académico, incluida la entrega de un jardín con 3 mil durantas.



También en horas de la mañana, en la autopista Floridablanca-Piedecuesta serán plantados otros 150 árboles de guayacán y gualanday a cargo del grupo de parqueros del AMB, para llegar a una cifra de siembra de 8 mil 400 individuos arbóreos desde el primero de octubre del año 2018, dentro del Plan Forestal Metropolitano.

²¹ Fuente: Área Metropolitana de Bucaramanga

²¹ <https://www.amb.gov.co/con-siembra-de-arboles-y-pedagogia-ecologica-en-los-colegios-del-area-metropolitana-este-cinco-de-junio-celebramos-el-dia-mundial-del-medio-ambiente/>

1. MARCO JURIDICO

EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE PARQUES NACIONALES Y OTRAS AREAS PROTEGIDAS, celebrado el 30 de septiembre al 6 de octubre de 2007. Denominado “Conservación, Integración y bienestar para los pueblos de América Latina”²²

“SAN CARLOS DE BARILOCHE – PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI– PATAGONIA ARGENTINA 1 DECLARACIÓN DE BARILOCHE. Los más de dos mil doscientos participantes en este Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas, celebrado en Bariloche entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre del 2007, personificamos una amplia gama de variados intereses: gestores de áreas protegidas, representantes de gobiernos nacionales y locales y de organismos de integración regional, organizaciones civiles dedicadas a la conservación de la naturaleza y desarrollo social, organizaciones internacionales, representantes de pueblos indígenas y de comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, científicos y académicos, así como empresarios privados; igualmente, compartimos una preocupación y un compromiso común.

Apreciamos y agradecemos los esfuerzos realizados por la Administración de Parques Nacionales de Argentina, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Redparques, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y su Comisión Mundial de Áreas Protegidas, así como de todas las organizaciones e individuos que contribuyeron a hacer realidad este Congreso facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias como también la discusión de nuestras preocupaciones y aspiraciones con respecto a nuestras áreas protegidas.

Reconocemos que las áreas protegidas de la región, como parte de nuestra herencia natural y cultural, son instrumentos indispensables para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y para elevar el bienestar de nuestros pueblos, al mismo tiempo que aportan soluciones a las principales

²² [Microsoft Word - DECLARACI%C3%93N_DE_BARILOCHE1.doc \(parquesnacionales.gov.co\)](#)

problemáticas ambientales globales. Alcanzar dicho reconocimiento constituye una necesidad urgente y un gran reto para todos.

Reafirmamos que la región Latinoamericana tiene carácter de acreedora ambiental de los países desarrollados. Reconocemos que después de una década de haber realizado el Primer Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas en la ciudad de Santa Marta, Colombia, del 21 al 28 de mayo de 1997, se ha propiciado una serie de importantes eventos que marcan pautas en la agenda internacional sobre áreas protegidas:

- La adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio durante la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Milenio (Nueva York, Estados Unidos de América, septiembre del 2000) que establece objetivos e indicadores prioritarios para el desarrollo; SAN CARLOS DE BARILOCHE – PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI – PATAGONIA ARGENTINA

(...)

- El V Congreso Mundial de Parques de la UICN (Durban, Sudáfrica, septiembre del 2003) que adoptó el Acuerdo de Durban y el Plan de Acción de Durban para las áreas protegidas;

(...)

- El I Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas (Managua, Nicaragua, 2003) y el II Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas (Ciudad de Panamá, Panamá, abril del 2006) que han establecido pautas y recomendaciones para fortalecer las áreas protegidas de la región.

(...)

- El IV Congreso Mundial de Guardaparques, Australia, 2003; • El V Congreso Mundial de Guardaparques, Escocia, 2005; • El Congreso Iberoamericano de Guardaparques, Chile;
- Las ratificaciones de los países del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169 OIT, Ginebra, 1989.

(...)

Promover el reconocimiento del rol primordial de los guardaparques y demás trabajadores de la conservación en la protección de las áreas protegidas, de sus recursos naturales y culturales. Incentivar y promover, desde el sector público y privado, la consolidación de la Red Latinoamericana de Guardaparques a través de una plataforma virtual de intercambio experiencias, aprendizaje y de generación de capacidades 20. Facilitar y promover el intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas sobre la planificación y manejo de áreas protegidas tanto a nivel regional como internacional, mediante el trabajo en redes y la utilización de sistemas de información y comunicación que permitan el uso y acceso a una amplia gama de usuarios.

Ahora bien, la Constitución Política de Colombia, señala lo siguiente:

ARTICULO 8o. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

La Ley 2173 de 2021,²³ “Por medio de la cual se promueve la restauración ecológica a través de la siembra de árboles y creación de bosques en el territorio nacional, estimulando conciencia ambiental al ciudadano,

²³ [LEY 2173 DE 2021 \(uin-juriscol.gov.co\)](http://uin-juriscol.gov.co)

responsabilidad civil ambiental a las empresas y compromiso ambiental a los entes territoriales; se crean las áreas de vida y se establecen otras disposiciones.

Artículo 1°. Objeto. La presente busca establecer la creación de Áreas de Vida y creación de bosques en cada uno de los municipios del país, con participación activa de toda la población en la restauración y conservación ecológica del territorio, a través de la siembra de árboles para la creación de bosques y el aumento de la cobertura vegetal, con el trabajo conjunto de las empresas y las entidades competentes.

Parágrafo 1°. Las autoridades municipales serán garantes de la creación de estas áreas.

Parágrafo 2°. Lo contenido en la presente Ley debe ajustarse a lo previsto en el artículo 322 de la Ley 1955 de 2019, en donde los programas de reforestación propuestos por el Gobierno nacional deberán dar prioridad a la siembra de árboles nativos con esquemas de georreferenciación.

Parágrafo 3°. Entiéndase por restauración ecológica el proceso de asistencia al restablecimiento de la estructura y función de un ecosistema, sus recursos bióticos y abióticos y los servicios ecosistémicos asociados, a un estado lo más cercano a las condiciones previas a su alteración o degradación.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente Ley establecerá las directrices generales para la creación del Área de Vida, la cual estará a cargo de las Alcaldías con la guía de las Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones de Desarrollo Sostenible, las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos a las que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a los que hacen alusión las Leyes 768 de 2002 y la 1617 de 2013 y Parques Nacionales Naturales, según su respectiva jurisdicción. Estas deberán destinar un porcentaje del territorio municipal para promover la siembra, el manejo, el mantenimiento y el monitoreo de especies de árboles, por parte de los ciudadanos y las empresas, quienes, por su labor, serán reconocidos por las autoridades, en el marco de acciones de promoción del desarrollo sostenible en el país.

Artículo 3°. Área de vida. Es la zona definida y destinada por los municipios para los programas de restauración por medio de la siembra de árboles, previstos en la presente Ley. Esta área comprenderá, preferiblemente, los nacimientos de agua, rondas hídricas, humedales, áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la reserva de Biosfera del Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, OMEC, demás áreas que comprenden la estructura ecológica principal de los municipios y demás áreas de importancia ambiental, la cual deberá estar incluida en el Registro Único de Ecosistemas y Áreas ambientales (REAA). La ciudadanía y las empresas que participen en los programas de restauración a través de siembra de árboles en las áreas de vida, serán reconocidos con un certificado que establece la presente Ley.

Para obtenerlo, deberán sembrar especies nativas que cumplan con las características de especie, piso térmico, fitosanidad, suelo y demás requisitos que establezca en coordinación con la autoridad ambiental nacional, regional y municipal, de la mano con las alcaldías.

Parágrafo 1°. La autoridad ambiental correspondiente según su respectiva jurisdicción, en conjunto con las alcaldías municipales o distritales, deberán articular las Áreas de Vida a lo establecido en los instrumentos de planificación del territorio y con ello, levantar censos forestales con el fin de conocer la cobertura vegetal del territorio y su respectivo estado de conservación, previa aplicación de lo establecido en la presente Ley. Adicionalmente, estos censos deberán hacerse cada cinco años, con el propósito de monitorear las Áreas de Vida de que trata la presente Ley.

Parágrafo 2°. Dentro de los programas de restauración ecológica a través de siembra de árboles, será obligatoria la siembra de especies nativas que estimulen la recuperación y conservación de los ecosistemas de forma diferenciada, de acuerdo con las condiciones ambientales y ecológicas del territorio, manejadas bajo el principio de sostenibilidad en el uso de los recursos naturales.

Parágrafo 3°. Las Secretarías de Planeación, o quien haga sus veces, acogiendo a los conceptos técnicos expedidos por la autoridad ambiental competente según su jurisdicción, establecerán las zonas de siembras en procura de potenciar y restaurar zonas de importancia ecológica para el municipio, las cuales, de acuerdo a la viabilidad técnica y social, se podrán establecer como zonas de protección

dentro de la estructura ecológica principal del municipio, dentro de su Plan de Ordenamiento Territorial.

Con La Ley 2173 de 2021²⁴ sobre la siembra de árboles en nuestro país es una iniciativa que busca fomentar la sostenibilidad y protección del medio ambiente. Con la creciente preocupación por el cambio climático y la degradación de los ecosistemas, esta ley se ha convertido en una herramienta clave para promover la reforestación y conservación de los bosques.

Es una normativa que busca promover la siembra de árboles en Colombia como una estrategia para mitigar los efectos del cambio climático y conservar los bosques naturales del país. Esta ley establece la obligación de las entidades públicas, empresas y particulares de llevar a cabo proyectos de reforestación y restauración de áreas degradadas.

La siembra de árboles consiste en plantar árboles en lugares donde han desaparecido debido a la tala indiscriminada, la urbanización y otros factores que han ocasionado la deforestación en Colombia. La siembra de árboles es una actividad fundamental para el medio ambiente, ya que los árboles son una fuente de oxígeno, contribuyen a la regulación del clima y son el hogar de muchas especies animales.

Establece que todas las entidades públicas, empresas y particulares que realicen actividades que generen impacto ambiental deben compensar la pérdida de árboles y bosques, a través de la siembra de nuevos árboles. Además, la ley establece que las empresas y particulares deben llevar a cabo proyectos de reforestación y restauración de áreas degradadas.

RESOLUCIÓN 3158 DE 2021,²⁵(Septiembre 20), *“Por la cual se actualizan e incluyen nuevos factores para el cálculo de la compensación por aprovechamiento forestal de árboles aislados en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C. y se adoptan otras determinaciones”*

²⁴ [Ley 2173 siembra de árboles - Colombia Verde](#)

²⁵ [Resolución 3158 de 2021 Secretaría Distrital de Ambiente \(alcaldiabogota.gov.co\)](#)

Que los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política consagran la obligación de proteger las riquezas naturales de la Nación, el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental.

Que conforme al numeral 2 del artículo 65 de la Ley 99 de 1993, corresponde a los municipios y/o distritos, dictar las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico.

Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, establece que los municipios y distritos de más de un millón (1.000.000) de habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo aplicable al medio ambiente urbano.

Que corresponde a la Secretaria Distrital de Ambiente “*orientar y liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diversidad e integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales distritales y la conservación del sistema de áreas protegidas, para garantizar una relación adecuada entre la población y el entorno ambiental y crear las condiciones que garanticen los derechos fundamentales y colectivos relacionados con el medio ambiente*”, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Distrital 109 de 2009.

Que los literales (f), (g) y (x) del artículo 5 del precitado Decreto Distrital 109 de 2009, señala dentro de las funciones de la Secretaría Distrital de Ambiente: “... (f) formular y orientar las políticas, planes y programas tendientes a la investigación, conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos; (g) promover planes, programas y proyectos tendientes a la conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal y del recurso hídrico, superficial y subterráneo y (x) trazar los lineamientos ambientales de conformidad con el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial y el plan de gestión ambiental, en materias como la elaboración de normas referidas al ordenamiento territorial y las regulaciones en el uso del suelo urbano y rural.”

Que el artículo 3 del Acuerdo Distrital 327 de 2008, dispone como medida de Protección del Arbolado de la Ciudad, que se deberán diseñar los protocolos de restauración y compensación ecológica, así como las medidas para el mantenimiento y sostenimiento de las especies en vía de extinción, individuos de interés público, cultural, histórico, de potencial reproductivo y/o ecológico que se encuentren en espacio público o privado de la Ciudad.

Que el Acuerdo Distrital 435 de 2010, establece lineamientos para ampliar la cobertura arbórea en parques y zonas verdes de equipamientos urbanos públicos.

Que con la expedición del Decreto 531 de 2010, modificado y adicionado por el Decreto 383 de 2018, norma actual que reglamenta en el Distrito Capital lo relacionado con la arborización, aprovechamiento, tala, poda, trasplante o reubicación del arbolado urbano; se establece en su artículo 20 los lineamientos para la compensación por tala de arbolado urbano, indicando el seguimiento y verificación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente de las obligaciones de compensación señaladas en los permisos o autorizaciones de tala o aprovechamiento de árboles aislados, así:

“La Secretaría Distrital de Ambiente definirá la compensación que debe hacerse por efecto de las talas o aprovechamientos de árboles aislados, expresada en equivalencias de individuos vegetales plantados -IVP- por cada individuo vegetal talado, indicando el valor a pagar por este concepto. Para los setos y cercas vivas la Secretaría Distrital de Ambiente establecerá los criterios de manejo que cumpla con los lineamientos de espacio público y definirá las compensaciones correspondientes.”

Que en ese sentido, el principio de planificación y el deber de prevención y control de los factores ambientales frente a los recursos naturales renovables, de que trata el artículo 80 de la Constitución Política de 1991, exige a las autoridades ambientales como administradora del patrimonio natural de la Nación, la adopción de medidas progresivas que garanticen la disponibilidad y conservación del recurso natural que se ve afectado por las acciones antrópicas de las diversas actividades económicas.

Que, el Acuerdo [761](#) de 2020 “*POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”*”, incluye dentro de su política ambiental del Plan Distrital de Desarrollo, el Programa 33. Más árboles y más y mejor espacio público, el cual determina como objetivo “*(...) Reverdecer la ciudad para reducir su vulnerabilidad frente a la crisis climática, a través de la plantación de individuos vegetales y jardinería en la zona rural y urbana e intervención del espacio público, propendiendo por el mantenimiento de lo generado y lo existente usando como instrumento el fortalecimiento de las actuaciones de evaluación, seguimiento, control y prevención, mediante el uso de Sistemas de Información confiables y accesibles (...)*”

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

“ARTÍCULO 313. Corresponde a los Concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

[...]

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

En segundo lugar, el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá - estipula que:

“ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

[...]

7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente”

7.. IMPACTO FISCAL.

La Ley 819 de 2003 “*Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones*” en su artículo 7 establece:

"Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Cordialmente,

RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA
Concejal de Bogotá

JUAN JAVIER BAENA MERLANO
Concejal de Bogotá

JUAN MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ
Concejal de Bogotá

CRISTINA CALDERÓN RESTREPO
Concejal de Bogotá

JESÚS DAVID ARAQUE MEJÍA

FERNANDO LÓPEZ GUTIÉRREZ

Concejal de Bogotá

DAVID HERNANDO SAAVEDRA MURCIA
Concejal de Bogotá

Concejal de Bogotá

JUAN DAVID QUINTERO
Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 116 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE FOMENTA LA SENSIBILIZACIÓN Y ADOPCIÓN EN LA SIEMBRA DE ÁRBOLES POR PARTE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BOGOTÁ”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º. OBJETO. El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto fortalecer la educación, participación y sensibilización a la comunidad estudiantil del distrito sobre la importancia de la plantación de árboles y sus beneficios al medio ambiente para mitigar el cambio climático, fortaleciendo el compromiso ambiental en las actuales y futuras generaciones de la ciudad.

ARTÍCULO 2º. LINEAMIENTOS. Establecer los lineamientos para la formulación “Política Pública sobre educación ambiental en el Distrito Capital” sobre la importancia de la plantación de árboles por parte de los estudiantes de educación preescolar, básica y media.

2.1. Formular e implementar una política con una visión pedagógica, participativa que fortalezca el acceso a la enseñanza y aprendizaje en materia ambiental, de los estudiantes en educación preescolar, básica y media.

2.2. El representante ambiental elegido dentro de las instituciones educativas se encargará de liderar iniciativas, en coordinación con los demás miembros de la comunidad educativa para planear, estructurar y ejecutar las acciones y lugares escogidos para la plantación de los árboles.

2.3. Se desarrollará alianzas estratégicas con la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico con las instituciones educativas del Distrito, sobre la metodología a desarrollar para lograr este objetivo.

ARTÍCULO 3°. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Educación del Distrito en coordinación con las instituciones del Distrito propenderá por:

- a.** Fortalecer a través de actividades pedagógicas la importancia de desarrollar una visión ecológica para el desarrollo de actividades sostenibles en los estudiantes y generaciones futuras.
- b.** En aras de afrontar el cambio climático que es un problema tan grave especialmente para las nuevas generaciones, se debe incorporar en el currículo escolar temas como la conservación de la biodiversidad, la gestión de los recursos naturales y el cambio climático
- c.** Se deben promover acciones tendientes a integrar a los estudiantes en la conservación y cuidado del medio ambiente como lo es la realización de programas y concursos de reciclaje, bancos de semillas, divulgar folletos sobre el cuidado del medio ambiente, entre otras acciones para mitigar los efectos del cambio climático.
- d.** Las instituciones educativas del distrito para fortalecer la educación ambiental podrán apoyarse de las instituciones dedicadas a la conservación del medio ambiente, que, junto con el Jardín Botánico y la Secretaría Distrital de Ambiente, obtendrán los recursos, la metodología y los planes necesarios para el enseñar a los estudiantes en educación preescolar, básica y media.

ARTÍCULO 4°. AUTONOMÍA ESCOLAR. Las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo se implementarán respetando la autonomía de las instituciones educativas del Distrito.

ARTÍCULO 5°. VIGENCIA. El presente Acuerdo Distrital rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas que sean contrarias.

PUBLÍQUESE, EXPLÍQUESE Y CÚMPLASE

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- <https://onuhabitat.org.mx/index.php/siete-grandes-beneficios-de-los-arboles-urbanos>
- <https://oab.ambientebogota.gov.co/localidades-con-mayor-numero-de-arboles/#:~:text=Seg%C3%BAAn%20el%20Jard%C3%ADn%20Bot%C3%A1nico%20de,18%20%C3%A1rboles%20en%20per%C3%ADmetro%20urbano.>
- <https://victormochere.com/es/top-20-greenest-cities-in-the-world>
- <https://victormochere.com/es/top-20-greenest-cities-in-the-world>
- <https://humedalesbogota.com/plantacion-de-arboles/#https://humedalesbogota.com/plantacion-de-arboles/#https://humedalesbogota.com/plantacion-de-arboles/#>
- <https://www.elespectador.com/bogota/buscan-espacios-en-donde-sembrar-arboles-en-bogota-article/>
- <https://www.elpaisvallenato.com/2023/11/28/realizaron-siembra-de-arboles-en-colegio-de-valledupar/>
- <https://www.amb.gov.co/con-siembra-de-arboles-y-pedagogia-ecologica-en-los-colegios-del-area-metropolitana-este-cinco-de-junio-celebramos-el-dia-mundial-del-medio-ambiente/>
- [Microsoft Word - DECLARACI%3%93N DE BARILOCHE1.doc](#)
[\(parquesnacionales.gov.co\)](#)
- [LEY 2173 DE 2021 \(suin-juriscal.gov.co\)](#)
- [Ley 2173 siembra de árboles - Colombia Verde](#)
[Resolución 3158 de 2021 Secretaría Distrital de Ambiente \(alcaldiabogota.gov.co\)](#)